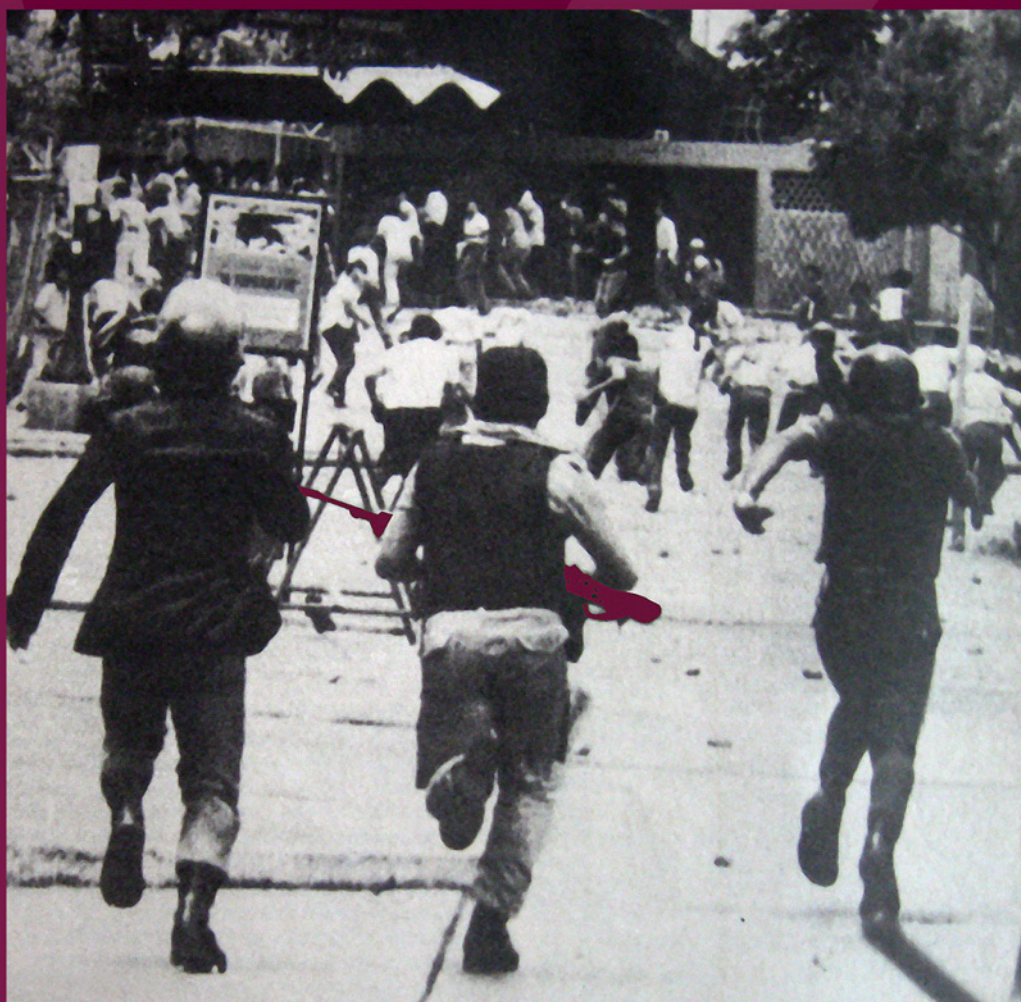


Protesta estudiantil y represión en Venezuela 1983-1993

Yasmín Rada Aragol/ Orlando José Contreras



**PROTESTA ESTUDIANTIL
Y REPRESIÓN EN VENEZUELA
1983-1993**

Colección Bicentenario

LA LUCHA POR LA INDEPENDENCIA CONTINÚA

Yasmín Rada
Orlando Contreras

**PROTESTA ESTUDIANTIL
Y REPRESIÓN EN VENEZUELA
1983-1993**



ARCHIVO GENERAL NACIONAL
DE LA NACIÓN DE HISTORIA

Caracas, 2010

Francisco Sesto
Ministro del Poder Popular para la Cultura

Pedro Calzadilla
Viceministro para el Fomento de la Economía Cultural

Carmen Bohórquez
Viceministra de Cultura para el Desarrollo Humano

Benito Irady
Viceministro de Identidad y Diversidad Cultural

Ada Lucila Morán
Directora del Centro Nacional de Historia

Luis Felipe Pellicer
Director del Archivo General de la Nación

Consejo Editorial

Carmen Bohórquez
Luis Felipe Pellicer
Pedro Calzadilla
Eileen Bolívar
Ada Lucila Morán
Marianela Tovar
Alexander Torres
Eduardo Cobos
Jonathan Montilla
Simón Andrés Sánchez
Yvo Castillo

©Archivo General de la Nación; Centro Nacional de Historia, 2010
Yasmín Rada Orlando Contreras, *Protesta estudiantil y represión en Venezuela. 1983-1993*

Editorial

Coordinación editorial: Felgris Araca
Diseño portada: Aarón Lares
Texto de contraportada: Juan Calzadilla
Imagen de portada: *Revista Élite*. Año LVII. Nro. 3.002. Caracas 19 de abril de 1983-
Hemeroteca Nacional.
Diagramación: Orión Hernández
Corrección: Yanuva León
Edición digital: Grafismo Ink
Lugar de edición: Caracas, Venezuela

ISBN: 978-980-7053-06-8
Depósito Legal: lf i80020109001898

*A Carmen Teresa Curvelo (†)
y Priscila del Carmen Contreras (†)
con amor.*

Índice general

INTRODUCCIÓN	11
I. CRISIS Y MASACRE	17
LA GRATUIDAD BAJO AMENAZA	24
ENCANTADOR DE SERPIENTE.....	30
“MI TRIUNFO ES TAMBIÉN UN TRIUNFO DEL GOBIERNO”	34
LA GOTTA QUE DERRAMÓ EL TAZÓN.....	37
METRALLA EN LOS CUERPOS.....	39
DE VÍCTIMAS A VICTIMARIOS.....	42
ENTRE VITUPERIOS Y ACLAMACIONES.....	48
II. DE MÉRIDA A EL AMPARO	57
¿DESCONTENTO SOCIAL O PLAN SUBVERSIVO?.....	57
GASES QUE INFLAMAN	67
LA HUELGA DE HAMBRE CONTRA LA REPRESIÓN	74
LA HISTORIA CONTINÚA	78
REPRESIÓN ACADÉMICA Y BRUTALIDAD POLICIAL	82
EL PRESUPUESTO EN EL BANQUILLO.....	89
EL AMPARO: UN CIERRE CON BROCHE DE BALA.....	91

III. PAQUETE ECONÓMICO Y REPRESIVO	101
“EL ESTADO YA NO ES EL AFLUENTE DE RECURSOS ABUNDANTES”..	102
LA CORONACIÓN DEL MESÍAS.....	106
BOMBAS SÓLO MATA GENTE.....	107
PAQUETE INCENDIARIO.....	111
¿POBRES CONTRA RICOS?	114
GOBIERNO CONTRA ESTUDIANTES.....	121
POR EL MEDIO PASAJE ESTUDIAN'TIL.....	126
LAS SOLUCIONES DEL GOBIERNO.....	134
A BARRER QUE VIENE BUSH	136
EL ASESINATO COMO SOLUCIÓN	141
IV. GOLPES Y DESTITUCIÓN.....	149
PALO CONTRA LOS ENCAPUCHADOS.....	149
“MUERAN LOS GOLPISTAS”	156
¿RECTIFICACIÓN O RENUNCIA?	162
¡FUERA CAP!.....	166
NUEVOS MILITARES GOLPEAN.....	171
DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES PARA UN FINAL	173
CONCLUSIÓN.....	177
FUENTES	179

INTRODUCCIÓN

La protesta estudiantil en la Venezuela contemporánea ha sido, como en el resto del mundo, un fenómeno histórico relacionado con momentos de profundas crisis políticas y sociales. Durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, con la llamada generación del 28, los estudiantes universitarios irrumpieron en la escena política para protestar en contra del régimen gomecista. Posteriormente, tras la muerte del dictador, fueron emblemáticas las jornadas de manifestaciones estudiantiles en contra de la permanencia de esa estructura política en la gestión de Eleazar López Contreras.

En tiempos de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, con la ilegalización del movimiento estudiantil, la resistencia contra el régimen se cristalizó en la huelga universitaria iniciada el 21 de noviembre de 1957, fecha que luego del derrocamiento de la dictadura se convirtió en el Día del Estudiante Universitario, por decreto del presidente de la Junta de Gobierno, Edgar Sanabria.

Cuando se inició la lucha armada en contra del recién instaurado régimen del Pacto de Punto Fijo, las filas del frente guerrillero estuvieron acompañadas de un gran número de estudiantes y las universidades se convirtieron en el apoyo que surtía de alimentos y todo tipo de ayuda a la insurrección, por lo que durante los gobiernos de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Rafael Caldera no cesaron los

hostigamientos contra dirigentes estudiantiles y los allanamientos a las universidades.¹

Durante los años de la supuesta paz democrática y la llamada bonanza petrolera las universidades y los centros de educación media se convirtieron en epicentros de los debates políticos sobre problemas nacionales, internacionales y académicos. Mientras eso ocurría, un grupo de estudiantes universitarios y de educación media ingresaban en las filas del frente guerrillero Américo Silva que, aún con la pacificación, se mantenía en pie de lucha en contra del régimen del Pacto de Punto Fijo.

En octubre de 1982, durante el gobierno de Luis Herrera Campins, este grupo recibió un duro golpe, al ser sorprendido en Cantaura, estado Anzoátegui, por un equipo de policías y militares que llevan a cabo la denominada Operación Tenaza, con la que masacraron a veintitrés activistas del frente guerrillero, entre los que se encontraban once estudiantes.² Este hecho que se conoce como “la Masacre de Cantaura” significó una fuerte estocada para el movimiento estudiantil, el cual se mantuvo alejado de las luchas políticas violentas hasta marzo de 1987.

Con la crisis económica de 1983, que marcó el inicio del desmoronamiento del sistema puntofijista, las universidades públicas fueron las primeras perjudicadas. El presupuesto destinado a la educación superior se restringió dando paso a una intensa discusión en torno a la nueva forma de financiamiento de este sistema. Las autoridades de casas de estudio como la Universidad Simón Bolívar, Universidad de Los Andes y la Universidad Simón Rodríguez entre otras, emprendieron medidas como el cobro de matrícula, la eliminación

1 Ejemplo de ello fue el allanamiento y cierre de la Universidad Central de Venezuela en octubre de 1969 por órdenes de Rafael Caldera.

2 Diego Alfredo Carrasquel de 28 años, María Estévez Arranz de 27 años, Emperatriz Guzmán Cordero de 36 años, Jorge Becerra Navarro de 20 años, Mauricio Tejada de 24 años, Luis Gómez de 19 años, Julio Farías Mejías de 20 años, Nelson Pacín Collazzo de 23 años, Enrique Márquez Velásquez de 32 años, José Núñez de 29 años, Baudilio Herrera Veracierta de 18 años e Ildemar Morillo de 23 años.

de las becas y el aumento en los servicios estudiantiles de comedor y transporte universitario, dejando en entredicho la gratuidad de la educación superior.

El intento de implantación de esas medidas en la Universidad Central de Venezuela (UCV) dio origen a los sucesos acaecidos en el peaje de Tazón el 19 de septiembre de 1984. En esta fecha un grupo de estudiantes de la Facultad de Veterinaria y Agronomía del núcleo de Maracay secuestró cinco autobuses de la Dirección de Transporte con la intención de trasladarse a Caracas para protestar frente al Consejo Universitario. Por órdenes del ministro de Relaciones Interiores de entonces, Octavio Lepage, quien fue avisado por Edmundo Chirinos, quien era rector de la UCV, los autobuses fueron detenidos en la alcabala de Tazón por efectivos de la Guardia Nacional, y en una tentativa por romper el cerco de seguridad que se les había impuesto, los estudiantes resultan abaleados. Aunque no se registraron muertos, este hecho recibió el nombre de “Masacre de Tazón” y mantuvo a estudiantes de diversas universidades del país en protestas de calle durante varios días, en contra de la represión.

Ya para inicios de 1987 el ánimo popular estaba caldeado, producto del desmejoramiento de la calidad de vida al que había conducido la crisis económica de 1983. En ese contexto ocurrió el asesinato del estudiante de la Universidad de Los Andes (ULA) Luis Carvallo Cantor, el 13 de marzo de ese año. Este homicidio se convirtió en el detonante de intensas jornadas de violentas protestas estudiantiles, que fueron acompañadas por una no menos violenta represión policial.

Al asesinato de Carvallo se sumó el aumento del transporte público decretado el 27 de abril de 1987, que desató durante todo ese año una cadena de protestas estudiantiles signadas por violentos enfrentamiento con los cuerpos policiales, asesinatos de estudiantes, huelgas de hambre, tomas de embajadas en solicitud de apoyo internacional y marchas pacíficas con participación popular. El gobierno se defendía alegando que en el país estaba planteado el resurgimiento de la subversión de la década de 1960, con lo que justificó la represión de la mayoría de las manifestaciones estudiantiles.

Cerca de finalizar el año 1988, después de una breve y tensa calma del movimiento estudiantil, por motivo de la firma de algunos acuerdos entre sectores universitarios y representantes del Ejecutivo Nacional, los estudiantes volvieron a tomar las calles en protesta por el asesinato de los catorce pescadores del estado Apure, conocido como la “masacre de El Amparo”.

En diciembre de ese año, en medio de ambiciosas promesas electorales que estimularon la esperanza popular, ganó los comicios presidenciales con un margen del 52.9% de los votos Carlos Andrés Pérez, para el período 1989-1994. Sin embargo, doce días después de su juramentación, dio a conocer a la opinión pública su programa de gobierno que incluía un conjunto de medidas económicas que llamó Gran Viraje, dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) de corte abiertamente neoliberal, con las que se pretendía mejorar la capacidad de pago de la deuda externa.

Los estudiantes universitarios estuvieron entre los primeros en denunciar los alcances negativos que tendrían las medidas económicas dictadas por Pérez. En menos de una semana de su anuncio, los precios de la cesta básica, los servicios públicos y el transporte colectivo aumentaron, lo que estimuló un descontento popular generalizado que dio origen a la rebelión civil más importante del siglo xx venezolano, conocida como El Caracazo.

Los años que siguieron a este estallido social estuvieron signados por reiteradas protestas populares en las que los estudiantes representaron un papel estelar. En ese ambiente de protestas la capucha se convirtió en la única garantía de seguridad de los manifestantes, dado los niveles de represión de los organismos de seguridad del Estado.

Todo lo anterior daba muestras de un progresivo desgaste del sistema político. A la luz de esa situación un grupo de militares intentó dar un golpe de Estado para derrocar al presidente Pérez el 4 de febrero de 1992. Este hecho aceleró el proceso de inestabilidad y descomposición política que desde 1983 experimentaba el puntofijismo. A partir de esa fecha y hasta noviembre del mismo año, cuando ocurre un segundo intento fallido de derrocar al gobierno por la vía

militar, los estudiantes universitarios y de educación media, junto a sectores populares, se convirtieron en el principal adversario político del presidente Pérez.

Los partidos políticos del sistema, incluido Acción Democrática y algunos intelectuales de renombre como el dr. Arturo Uslar Pietri, comenzaron a cuestionar la gestión del gobierno, mientras en las calles los estudiantes junto al pueblo, protagonizaban violentas manifestaciones en exigencia de la renuncia de Pérez. Desde comienzos de 1993, se acentuó el proceso de investigación, iniciado el año anterior, que involucraba al gobierno en el manejo dudoso de doscientos cincuenta millones de bolívares de una partida secreta tomada días antes de la liquidación de la Oficina de Régimen de Cambios Diferenciales (RECADI).

A solicitud del fiscal general de la República, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) inició la discusión sobre la viabilidad de enjuiciar al presidente por presunto delito de malversación de fondos del Estado, lo que se cristalizó con la decisión del antejuicio de mérito en su contra anunciado el 20 de mayo de 1993, motivo por el cual éste debió separarse del cargo. La presidencia fue asumida, como lo dictaba la Constitución Nacional de 1961, por el presidente del Congreso de entonces, Octavio Lepage.

El movimiento estudiantil y el pueblo celebraron en las calles la decisión de la CSJ, y luego de ocho días es designado como presidente provisional de la República el historiador Ramón J. Velásquez, hasta la elección en diciembre de 1993 de Rafael Caldera como nuevo presidente de la República. Durante los meses de la presidencia provisional, la sensación de superación de la crisis política sumergió al movimiento estudiantil en una calma que contribuyó al cese de las tensiones callejeras que desde 1987 se habían experimentado en el país.

En virtud de lo anterior, el presente trabajo se centra en la protesta estudiantil y la represión del Estado hacia este sector, que se desarrolló en Venezuela entre los años de 1983 y 1993, época que se ha catalogado como el período de crisis del sistema puntofijista.

I. CRISIS Y MASACRE

Previo al análisis de la influencia que tuvo la crisis de 1983 en las universidades públicas, es necesario precisar en qué consistió, qué la produjo y cuáles fueron en esencia sus antecedentes más cercanos. Diversas y complejas fueron las causas que llevaron a Venezuela a la debacle económica en 1983. Entre ellas está el “endeudamiento” del país con la banca internacional desde mediados de la década de 1970, en momentos en que se contaba con abundantes recursos monetarios por el ingreso petrolero.

A pesar del aumento en los precios del barril de petróleo, la deuda externa ascendió estrepitosamente durante los años de bonanza. De hecho, Víctor Fajardo y Miguel Lacabana, al referirse a la crisis de 1983 y al endeudamiento con la banca exterior, afirman: “El asomo a la crisis aparece entre 1977-1978 por el desequilibrio espectacular de las transacciones corrientes externas, pero no irrumpió porque se dispuso de abundantes préstamos externos que compensaron la caída sostenida de los ingresos petroleros previos a 1979.”³

El endeudamiento externo del país mostró un alza de gran significación durante los gobiernos de Carlos Andrés Pérez (1974-1979)

3 Fajardo, Víctor y Lacabana, Miguel. *Desequilibrio externo y políticas económicas de ajuste*. En: Mommer, Bernard y Nissen, Hans-Peter (Coord.)... Ob. Cit. p. 96.

y Luis Herrera Campins (1979-1984), con relación a los gobiernos anteriores del período puntofijista, pues, en 1973, culminando el gobierno de Rafael Caldera, la deuda llegó a ser de seiscientos millones de dólares, para alcanzar en 1979, finalizado el mandato de Pérez, la cantidad de veintitrés mil millones de dólares, y al final del gobierno de Herrera Campins en 1984 ascender a los treinta y seis mil doscientos millones de dólares.⁴

El aumento de la deuda externa de seiscientos millones a treinta y seis mil doscientos millones de dólares en veinte años parece inexplicable, si se toma en cuenta que durante los gobiernos de Pérez y Herrera Campins el ingreso petrolero fue el más alto de toda nuestra historia hasta ese momento.

Diego Bautista Urbaneja al referirse a este hecho apunta que:

[...] el Estado venezolano se endeudaba aceleradamente. Cada entidad y organismo autónomo de los muchos que tenía el Estado sobreexpandido, solventaba sus apuros financieros contrayendo prácticamente sin control del gobierno central, préstamos con una banca internacional, que por su parte estaba buscando desesperadamente a quién prestarle dinero.⁵

Las razones que llevaron al endeudamiento del país con la banca internacional, tienen su explicación en el sostenimiento del sistema político, soportado en la estabilidad monetaria, como lo afirma Urbaneja, para quien el endeudamiento del país respondió a la esencia misma del puntofijismo, cuando señala que:

Las razones por las cuales los organismos estatales atravesaban una difícil situación financiera que los lleva a endeudarse, era una combinación

4 Fundafuturo. *Cuando Venezuela perdió el rumbo. (Un análisis de la economía venezolana entre 1945 y 1991)*. Caracas, Ediciones Cavendes, 1992, p. 104.

5 Urbaneja, Diego Bautista. *La política venezolana desde 1958 hasta nuestros días*. Caracas, Fundación Centro Gumilla, 1997 p. 49.

de factores como los siguientes: exceso de personal, inducido por el uso del empleo como recompensa política o como instrumento para crear empleo artificialmente, por razones de estabilidad política; imposibilidad de reducirlo por razones punto-fijistas; precios distorsionados de los bienes y servicios, mantenidos artificialmente bajos por el mismo tipo de razones, ineficiencia general de la institución en cuestión, producto de todo lo anterior [...]⁶

Otro elemento que incidió en la crisis de 1983 fue la llamada fuga de divisas. La situación de bonanza vivida durante la segunda mitad de la década de 1970, ocasionó —a modo de ver de diversos economistas— una sobrevaluación del bolívar que desde inicios de 1970 se había mantenido en bs. 4,30 por dólar. Este precio propició una sensación de fortaleza de la moneda nacional. Los años del dólar a bs. 4,30 son recordados popularmente con frases como “en Venezuela no hay nada más barato que un dólar”, o “Miami está barato, dame dos” en alusión a la cultura que se generó entre los venezolanos de clase media que viajaban con frecuencia a los Estados Unidos para comprar bienes materiales.

Manuel Caballero, en su libro *Las crisis de la Venezuela contemporánea*, al reflexionar sobre lo ocurrido en 1983, indica:

Eran los ‘alegres viajeros’ que con los bolsillos repletos de petrodólares abarrotaban varias veces por día los vuelos a Miami, donde todo les resultaba más barato y donde todo lo compraban por pares. En esas condiciones, comprar en el extranjero no se veía como una catástrofe sino como un hábito.⁷

En la Venezuela de aquellos años la adquisición de dólares no constituía ningún tipo de dificultad. Sin embargo, a partir de 1982, las

6 Ibidem., pp. 49-50.

7 Caballero, Manuel. *Las crisis de la Venezuela contemporánea*. Caracas, Monte Ávila Editores Latinoamericana, 1998, p. 129.

naciones industrializadas iniciaron una racionalización de la energía, propiciando la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos y, en consecuencia, un desbalance económico que causó la desestabilización del bolívar con relación al dólar.

Esta disparidad del bolívar con respecto al dólar estimuló que quienes compraban dólares en el país a bs. 4,30 lo guardaran o invirtieran en el exterior. Este proceso se había iniciado tanto en Venezuela como en el resto de América Latina desde principios de la década de 1970, pero durante los últimos años esa tendencia estuvo en permanente ascenso.

El peso real de la fuga de divisas se vio reflejado en las reservas internacionales que mermaron a niveles tales de poner al gobierno en la necesidad de transferir dinero de la industria petrolera (PDVSA) al Banco Central de Venezuela (BCV) con el objeto de disminuir el déficit. Urbaneja ilustra la situación de la fuga de capitales de la siguiente forma:

[...] el que tuviera bolívares para comprar baratísimos dólares, ponerlos a ganar en un banco norteamericano intereses superiores a los que ganaban aquí sus bolívares o —cuando las tasas de interés internas superaron a las internacionales— poner sus ahorros a salvo de lo que pudiera ocurrir con el bolívar sobreevaluadísimo en un país de errática conducción, lo hizo. El resultado fue que a lo largo de 1982 y hasta febrero de 1983, salieron del país unos trece mil millones de dólares.⁸

Sin embargo, se señala que el estímulo a esta fuga de divisas fue promovido por el mismo gobierno, con el objeto de atenuar las presiones inflacionarias que generarían una devaluación monetaria.

Finalmente, la tercera causa de la crisis de 1983 fue la caída de los precios internacionales del petróleo en 1982. Las naciones

8 Urbaneja, Diego Bautista... Ob. Cit. p. 51.

industrializadas resolvieron racionalizar su consumo de energía, aplicando tecnologías alternas que disminuyeron el consumo de hidrocarburos. Este descenso en la demanda petrolera llevó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a regular la producción, disminuyendo las cuotas de sus miembros. En el caso de Venezuela, hubo una baja de tres mil cuatrocientos treinta y cinco millones de dólares en los ingresos por venta petrolera, debido a que hubo que reducir en un 11,6% el volumen de sus exportaciones. Sumado a ello, los precios presentaron una caída de 2,84 dólares por barril.

La situación se agravó en tanto el consumo interno superaba al ingreso. Las importaciones eran más cuantiosas que las exportaciones y ello generó para 1983 un déficit de seis mil ochocientos cuarenta y un millones de bolívares. El modelo desarrollista de sustitución de importaciones había fracasado en Venezuela y, en buena medida, en ello radicaba la crisis. Como lo señala Héctor Malavé Mata:

Los copiosos excedentes fiscales se convirtieron en riqueza volátil que no pudo fecundar la base de la producción material. Se producía pero más se consumía. Sobrevino en consecuencia la euforia de las importaciones, y por esta vía fluyeron al exterior muchos efectos dinámicos de la renta petrolera que añadidas a la carga de onerosos empréstitos internacionales, ocasionaron el desequilibrio de las cuentas externas del país.⁹

La vulnerabilidad del modelo rentista petrolero obligó al gobierno a tomar medidas de austeridad económica. A todo lo anterior se sumaba el hecho de que en 1983 se vencía el plazo para pagar el 50% de las obligaciones contraídas por el país con la banca internacional, equivalente a doce mil trescientos cincuenta y ocho millones de bolívares. En efecto, la convergencia en un mismo momento de los tres factores mencionados, a saber, la deuda externa, la fuga de divisas y

9 Malavé Mata, Héctor. *Los extravíos del poder (Euforia y crisis del populismo en Venezuela)*. Caracas, Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, 1987, p. 800.

la caída de los precios del petróleo, desembocó en la crisis económica que recibió el nombre de Viernes Negro.

Las medidas de austeridad no fueron los únicos intentos del gobierno de solventar la grave crisis, pues, con la intención de elevar las reservas internacionales que permitirían renegociar con la banca acreedora el otorgamiento de nuevos préstamos y el pago de los ya adquiridos, se firmó el 27 de septiembre de 1982 un convenio cambiario entre el Ministerio de Hacienda y el BCV, a fin de traspasar recursos de la industria petrolera (PDVSA) al ente emisor (BCV). A raíz de este acuerdo fueron traspasados dos mil quinientos cuarenta millones de dólares de un organismo al otro, con lo que las reservas internacionales se incrementaron de once mil seiscientos veinticuatro a catorce mil ciento sesenta y cuatro millones de dólares.

También se tomó la decisión de aumentar, por primera vez en 37 años, el precio de la gasolina a 57 céntimos de bolívar por litro. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados, por lo que el gobierno autorizó la emisión de bonos de la deuda pública por diez mil millones de bolívares con el fin de activar las reservas de la Tesorería Nacional, ubicadas en instituciones bancarias y decidió trasladar al Fisco tres mil seiscientos setenta y nueve millones de bolívares provenientes de la Reserva Especial de Estabilización de Valores.¹⁰

A pesar de esas medidas la situación a inicios de 1983 se agravaba, en vista del continuo descenso de los precios internacionales del petróleo y la desenfadada fuga de divisas. En este contexto, el viernes 18 de febrero de 1983, se produjo la decisión del equipo económico del presidente Herrera Campins de establecer un régimen de cambios diferenciales que recibió el nombre de RECADI, con el objetivo de frenar la insostenible fuga de divisas y estabilizar los recursos del país para renegociar el pago de la deuda.

Para ello se estableció un tipo de cambio preferencial de bs. 4,30 por dólar, para las importaciones esenciales, otro de bs. 6,0 por

10 Ibidem., p. 789.

dólar para las importaciones menos primordiales, y finalmente un cambio libre para el resto de las transacciones. Por otra parte, se decidió prohibir las importaciones de artículos suntuarios como bebidas alcohólicas, perfumes, lencería, etc. Este acontecimiento económico recibió el nombre de Viernes Negro, y significó en términos reales, el cierre de la etapa de bonanza financiera que se había iniciado en la década anterior.

Las resoluciones de la reunión del 18 de febrero se dieron a conocer con mayor exactitud días después de haber sido tomadas. Alrededor de ellas reinaba mucho hermetismo por cuanto no era una disposición fácil de asumir, pues ello suponía aceptar la terrible crisis económica que atravesaba el país como consecuencia de una mala política, tanto más en un año electoral como lo era 1983, en el que el triunfo del próximo partido de gobierno dependería del éxito de la gestión saliente. Por ello, el panorama económico aún no quedaba claro para muchos. El presidente Herrera Campins y sus ministros se habían reservado el estado real de la situación, de hecho, el periódico *El Nacional* del lunes 21 de febrero, abría la información económica resaltando:

Las últimas 48 horas fueron en materia económica, las que **permitiesen elaborar todo tipo de conjeturas en las redacciones de los medios de comunicación social**. Salvo la información presidencial sobre el informe que el gabinete económico prepara para que el ministro Arturo Sosa presente a la banca internacional para refinanciar la deuda de corto plazo, **el hermetismo fue total**.¹¹ (El subrayado es nuestro).

En esos momentos se hacía mención a los asuntos internacionales, como el refinanciamiento de la deuda y la caída de los precios del petróleo, como si la precaria situación financiera dependiera sólo de

11 Edgardo, Silberkasten, "Las reuniones del equipo económico: 48 horas que conmovieron al país". *El Nacional*. Caracas, 21 de febrero de 1983, p. D-12.

factores externos y pasajeros, sin profundizar sobre la realidad nacional: el país estaba en quiebra sin sospecharlo. La crisis era estructural, el modelo económico se había agotado y ello suponía el advenimiento de conflictos con diversos sectores sociales, tanto más con las universidades que históricamente habían sido punta de lanza de las luchas reivindicativas. En consecuencia, dada la grave crisis económica, la tranquilidad política del país parecía estar llegando a su fin.

Las medidas económicas aplicadas por el gobierno, debido a su carácter restrictivo, ocasionaron grandes conflictos con los trabajadores del Estado, fundamentalmente con los sectores de la salud y la educación. Con relación a las universidades, algunas de ellas permanecieron en paro durante los primeros meses de 1983 como medida de protesta por el incumplimiento en el pago de las deudas contraídas con trabajadores y profesores, así como por la crisis presupuestaria que les aquejaba.

La participación estudiantil en esta primera fase del conflicto fue escasa. Los partidos políticos de mayor influencia en las universidades para aquel momento, a saber, el MIR y el MAS, se hallaban en posiciones encontradas, pues, mientras los primeros apoyaban de manera abierta y decidida la medida de ir a paro nacional indefinido, los segundos estaban en contra, por asumir que al abandonar las universidades se crearía el ambiente propicio para la desmovilización estudiantil y la intervención del Ejecutivo Nacional.

LA GRATUIDAD BAJO AMENAZA

En esencia, el Viernes Negro significó la ratificación de la crisis que se venía sintiendo en el país desde finales de la década de 1970. El caso de las universidades públicas fue emblemático; desde finales del año 1982 profesores y trabajadores de la Universidad del Zulia (LUZ), la Universidad de Los Andes y la Universidad de Carabobo se hallaban en conflicto con las autoridades universitarias y con el gobierno nacional por problemas presupuestarios.

En el caso de LUZ, sus trabajadores realizaron durante varios días una huelga de hambre en el rectorado, por lo cual su rector, Rafael Acosta Martínez, solicitó al gobernador de la región, Humberto Fernández Auvert, que enviara a un grupo de efectivos de la policía para “resguardar las instalaciones de la universidad y evitar que se produjeran acciones de violencia.”¹² Esta operación fue cuestionada por algunos profesores, quienes la consideraban como una violación a la autonomía universitaria propiciada por sus mismas autoridades.

Por su parte la UCV, la Universidad de Oriente (UDO) y la Universidad Occidental Lisandro Alvarado (UCLA), estaban a punto de sumarse a la paralización indefinida. Los gremios de profesores, trabajadores y pequeños sectores del movimiento estudiantil, vinculados con los partidos políticos, evaluaban la pertinencia de unirse a la huelga general indefinida, dada la precaria situación económica que imperaba en el país, y por las amenazas del gobierno de suspender los pagos para las universidades que se encontraran en paro, amén de los señalamientos que se hacían en torno a una posible intervención del Ejecutivo si se hacía efectiva la paralización absoluta de la educación superior.

Por ejemplo, Manuel Peñalver, dirigente profesoral de AD, presidente del Grupo Universitario Latinoamericano, y ex ministro de educación, advertía en la prensa las implicaciones que acarrearía para las universidades ir a paro general indefinido, alegando:

Creo que se ha pasado el límite de favorecimiento para los trabajadores universitarios si los comparamos con los otros servidores del Estado. Entonces, la declaratoria de un paro nacional sería condenar a la universidad venezolana a un colapso, y sería obligar al Ejecutivo, que no puede quedarse con los brazos cruzados, a tomar medidas de intervención y de reorganización que podrían ser traumáticas.¹³

12 Antonio Reyes. “Presidente de Fetrazulia asegura que hoy será solucionado el conflicto en LUZ”. *El Nacional*. Caracas, 25 de febrero de 1983, p C-2.

13 Kalinina Ortega, “Advierte Luis Manuel Peñalver: Si todas las universidades paralizan sus actividades obligarán al Ejecutivo a intervenirlas”. *El Nacional*. Caracas, 24 de febrero de 1983, p. C2.

Esos elementos, en buena medida, mantenían detenido el conflicto. Sin embargo, las declaraciones emitidas por el ministro de educación Felipe Montilla, reiterando que era imposible solicitar recursos adicionales para las universidades, alteró los ánimos de los trabajadores que aún no se habían sumado a la paralización y bajo la creación del Comando Intergremial Universitario Nacional (CIUN) anunciaron ante la opinión pública la realización de una huelga de 48 horas, los días 24 y 25 de febrero de 1983.

La propuesta de la UCV giraba en torno a la realización de movilizaciones a nivel nacional y la paralización indefnida, para solicitar al gobierno el compromiso de suministrar recursos adicionales para el presupuesto de 1983 que aún no había sido asignado. Empero, el gobierno, como nunca antes en su historia, no se encontraba en condiciones de satisfacer estas exigencias. La crisis fiscal del país era profunda y la imposibilidad de solicitar préstamos a la banca internacional era una realidad.

Las opiniones en torno a la realidad económica del país y su influencia en la educación superior eran diversas y contradictorias. Por ejemplo, para el Partido Comunista de Venezuela el gobierno intentaba desestabilizar a las universidades autónomas con el objetivo de llevarlas a la quiebra para luego intervenirlas y convertirlas en instituciones al servicio de las clases dominantes: “De allí que la reducción progresiva del presupuesto a las universidades autónomas exprese una respuesta política que el gobierno ha organizado para golpear a los sectores con mentalidad progresista que critican y se oponen al desorden del país.”¹⁴

Para esta organización, la crisis devenía de factores políticos, no económicos, y era en resumen un pase de factura del gobierno de Herrera Campins a las universidades. No se descarta el hecho de que una vez que estalla la crisis económica, las universidades fueron las primeras afectadas y que el Ejecutivo ejerció medidas de presión en

14 Héctor Mújica, “El PCV analiza la crisis universitaria: Las universidades autónomas son llevadas a la quiebra”. *El Nacional*. Caracas, 15 de marzo de 1983, p. C 3.

contra de ellas como la suspensión de las órdenes de pago para las que se encontraban en paro desde 1982, alegando que el país también se hallaba en crisis y ello no era motivo para que se paralizara, además de reiterar que no había posibilidad alguna de suministrar recursos adicionales y menos aún de aumentar los sueldos. Sin embargo, estas medidas de presión política no suponen que la crisis se haya producido por factores de la misma índole. Era claro que el país estaba en quiebra y que muchos de los sectores que dependían de él se verían afectados.

Por su parte el MIR, a través de uno de sus más emblemáticos representantes, el profesor Simón Sáenz Mérida, también hacía una evaluación de la situación universitaria, en la que apuntaba que el escenario económico del país acentuaba el problema presupuestario de las universidades, por ser un sector vulnerable a los desbalances fiscales. En su análisis, Sáenz destacaba que el llamado a la racionalización del presupuesto del Estado hecho por el gobierno, impactaría negativamente a unos sectores, mientras que a otros no les perjudicaría, y afirmaba: "...aunque la perspectiva fiscal y presupuestaria se presenta con líneas de mayor gravedad hoy, la 'racionalización' presupuestaria oficial recaerá sobre las áreas que se presumen y son institucionalmente más débiles."¹⁵ En efecto en ello radicaba el conflicto de las universidades con el gobierno nacional.

Otros analistas de la situación se aventuraban a hacer señalamientos más severos, como que el tiempo de la gratuidad de la educación superior parecía haber llegado a su fin, así como las políticas demagógicas, populistas y clientelistas que por años habían prevalecido en Venezuela. Tales eran las afirmaciones del rector de la ULA, José Mendoza Angulo quien señalaba que la gratuidad no era un modelo aplicable a todos los tiempos, además de ser una práctica que, pretendiendo ser revolucionaria, rayaba en lo reaccionario, porque mediante

15 J.D.R, "Simón Sáenz Mérida: La situación fiscal acentúa la crisis universitaria". *El Nacional*. Caracas, 4 de marzo de 1983, p. C 3.

el subsidio de la educación superior, se pagaba la formación profesional a los ricos.¹⁶

Esta larga discusión demostraba una sola cosa: las universidades estaban atravesando una crisis presupuestaria a consecuencia del déficit fiscal del país. Algunas de ellas se encontraban paralizadas por lo que el Ejecutivo decretó el 11 de marzo de 1983 la suspensión de las órdenes de pago de la ULA y la UC. Esta medida hizo que el clima de conflicto entre las universidades y el gobierno cesara, además de propiciar el advenimiento de un discurso mediante el cual las universidades públicas debían producir su propio financiamiento, pues sus autoridades comenzaron a vislumbrar que la práctica de solucionar el déficit fiscal del país con préstamos internacionales parecía haber llegado a su fin.

Hasta ese momento la participación de los estudiantes en el conflicto universitario había sido evidentemente escasa. Sin embargo, las autoridades de las principales universidades comenzaron a buscar mecanismos de autofinanciamiento, siendo el primer afectado el sector estudiantil. En la Universidad Simón Rodríguez (UNESR), se aprobó, por decisión del Consejo Rector, un cambio de régimen arancelario, mediante el cual el precio de cada materia aumentarían de treinta a ciento cincuenta y dos bolívares, a lo que los estudiantes de esa casa de estudios respondieron con la suspensión de las inscripciones como medida de protesta.

Esa acción, que tuvo lugar el 3 de marzo de 1983, fue explicada por los dirigentes estudiantiles Daniel González y Antonio Calderón a la prensa de la siguiente manera, "...No somos opuestos a la medida, pero sí en los términos que ha sido llevada a cabo su instrumentación y la pretendida política de solventar los problemas económicos a costa de los estudiantes..."¹⁷ Ellos proponían que se buscaran formas de

16 Roberto Giusti, "El Rector de la ULA: La crisis universitaria no se resuelve con viejas ideas sacrosantas". *El Nacional*. Caracas, 28 de febrero de 1983, p. C 2.

17 "Estudiantes suspendieron inscripciones en la UNESR". *El Nacional*. Caracas, 4 de marzo de 1983. p. C1.

financiamiento que no perjudicaran sus intereses y que las decisiones tomadas por el consejo, dirigido por el rector Gustavo González Eraso, fuesen discutidas con todos los sectores de la comunidad universitaria.

Medidas similares a las de la UNESR, aplicó el rector José Mendoza Angulo en la ULA, con el agravante de que eliminó servicios estudiantiles como comedor, transporte y asistencia médico-odontológica. Ante ello, dirigentes estudiantiles de la FCU-ULA, planteaban la necesidad de modificar las medidas por considerar que con ellas se generarían protestas de calle que iban a perjudicar la estabilidad de la universidad y de la ciudad de Mérida en general.¹⁸

El mismo escenario se planteó en la Universidad Simón Bolívar (USB), donde los estudiantes reunidos en asamblea decidieron realizar un paro de veinticuatro horas en exigencia a la abolición de las medidas económicas aplicadas por el rector José Roberto Bello, entre las que figuraban el cobro trimestral de matrícula en cuatrocientos cincuenta bolívares, la reducción de las becas en un 80% y la eliminación de los subsidios de transporte y comedor. Los estudiantes exigían, además, la renuncia del rector por considerar que su administración no había sido favorable a la universidad.

Entre las consideraciones hechas por los estudiantes estaba la negativa a que el déficit universitario recayera íntegro sobre sus hombros. En el caso de las tres universidades los estudiantes proponían la elaboración de proyectos de autofinanciamiento, sin que esto supusiera la eliminación de sus beneficios, pues con ello se propiciaba el inicio de la privatización de la educación superior. En la UCV, la elección de Edmundo Chirinos como rector fue un factor sorpresivo y decisivo en el intento de aplicación del conjunto de medidas que se venían empleando en las demás universidades.

18 "Afirma dirigente de la DCU: Se está pretendiendo atentar contra la estabilidad de la ULA". *El Nacional*. Caracas, 21 de marzo de 1983, p. C 3.

ENCANTADOR DE SERPIENTE

En 1984 la UCV debía elegir sus nuevas autoridades. La crisis presupuestaria suponía un enorme reto para quien asumiera la rectoría de esa casa de estudios, por cuanto la delicada situación económica significaba el advenimiento de conflictos con algunos de los sectores involucrados, a saber, trabajadores, estudiantes o el gobierno nacional. Con los primeros, en tanto no se lograra satisfacer las exigencias de pago de las deudas por las que venían peleando desde el año 1982; con los segundos, si por motivo de la crisis se pretendían adoptar medidas de austeridad que implicaran la eliminación de los beneficios de los que gozaban, como venía ocurriendo en las demás universidades públicas, y finalmente con el último, si se intentaban ejercer acciones de presión, como huelgas o paros para obtener financiamiento.

Desde inicios del año 1984 los partidos políticos comenzaron a postular a sus candidatos a rector. El dr. Edmundo Chirinos, decano de la Facultad de Humanidades y Educación, pretendía llegar al rectorado con una coalición de los partidos de izquierda MAS, MIR, PCV, MEP, Liga Socialista y Nueva Alternativa. Señalaba que él debía ser el candidato único de la izquierda por su trayectoria dentro de la universidad y por ser la opción más idónea en contra del candidato de AD, Piar Sosa, por lo que en una entrevista que ofreció al periódico *El Nacional*, apuntaba:

[...] hay dos tendencias: una que se identifica con la unidad de la izquierda y otra que propicia un acuerdo con AD y COPEI, o con uno u otro (...) no es imposible, pero sí difícil conciliar en una acción programática posiciones autonómicas con posiciones contraautonómicas, planteamientos autonomistas con otros antiautonomistas, y en cuanto al financiamiento llegar a acuerdos sinceros que permitan conformar un equipo coherente (...) La fórmula que yo sustentó es la de lograr un candidato único de la izquierda con una trayectoria

tal que le permita enfrentar a los sectores representados por Piar Sosa [...]»¹⁹

Chirinos se mostraba desde el principio a favor del cobro de matrícula a aquellos estudiantes que estuviesen en condiciones de pagar y en ese sentido admitía estar de acuerdo con los planteamientos de Piar Sosa, el candidato de AD, quien proponía la “erradicación” de la gratuidad de la educación superior. Consideraba que, salvo este punto relacionado con el pago de la inscripción, sus apreciaciones en torno a cómo debía ser conducida la universidad eran antagónicas con las de AD y COPEI, por lo que recibió el apoyo de los partidos de izquierda. El primero en hacerlo fue el PCV, luego el MEP, la Nueva Alternativa y sectores del MIR y la Liga Socialista y finalmente el MAS, que se debatía entre apoyar a quien sería candidato de COPEI, Eduardo Castillo o a Chirinos.

No obstante, a medida que avanzaba la campaña electoral y dado que AD y COPEI aún no designaban a sus candidatos, Chirinos comenzó a cambiar su discurso, ya no en torno a ser el candidato único de la izquierda, sino el de todos los partidos, declarando:

He sostenido fructíferas reuniones con las direcciones universitarias del MAS, MEP, MIR, Liga Socialista, PCV y Nueva Alternativa. Hemos elaborado un programa (...) **mi aspiración sería integrar a la gente de Acción Democrática y COPEI**. A los independientes, mayoría silenciosa. Para llevar adelante ese programa. La gravedad de la situación nacional le reclama a la universidad, más que nunca, una acción de consenso, de unidad y eficiencia [...]»²⁰ (El subrayado es nuestro).

19 Héctor Landaeta, “Edmundo Chirinos: Hay que reestructurar radicalmente a la UCV”. *El Nacional*. Caracas, 5 de enero de 1984, p. C 2.

20 Roberto Giusti, “Edmundo Chirinos lanza su candidatura: La universidad se ha convertido en un inmenso cascarón de desesperanza”. *El Nacional*. Caracas, 29 de enero de 1984, p. C 13.

Por su parte, AD se debatía entre ofrecer su apoyo a Piar Sosa, quien se venía anunciando como candidato desde inicios del año anterior, o apoyar a Miguel Ángel Pérez, quien también pertenecía a esa agrupación política y era representante profesoral ante el Consejo Universitario. A diferencia de Piar Sosa, Pérez se mostraba contrario a la eliminación de la gratuidad de la educación superior, motivo por el cual contaba con la aceptación de parte de la dirección juvenil del partido.

Ante este escenario, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de AD tomó la decisión de realizar elecciones internas para definir quién sería su abanderado en los comicios rectorales. La consulta se realizó el 27 de enero y Piar Sosa resultó ganador. Su acto de proclamación en la Sala E culminó con un enfrentamiento entre sus partidarios (Román Gómez, Germán Carrera Damas, Oswaldo de Sola, Cándido Ordaz, Pompeyo Ríos, Evangelina García Prince y el entonces dirigente estudiantil Timoteo Zambrano) y un grupo de estudiantes encabezados por Magali Celis, militante del MIR y representante de la FCU-UCV, quienes lo abucheaban gritando consignas como: “¡fuera Piar Sosa de la universidad!”. El rechazo de los estudiantes a Sosa se remontaba a los años en que éste había sido decano de la Facultad de Ingeniería, la cual se mantuvo cerrada durante más de un año por conflictos internos.

Un escenario distinto se planteó en el acto de proclamación de Edmundo Chirinos el 1 de marzo en la misma Sala E. En él estuvieron presentes Domingo Felipe Maza Zavala, Héctor Malavé Mata, Manuel Caballero, Jesús Sanoja Hernández, Héctor Silva Michelena, Héctor Mújica y diversos representantes del movimiento estudiantil.

Es importante destacar el papel de los medios de comunicación en este proceso electoral. Su función propagandística fue criticada tanto por profesores como por dirigentes estudiantiles. La balanza estuvo en todo momento inclinada hacia los candidatos Chirinos y Sosa, en menoscabo de los demás, y el primero recibió siempre mayor apoyo. La noticia en el periódico *El Nacional* que reseñaba las proclamaciones de ambos dan cuenta de ello. Se hablaba del acto de proclamación de Piar Sosa como un evento signado por la violencia y el odio entre sectores

universitarios. El periodista, al final del reportaje, se preguntaba de manera irónica:

Quedaron en el aire al final del drama, dos grandes interrogantes en la mente de la comunidad universitaria. “¿Es cierto que existe un clima de terror en la universidad que utiliza la violencia para imponer sus designios? ¿O será que es cierto que Piar Sosa es un hombre que genera problemas y violencia por sí mismo?”²¹

Diferente fue la reseña hecha por el mismo periodista sobre la proclamación de Chirinos, en la cual destacaba: “Edmundo Chirinos fue proclamado candidato de la Universidad Central de Venezuela en medio de una nutrida concurrencia académica que hizo presencia solidaria en la Sala E de esa casa de estudios.”²² Resaltando el sentido poético que tuvo el acto y las “frases célebres” pronunciadas por Chirinos, entre las que estuvo la siguiente: “Una sombra maligna se ha esparcido y ha penetrado en nuestras grietas. Pero la solidez de nuestras conciencias salvará a esa casa que vence las sombras”²³. Se puede apreciar la representación mediática hecha a ambos candidatos bajo la imagen de un profesor bueno, rodeado de poesía y grandes ideas (Edmundo Chirinos) y uno malo, eclipsado por el odio y la violencia encarnado en la figura de Piar Sosa, cuando en el fondo ambos compartían la misma idea privatizadora.

Es cierto que Piar Sosa no contaba con el apoyo de un gran número de estudiantes y profesores de la UCV, pero tampoco es menos cierto que Chirinos fue visto con recelo por algunos dirigentes estudiantiles, por sus apreciaciones en cuanto a la conducción de la universidad y porque durante la campaña estuvo renuente –al igual

21 Héctor Landaeta, “Volvió la violencia a la UCV: Saboteada la proclamación de Piar Sosa como candidato a rector”. *El Nacional*. Caracas, 16 de febrero de 1984, p. C 3.

22 Héctor Landaeta, “Edmundo Chirinos en su proclamación: La UCV es la casa que vence las sombras”. *El Nacional*. Caracas, 2 de marzo de 1984, p C 1.

23 Ídem.

que los demás candidatos— a reunirse con ellos para discutir sobre su propuesta electoral.

Lo que parecía un proceso sin mayores traumas fue impactado por una acción inesperada. Dos días antes de las elecciones, un grupo de sujetos apodados “estudiantes sin cupo” secuestró durante diez horas a las autoridades de la UCV, exigiendo ingresar a ella como estudiantes regulares. La acción terminó en una batalla campal entre éstos y los vigilantes.

Con el apoyo de algunos dirigentes de la FCU-UCV, el rector Moros Ghersy y los trabajadores del rectorado lograron salir del lugar y los “sin cupo” fueron expulsados del recinto universitario. Al día siguiente se acusaba a Piar Sosa de haber planeado el hecho. Todos los artículos de prensa hacían referencia a las posibles vinculaciones de Sosa con los bachilleres sin cupo y con la planeación del secuestro de las autoridades. Chirinos, por su parte, se aprovechaba de lo ocurrido asegurando que de ganar el rectorado no permitiría bajo ningún concepto que ocurrieran actos de violencia en la UCV.

“MI TRIUNFO ES TAMBIÉN UN TRIUNFO DEL GOBIERNO”

El proceso para escoger al rector de la UCV se definió con una segunda vuelta entre los candidatos Chirinos y Piar Sosa el 29 de marzo, resultando el primero victorioso. Entre las primeras declaraciones ofrecidas por el nuevo rector a los medios de comunicación estuvo la siguiente frase: “Mi triunfo es también un triunfo del gobierno”. Aquel candidato que logró llegar al rectorado de la UCV con los votos de la izquierda y que se había encargado de desprestigiar al abanderado del partido de gobierno, comenzaba a cambiar de manera radical su discurso. Era enfático al señalar que la universidad no podía tener etiquetas partidistas y que en lo sucesivo sería el rector no sólo de la izquierda, sino también de AD y COPEI, y que desde su cargo propiciaría un acercamiento con el gobierno, por lo que de inmediato solicitó una reunión con el presidente Lusinchi, alegando que:

Tengo plena confianza en que el presidente Jaime Lusinchi será nuestro más entusiasta gestor para aliviar los problemas universitarios. Para ello debemos hacer reformas sustanciales en la universidad con el fin de mostrar la solvencia moral suficiente, para tramitar créditos adicionales necesarios y cubrir las deficiencias que quedan de este año [...]²⁴

Con estas palabras Chirinos de inmediato bajaría de su nube a aquellos que asumían que la izquierda había llegado al rectorado. Enfatizó que era falso aquello de que un comunista se había hecho del poder en la UCV. Con relación al movimiento de bachilleres sin cupo, no reparó en tildarlos de “delincuentes políticos de ultra izquierda” a quienes advirtió que no toleraría “ni secuestros ni acciones violentas” y que de producirse alguna de ambas situaciones tomaría medidas drásticas.

Las relaciones amistosas entre Chirinos y el gobierno se iniciaron desde el primer momento. El presidente Lusinchi, a escasas horas de que se anunciara el triunfo de Chirinos, le envió una carta de felicitaciones, a la que éste respondió con una comunicación en la que, entre otras cosas señalaba:

Estimado presidente, anoche tuve el honor de recibir en mi residencia, como me había anunciado telefónicamente, el mensaje que hoy ha hecho público y en el cual se expresa sus congratulaciones (...). Apreciamos sus expresiones, pues desbordan lo verdaderamente ceremonial al transmitirnos la mejor voluntad de colaboración del Ejecutivo Nacional con nuestra futura gestión [...]²⁵

A partir de ese momento se hacía más evidente la vinculación de Chirinos con el gobierno. Sus intenciones de colaborar con él distaban

24 Héctor Landaeta, “Edmundo Chirinos: Soy el primer dirigente estudiantil que llega a ser rector”. *El Nacional*. Caracas, 31 de marzo de 1984, p. C 1.

25 L. V., “Chirinos respondió al presidente Lusinchi: La universidad se adecuará a las necesidades de la sociedad venezolana”. *El Nacional*. Caracas, 1 de abril de 1984, p. C 5.

de ser un simple discurso de cordialidad, como lo expresaba el profesor Agustín Blanco Muñoz, en el periódico *Últimas Noticias*:

Para la hora en que se produce la declaración de Chirinos [refiriéndose a la frase “este es un triunfo del gobierno”] ya existe todo un acuerdo para avanzar en el control y sometimiento de la institución. En estos tiempos de crisis nada más importante que una UCV tranquila, afín al gobierno, a Fedecámaras, a las FAN y a la Policía Metropolitana. Chirinos asume este compromiso con el pretexto de sacar la universidad de sus muros, de acabar con las cercas que se ha autoimpuesto la institución.²⁶

Chirinos, al frente de la UCV desde el 15 de junio de 1984, puso en marcha su plan de convertir a la universidad en “un parque”. En temporada de vacaciones ejecutó su llamada Operación Pintura, con la que introdujo dentro de la universidad a efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) para que pintaran todas sus instalaciones, incluyendo la sede de la FCU. Sacó los vehículos y rediseñó las entradas y salidas creando un nuevo estacionamiento y como lo señaló Blanco Muñoz, “...instaló un módulo de la Policía Metropolitana para garantizar la seguridad de la comunidad en sus largas caminatas hacia los nuevos puestos de estacionamiento, pero también para ampliar las posibilidades de control futuro...”.²⁷

Finalmente, el 3 de septiembre, día en que se iniciaban las clases, un helicóptero de la PM sobrevoló la UCV con un mensaje del nuevo rector que decía: “Bienvenidos a la universidad más bonita del mundo”. En esencia, Chirinos, de ser el candidato del “consenso de la izquierda”, se había convertido en un agente al servicio del gobierno que, dada la delicada situación económica en la que se encontraba el país, necesitaba meter en cintura a uno de los sectores más emblemáticos de

26 Agustín Blanco Muñoz. “La UCV: ¿Una universidad subversiva?”. *Últimas Noticias*, Caracas, 14 de septiembre de 1984, p. 48.

27 Ídem.

las luchas por las reivindicaciones políticas y sociales: los estudiantes universitarios, a quienes había calificado de “generación boba”. Esa frase desató una polémica de tal magnitud, que los jóvenes de los ‘80 serían recordados para la posteridad con ese apodo y aquel rector como quien ofendió a toda una generación.²⁸

No obstante, poco tiempo duraría la ilusión de Chirinos de ser el gendarme necesario de la UCV, pues a sólo tres meses de haber asumido el cargo, su emoción por el poder recibió un duro golpe del cual, en términos de simpatía política, no pudo recuperarse jamás.

LA GOTA QUE DERRAMÓ EL TAZÓN

Jaime Lusinchi, una vez juramentado como presidente de la República en febrero de 1984 anunció al país en cadena nacional de radio y televisión, el día 14 de marzo, su llamado Plan de Austeridad, que contemplaba una reducción del gasto corriente del Estado en un 10%, con el objetivo de enfrentar y resolver la delicada situación económica que había heredado su gobierno. Entre las principales medidas destacaron la reducción del 10% a los sueldos superiores a dieciséis mil bolívares, la reestructuración de veintiún entes descentralizados y corporaciones regionales de desarrollo, la liquidación de instituciones como la Corporación Venezolana de Fomento (CVF), fundada en 1946 durante los años del trienio adeco y la reorganización de algunas entidades financieras del Estado.

Al anunciar estas medidas, el presidente pedía la colaboración de todos los sectores de la sociedad para llevar a cabo su plan de rescate de la economía, señalando: “Esta política de austeridad y de reordenamiento

28 En la revista *Feriado* del día domingo 16 de septiembre de 1984, en una entrevista hecha por la periodista Elizabeth Fuentes a Edmundo Chirinos, éste declaraba: “Pertenezco a la generación del ‘58. Fui dirigente estudiantil de una generación que vivió su adolescencia durante la lucha antiperezjimenista, lo cual nos permitió crecer mucho. En cambio **la generación del 80 es una generación boba**, sin rumbo (...) **son seres como vegetales...**” (El subrayado es nuestro).

de la administración pública tendrá éxito en la medida en que sea comprendida y en la medida en que todos tomemos conciencia de que la realidad venezolana nos impone serias restricciones...²⁹

Chirinos, en apego a las políticas del gobierno y siguiendo la línea de los rectores de la ULA, la UNESR y la USB, decidió en Consejo Universitario, aplicar medidas de restricción de gastos que, en definitiva, recaerían casi completamente sobre los estudiantes. Tales medidas implicaban la eliminación de las becas, el aumento del comedor universitario a 10 bs., el pago de matrícula y la suspensión de las pasantías.

Al conocer la noticia, un grupo de cursantes de Veterinaria y Agronomía del núcleo de Maracay realizaron una asamblea en la que se decidió el traslado de cuatrocientos estudiantes a la Ciudad Universitaria con un pliego de peticiones para las autoridades ucevistas. En él se alegaba que en diversas oportunidades habían solicitado una audiencia con el rector para discutir sobre sus políticas y la misma les había sido negada.

La indignación de los estudiantes surge a raíz de que durante la campaña electoral Chirinos visitó las instalaciones de la Facultad de Agronomía y Veterinaria con quien luego sería el Secretario General de la UCV Tiburcio Linares y se comprometió con los estudiantes a recoger los planteamientos que éstos hacían con relación al mejoramiento del comedor de Maracay, sin que ello supusiera el aumento del servicio. Luego del triunfo se celebró una segunda reunión donde los estudiantes propusieron formas de financiamiento del comedor y el rector respondió, según palabras textuales de los estudiantes que declararon ante la prensa: "...Yo no vine a discutir las medidas, vine a informarles..."³⁰. Meses más tarde, se enteran a través de los medios de

29 "Reducción del Gasto Corriente deberá ser no menor de un 10%". *El Nacional*. Caracas, 15 de marzo de 1984, p. D 1.

30 Héctor Landaeza. "En Maracay no reconocen al rector Chirinos". *El Nacional*. Caracas, 23 de octubre de 1984, p. C 1.

comunicación de la intención del Consejo Universitario de aumentar el precio del comedor a 10 bs.

Por ello, un grupo de estudiantes se dirigió a la Dirección de Transporte para pedir que se les trasladara a Caracas con el propósito de protestar en contra de la medida, y la negativa a tal petición produjo que, como lo habían acordado en la asamblea, tomaran los autobuses y realizaran el traslado ellos mismos. Esa acción marcó el inicio de los hechos que recibieron de inmediato el nombre de Masacre de Tazón en los cuales resultaron heridos los estudiantes a manos de efectivos de la GN y en los que figuró como responsable principal el recién electo rector de la UCV, Edmundo Chirinos.

METRALLA EN LOS CUERPOS

El día 19 de septiembre los estudiantes de Agronomía y Veterinaria tomaron cuatro autobuses de la Dirección de Transporte de la universidad. En ellos viajaba un número superior a las cuatrocientas personas a fin de ingresar al recinto del Consejo Universitario para exponer sus peticiones. Edmundo Chirinos recibió la noticia en Caracas, y —como apuntó luego— tomó la decisión personal de llamar al viceministro de Relaciones Interiores Cesáreo Espinal Vásquez para que impidiera el paso de los estudiantes a la capital. Los autobuses fueron detenidos en la alcabala de la GN de Hoyo de la Puerta y sus pasajeros conminados a desalojar las unidades para ser revisados. Luego de dos horas de detención, los estudiantes decidieron arrancar los autobuses y romper el cerco impuesto por los militares, lo que produjo el ametrallamiento de las unidades.

Un número superior a treinta personas resultaron heridas, veintidós de suma gravedad. En la balacera también cayeron heridos tres efectivos de la GN, motivo por lo cual la noticia, en un primer momento, fue reseñada por los medios de comunicación como el resultado de un intercambio de disparos entre estudiantes y militares, acusación de la que los primeros se defendieron al enfatizar:

Nosotros no hemos disparado [...] si algún funcionario de la Guardia Nacional resultó herido de bala, fue entre ellos mismos. Ellos disparaban como locos contra los autobuses. Por eso estamos dispuestos a someternos a la prueba de la parafina. [...] ahora quieren confundir a la opinión pública señalando que fueron atacados por los estudiantes.³¹

Los heridos fueron trasladados al hospital de Coche y al Clínico Universitario, mientras los representantes de la FCU acusaban al rector de haber ordenado “la masacre”. La consigna de “¡Chirinos farsante asesino de estudiantes!” comenzó a escucharse por toda la universidad, según señalaba un reportero que cubría la noticia desde aquel lugar. El periódico *Últimas Noticias* describía las condiciones en las que habían quedado las unidades que trasladaban a los estudiantes de la siguiente manera: “Los autobuses ametrallados quedaron con sus ventanas destrozadas y en su interior se observan charcos de sangre. En el bus número 201 [...] se podían observar más de 20 perforaciones de bala. [...] Hasta en los neumáticos recibieron tiro los colectivos.”³²

Los hechos se habían producido a las doce del mediodía, y a las cuatro de la tarde un grupo de estudiantes enardecidos se reunió en el Aula Magna de la UCV para discutir sobre las acciones a tomar. Éstos demandaban la presencia de Chirinos en el lugar, quien, al llegar fue recibido con insultos, abucheos, golpes y empujones. En medio de toda la exaltación exigieron al rector una explicación y él se defendió con el alegato de que su actuación había estado apegada a la ley y que su intención no había sido la de agredir a nadie, sino por el contrario, proteger a los “inexpertos estudiantes que venían conduciendo”. No

31 José Manuel Pérez, “Ametrallados 4 autobuses de UCV repletos de estudiantes por la Guardia Nacional en Tazón”. *Últimas Noticias*, Caracas, 20 de septiembre de 1984. p. 23.

32 Ídem.

obstante, su respuesta sólo logró indignar más a los presentes, como lo refirió el periódico *Últimas Noticias*:

El Aula Magna se convertía en una batalla campal, mientras las franelas ensangrentadas de los estudiantes heridos en Tazón eran lanzadas a la cara del rector Chirinos. “Lepage, asesino”, “Chirinos, asesino” gritaban los estudiantes mientras pedían la cabeza del rector que debió ser sacado por la puerta de atrás para evitar su linchamiento [...]³³

El amplio apoyo estudiantil que recibió Chirinos seis meses antes había llegado a su fin. Después de ser visto como la solución a los problemas universitarios, pasó a convertirse en el causante del más grave y repudiado de ellos: la represión contra los estudiantes.

Los estudiantes exigían la renuncia de Chirinos y del ministro de Relaciones Interiores Octavio Lepage, en tanto las actividades docentes y administrativas eran suspendidas durante una semana por decisión del CU para evitar actos de violencia. Sin embargo, luego de la reunión en el Aula Magna, se produjeron violentos disturbios en la plaza Las Tres Gracias, donde fueron quemados varios vehículos por los manifestantes, lo que propició un enfrentamiento entre ellos y la PM donde resultó muerto un estudiante y detenidos varios dirigentes estudiantiles por la DISIP.

La misma noche de los hechos, la UCV fue allanada por efectivos de la GN y un grupo comando de la DISIP, quienes penetraron por la plaza Las Tres Gracias y tomaron la Facultad de Farmacia, los galpones de Ingeniería y el Instituto Anatómico de la Facultad de Medicina. Los representantes de la FCU acusaban a Chirinos de las dos torpezas cometidas en un mismo día: el ametrallamiento en Tazón y la ocupación de la UCV por parte de efectivos policiales.

33 Desiree Santos Amaral, “Enjuiciado en el Aula Magna y pedida su inmediata renuncia”. *Últimas Noticias*, Caracas, 20 de septiembre de 1984, p. 28.

DE VÍCTIMAS A VICTIMARIOS

El gobierno, al conocer los hechos, no tardó en vincularlos con actos de insurrección. La lucha armada de la década de 1960 había permitido a los mandatarios del Pacto de Punto fijo calificar de subversiva cualquier tipo de manifestación de descontento popular e incluso adjudicar a organizaciones políticas supuestas relaciones con grupos guerrilleros y en consecuencia actuar apegados a una simulada legalidad. Esa tendencia estuvo muy presente durante todo el gobierno de Jaime Lusinchi, y el primer ejemplo de ello fueron los hechos de Tazón, frente a los cuales él, lejos de condenar la acción de la GN señaló lo siguiente:

[...] hay unos cuantos que están tratando de aprovecharse de situaciones de coyuntura para crear problemas de orden público y que no estoy dispuesto a tolerarlos y les voy a enfrentar con toda decisión. (...) lo que pasa en las universidades nacionales es simplemente el represamiento de una distorsión muy grave de la educación nuestra, mas el que agentes subversivos quieran tomar la ocasión para poner a andar sus propósitos, es cosa distinta y los muchachos no deben hacer el papel de tontos útiles.³⁴

La advertencia del presidente causó indignación entre los estudiantes, quienes esperaban una reacción distinta de parte del gobierno, más aún cuando había sido tan evidente la desmedida actuación de la GN, por lo que reaccionaron alegando: “No hemos sido tontos útiles ni con propósitos subversivos, sino que atendiendo al mandato de las asambleas universitarias, vinimos a Caracas para entregar al rector de la UCV un pliego de peticiones manteniendo las reivindicaciones estudiantiles conquistadas...”³⁵

34 Rita Ordóñez, “El Presidente Lusinchi comentó el caso de los autobuses: ‘No me voy a prestar a lo que agentes subversivos quieran hacer en este momento’”. *Últimas Noticias*, Caracas, 20 de septiembre de 1984, p. 25.

35 J.E.R. “Los estudiantes rechazaron declaración oficial: No es subversivo el reclamo de reivindicaciones conquistadas”. *El Nacional*. Caracas, 21 de septiembre de 1984, p. D 10.

Octavio Lepage, en correspondencia con las declaraciones ofrecidas por Lusínchi, también adjudicaba la responsabilidad de los hechos a supuestos grupos de izquierda minoritarios “que no conciben la vida sin la violencia”. Con estas declaraciones se eximía de cualquier tipo de responsabilidad con relación a la actuación de la GN. Para él lo único que estuvo fuera de orden fue el ametrallamiento que se produjo, no obstante, la acción de haber detenido los autobuses estuvo, en su criterio, ajustada a derecho.

Algunos organismos del Estado también se pronunciaron en contra de la agresión a los estudiantes. En el Congreso de la República se creó una Comisión Especial para investigar los hechos, la cual estuvo integrada por los diputados Nelson Valera, Domingo Alberto Rangel, Douglas Jatem, Anselmo Natale y Paciano Padrón, al tiempo que en la Fiscalía General de la República se iniciaban las investigaciones para establecer las responsabilidades del ametrallamiento.

Los estudiantes del interior del país también se hicieron sentir con disturbios en rechazo a los hechos de Tazón. En Maracay fue tomada la avenida El Limón y paralizada la circulación desde el mediodía, mientras que otro grupo, en la misma ciudad, declaraba a Edmundo Chirinos “persona no grata” y proponían un paro estudiantil en acción de protesta. En Valencia se produjeron disturbios en los alrededores de la Universidad de Carabobo, en donde fueron incendiados dos autobuses y una cava, generándose una tranca vehicular desde comienzos de la mañana que se extendió hasta horas de la tarde.

En San Cristóbal, los estudiantes del núcleo de la ULA realizaron durante toda la mañana acciones de protesta en contra del gobierno y la GN con la instalación de barricadas y la quema de neumáticos, al igual que en Maturín donde fueron obstruidas las entradas y salidas de la UDO de Jusepín.

En Mérida, la situación tuvo un tinte más violento. La ciudad, según lo reseñaban los medios de comunicación, quedó totalmente paralizada a causa de los disturbios provocados por los estudiantes de la ULA, quienes en medio de la protesta quemaron la casa distrital del partido AD y apedrearon la sede de la Gobernación. En la

manifestación resultaron varios heridos, entre estudiantes, policías y guardias nacionales. Todas estas acciones produjeron la suspensión de las clases por varios días. Dos días después de los hechos de Tazón, en diversas ciudades del país, como Maracaibo, Maracay, Barcelona y Maturín hubo también manifestaciones estudiantiles pacíficas en solidaridad con los heridos en Tazón.

Un grupo de estudiantes, de la FCU-UCV sostuvo una reunión con el ministro del MRI Octavio Lepage, a la que asistieron el presidente de la FCU de entonces, Julio Casas, Augusto Uribe, Luis Colmenares, Orlando Sequera y Guillermo Falcón entre otros, y por el gobierno, Carmelo Lauría como gobernador de Caracas, el viceministro del MRI Cesáreo Espinal Vásquez y el comandante de la PM, Marcos Adolfo Pacheco. En dicha reunión el gobierno se comprometió a prohibir el uso de armas de fuego en manifestaciones estudiantiles y exhortó a los gobernadores a que dialogaran con los estudiantes para llegar a acuerdos sin tener que recurrir a la violencia.

En la parroquia 23 de Enero, al igual que en las diferentes casas de estudio, se produjeron actos de protesta en rechazo a la acción de la GN. En la noche del día 20 de septiembre, en los alrededores de los bloques 5, 6 y 7 del sector de Monte Piedad, fue incendiado un camión de la Electricidad de Caracas, al tiempo que eran arrojadas bombas molotov, piedras y otros objetos contundentes por los manifestantes a la calle. Estos actos produjeron la toma de la localidad por efectivos de la PM.³⁶

Por su parte, los partidos políticos de las diferentes tendencias hicieron su pronunciamiento con relación a los sucesos de Tazón. AD repudió la actuación de la GN, pero siguiendo la línea del gobierno, exhortó a los estudiantes a no caer en el juego de la denominada “ultra izquierda” y los “agitadores de oficio”. COPEI, por su parte, hacía un llamado al gobierno para que aclarara las declaraciones hechas en torno a supuestos grupos guerrilleros involucrados en el hecho, a la

36 José Manuel Pérez. “Estallaron disturbios anoche en alrededores de la Universidad”. *Últimas Noticias*, Caracas 20 de septiembre de 1994, p. 23.

vez que solicitaron a Chirinos que renunciara al rectorado y asumiera su responsabilidad ante los estudiantes y el país.

Los partidos de izquierda hicieron lo propio, por cuanto su compromiso con esa situación era mayor. Ellos habían apoyado a Chirinos durante la campaña electoral. En el MAS, el MIR, el MEP y la Nueva Alternativa se condenaba la acción de la GN, las declaraciones del presidente Lusinchi y la actuación del rector. No obstante, consideraban que exigir la renuncia de Chirinos constituía un error político, por cuanto la universidad podía ser intervenida por el gobierno en vista del vacío de poder que dejaría.

Por su parte, en el PCV y la Liga Socialista, anunciaron la ruptura con la gestión de Chirinos y plantearon la necesidad de que éste renunciara al cargo. Ambas agrupaciones políticas objetaban la conducta de Chirinos, no sólo por los hechos de Tazón, sino por la estrecha vinculación que éste mantenía con el gobierno, por lo que Noel Sirit apuntaba que: “Chirinos debe renunciar [...] porque se ha convertido en instrumento de la política antipopular y represiva del actual gobierno.”³⁷ Las opiniones en la Liga Socialista iban en el mismo orden que las del PCV, al considerar que Chirinos había traicionado los principios de la izquierda, al asociarse con el gobierno y tomar decisiones inherentes a la universidad sin consultar con las fuerzas políticas que le habían apoyado. Por ello, Marcos Gómez, representante de aquel partido, declaró a los medios de comunicación lo siguiente:

Lo que vemos ahora [...] es una consecuencia de toda una política personalista que ha venido ejecutando el rector Chirinos. Esa política está en la línea de las directrices del CNU y del programa económico de Lusinchi, y hemos visto que su aplicación en la UCV afecta al estudiantado, a los profesores y a los empleados. El rector Chirinos no ha analizado y mucho menos consultado los alcances de esa política con las fuerzas políticas que le llevaron al cargo; mientras, ha tenido

37 Leopoldo Linares. “La izquierda se divide frente al caso Chirinos”. *El Nacional*. Caracas, 22 de septiembre de 1984, p. D 1.

frecuentes contactos con personeros del gobierno, con Fedecámaras y hasta con las Fuerzas Armadas.³⁸

Los profesores de la UCV también sentaron posición frente a la actuación de Chirinos en los sucesos de Tazón. Por un lado, su equipo rectoral le apoyaba, alegando que éste había actuado apegado a la legalidad, en virtud de que los estudiantes de Maracay habían secuestrado los autobuses. Por el otro, un grupo de sesenta y cuatro profesores que antes le habían respaldado, suscribieron un comunicado en el cual solicitaban la renuncia de Chirinos bajo los siguientes argumentos:

Por vez primera en la historia de la universidad, un rector elegido democráticamente recurre a los organismos de fuerza extrauniversitaria, para resolver los conflictos en la comunidad ucevista. Esta actitud pone de manifiesto su absoluta incapacidad para manejar los destinos de la universidad. Todo lo anteriormente expuesto nos conduce a exigirle, de la manera más responsable [...] al doctor Edmundo Chirinos su renuncia irrevocable al rectorado de la UCV [...]³⁹

Entre los profesores que firmaron el comunicado se encontraban Héctor Malavé Mata, Simón Sáenz Mérida, Luis Lander, Trino Alcides Díaz, Nora Castañeda, Carlos Blanco, Tosca Hernández, Máximo Sánchez y Pedro Castro. La mayoría de ellos se habían pronunciado durante la campaña a favor de la elección de Chirinos.

Otro personaje que ofreció sus declaraciones en repudio a la actuación de Chirinos fue su antiguo contendiente electoral Piar Sosa. Para él, Chirinos había lesionado la majestad de la universidad y el cargo que ostentaba, tanto por los hechos de Tazón como por las declaraciones que había ofrecido a la revista *Feriado* donde calificó de boba a la generación de los '80. Para Luis Beltrán Acosta, el ex decano Piar Sosa

38 Ídem.

39 *El Nacional*. "Profesores piden la renuncia de Chirinos". Caracas, 22 de septiembre de 1984. p. C 3.

en el fondo, "...gozaba un puyero declarando por los medios de comunicación que Chirinos estaba implementando su plan rectoral".⁴⁰

Los presos políticos reclusos en el cuartel San Carlos no se quedaron atrás de esta discusión y condenaron la llamada Masacre de Tazón a través de un comunicado de prensa, en el que repudiaban la acción de Chirinos, la GN y el gobierno, al intentar desvirtuar el tema de la agresión, al tiempo que manifestaban su solidaridad con los estudiantes:

Hacemos llegar nuestra palabra de solidaridad y aliento a todos los estudiantes venezolanos, a la vez que llamamos a sumar voces al repudio por la agresión de que estos fueron objeto. Debe impedirse a toda costa la maniobra tergiversadora que pretende presentar los hechos como resultado de supuestas actividades de corte subversivo, cómoda y manida excusa a la que permanentemente recurren los voceros gubernamentales para esquivar la responsabilidad y ocultar la realidad.⁴¹

Finalmente, Edmundo Chirinos como primer involucrado en el hecho ofreció sus impresiones. Para él, la acción de la GN había sido desmedida. Se defendía diciendo que su gestión era en sólo un trimestre la más exitosa de la historia ucevista, por lo que consideraba injusto que se le condenara por el "incidente" de Tazón. En sus primeras declaraciones a la opinión pública, aceptaba haberse equivocado cuando decidió de manera personal comunicarse con el viceministro del MRI. No obstante, alegaba en su defensa que él no imaginaba que la GN actuaría de esa manera, dada las buenas relaciones que venía teniendo con los cuerpos militares,

40 Acosta, Luis Beltrán. Ob. Cit. P. 70.

41 *Últimas Noticias*. "Contra la agresión a los estudiantes". Caracas, 24 de septiembre de 1984, p. 27.

Hubo una conducta censurable en grado extremo. Los militares cumplieron una acción bárbara. Yo confieso que cuando llamé al viceministro de Relaciones Interiores suponía que mandarían a un grupo idóneo. Además los antecedentes de la situación que habíamos logrado con la policía, los soldados... con la institución castrense influyeron en mí. **Yo no podía pensar que esto ocurriría.**⁴² (El subrayado es nuestro).

Chirinos parecía haber olvidado la tradición represiva que caracterizaba a los gobiernos que desde 1958 asumieron el poder en Venezuela, sobre todo la que ejercían a través de los cuerpos militares que, como una vez lo señaló Rómulo Betancourt, no recibían las protestas “con serpentinas y confetis, sino con plomo”.⁴³

Dada la política de “disparen primero y averigüen después”, parecía lógico pensar que la intervención de los militares, y sobre todo de la GN en una acción de protesta estudiantil, supondría un acto de represión, y la intención de Chirinos al solicitar su mediación fue al menos la de atemorizar a los jóvenes que venían desde Maracay. Tal era el estado de la opinión pública con relación a lo ocurrido con los estudiantes en Tazón, al momento en que Chirinos decidió presentar su renuncia temporal.

ENTRE VITUPERIOS Y ACLAMACIONES

Una de las primeras acciones tomadas por Chirinos al día siguiente de los sucesos de Tazón, fue presentar su renuncia ante el Consejo

42 Héctor Landaeta. “Chirinos: ‘Me equivoqué’”. *El Nacional*. Caracas, 21 de septiembre de 1984, p. C 1.

43 Esta frase fue pronunciada por Rómulo Betancourt en 1962, durante un acto político realizado en la plaza O’ Leary de El Silencio, con motivo de la celebración de los tres primeros años de su gobierno. Con la misma, hacía referencia a los sucesos denominados El Barcelonazo, sentenciando que todos aquellos que intentasen ingresar a un cuartel militar serían recibidos con “plomo”.

Universitario y reconocer que se había equivocado al solicitar la participación de la GN en el asunto del secuestro de los autobuses. Junto a él, intentó renunciar su equipo rectoral, no obstante, la misma les fue rechazada, y esta negativa fue vista por los estudiantes y empleados como una maniobra de las autoridades universitarias para empeorar las condiciones de su salida.

Para Chirinos, su estadía en el cargo en contra de la voluntad de la comunidad ucevista sería hostil. Por ello apuntó que estaba dispuesto a renunciar si ésta se lo pedía. Sin embargo, los estudiantes exigían que en lugar de renunciar, fuese destituido por el Claustro Universitario o en su defecto por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) que al parecer era el único organismo autorizado para realizar la destitución. Esa acción suponía que el organismo designaría a la nueva máxima autoridad, lo que equivalía a que el gobierno violara la tan defendida autonomía universitaria.

Lo más delicado de esa situación era que, de producirse una designación por parte del CNU de un rector interino, el abanderado de esa decisión sería el ex decano de la Facultad de Ingeniería y antiguo opositor electoral de Chirinos, Piar Sosa, personaje temido en el sector estudiantil por la conflictiva gestión que desarrolló en la mencionada facultad. Sosa era miembro del CNU y formaba parte del partido de gobierno, lo que hacía parecer lógica su designación ante la posibilidad de que Chirinos fuese destituido.

El temor de los estudiantes y de la comunidad universitaria en su conjunto a que ésta fuese intervenida por el gobierno y que además resultase como rector interino Piar Sosa, fue el ingrediente fundamental que encontró a favor Chirinos para retornar al cargo a menos de un mes de lo ocurrido en Tazón. En ese momento la autonomía universitaria que venía siendo bandera de lucha de la UCV se convirtió en un arma de doble filo, presta al chantaje de los partidos políticos y del propio Chirinos.

Así, luego de varios días de presiones ejercidas por estudiantes, profesores y empleados, Chirinos decidió presentar formalmente una renuncia temporal ante el Consejo Universitario, la cual le fue aceptada

en esta ocasión. En el documento entregado, Chirinos expresaba que su decisión de renunciar temporalmente al cargo de rector se debía a un intento por solventar la crisis que se había generado en la universidad a raíz de los sucesos del 19 de septiembre. Sin embargo, el profesor Agustín Blanco Muñoz se refería a la renuncia temporal de Chirinos, como una estrategia para dar tiempo a que el caso fuese olvidado, refiriendo:

[...] la politiquería, la componenda y los conciliábulos encontraron una ‘salida inteligente’. Le recomendaron al ‘rector’ ausentarse un tiempo (‘breve y prudente’) del escenario para que todo se olvide. Borrón y cuenta nueva. Tiempo para que se desgasten los otros en controversias y viejas polémicas. (...) Mientras el doctor Chirinos utiliza su retiro para convertirse en personaje de primera plana [...]”⁴⁴

La decisión de Chirinos, lejos de calmar los ánimos de la comunidad ucevista, los alteró. Profesores y estudiantes que venían exigiendo su abdicación irrevocable realizaron una nueva asamblea en el Aula Magna para definir las acciones a tomar y para decidir de forma definitiva los mecanismos legales que se emplearían para destituirlo, en caso de que se negase a renunciar. El profesor Sáenz Mérida, señalaba en dicha asamblea que Chirinos había mantenido desde el momento de su triunfo una actitud autoritaria y represiva en contra de los estudiantes. En principio, cuando ofreció que expulsaría a quienes fomentaran disturbios y luego con las declaraciones que ofreció a la revista *Feriado*, en las que calificaba a los jóvenes de “generación boba”.

Los estudiantes continuaban exigiendo que fuese destituido de su cargo, por lo tanto, el escenario no era el más favorable para él. Su actuación durante los tres primeros meses de mandato, las declaraciones dadas a la revista *Feriado* y los sucesos del 19 de septiembre, sirvieron de caldo de cultivo para que fuese rechazado y condenado. En este

44 Agustín Blanco Muñoz. “La UCV...”

sentido, la actuación de los partidos políticos y del propio gobierno en la labor de limpiar el nombre de Chirinos fue fundamental, en tanto que se dieron a la tarea de convencer a su militancia estudiantil de que Chirinos era el mal necesario para que la universidad no fuese intervenida por el Ejecutivo.

Una de las estrategias aplicada por los partidos políticos fue el pronunciamiento del Congreso. La comisión que se había creado con el objetivo de investigar los hechos, dictaminó en su informe presentado el día 26 de septiembre, que el rector había actuado ajustado a derecho al tratar de evitar que se produjera un enfrentamiento entre los estudiantes que venían desde Maracay y las autoridades universitarias. Los diputados llegaron a la conclusión de que la actitud de los estudiantes al secuestrar los autobuses era deplorable, al igual que la de los decanos de las facultades de Agronomía y Veterinaria, Pedro Vegas y Juan Troconis respectivamente, que no controlaron la situación en su localidad.

El informe de la comisión que fue aprobado por mayoría simple, en vista de que los partidos MAS y COPEI se abstuvieron de firmarlo por considerar que era sesgado, causó asombro e indignación en los estudiantes, quienes según esto, pasaron de ser víctimas a convertirse en victimarios. Con esta acción se daba el primer espaldarazo político al “rector del consenso”, quien durante su interpelación no escatimó esfuerzos en alabar los dictámenes que de esa comisión pudiesen surgir

De todos los tribunales o jueces formales o informales que puedan juzgarme, el más respetado por mí es el Congreso de la República y el mejor juicio que surja de esta interpelación, hecha por diputados electos por el pueblo, que representan el pluralismo ideológico y político.⁴⁵

45 Alba Sánchez. “Chirinos recibió un reconocimiento parlamentario: El Congreso es el tribunal que más respeto”. *El Nacional*. Caracas, 26 de septiembre de 1984, p. C-1.

Por otro lado, el MIR fue uno de los primeros partidos políticos en manipular la situación desde la universidad, al publicar un comunicado en la prensa con el cual alertaba a la comunidad ucevista de la supuesta intención de AD, COPEI y los llamados “ultrosos”⁴⁶ de que Chirinos renunciara para propiciar la intervención de la universidad. En el comunicado enfatizaban su rechazo a la agresión a los estudiantes, la actuación de Chirinos, del gobierno y el informe presentado por el Congreso con relación a los hechos, pero al mismo tiempo señalaban:

[...] denunciamos las actividades mezquinas y retaliativas impulsadas desde ya por sectores de AD y COPEI, que juegan a la crisis (...) Todo ello encaminado a obtener la Rectoría mediante un velado proceso de intervención. (...) **llamamos a la reflexión a aquellos sectores e individualidades que se han dejado confundir** (...) por el ánimo oportunista de algunos factores (...). **Rechazamos la renuncia del rector Edmundo Chirinos,** (...) Tal renuncia frustraría un proceso interno de transformación universitaria que aglutine a la institución por el camino constructivo y la aleje del pasado burocratismo que caracterizó las últimas administraciones rectorales.⁴⁷ (El subrayado es nuestro).

Todo tipo de tácticas dilatorias fueron puestas en marcha con el objetivo de distraer a la opinión pública y, en especial, al sector estudiantil. Entre ellas estuvo un pleito de competencias para investigar a los responsables del hecho y ejecutar las sanciones a que hubiera lugar. La discusión entre si el tribunal militar o el civil debía ocuparse de las investigaciones estuvo presente durante mucho tiempo. La intención era clara, los estudiantes manifestaban ante la prensa el temor que les

46 Con este calificativo se hacía referencia tanto a la llamada ultraizquierda, como a la ultraderecha.

47 *El Nacional*. “La UCV contra la intervención: Acción universitaria para superar la crisis”. Caracas, 30 de septiembre de 1984. p. D-5.

causaba, luego del dictamen del Congreso, que el caso fuese resuelto por tribunales militares, en tanto que, quienes comenzaban a figurar como responsables de la agresión eran ellos, pues llegó a decirse que el ametrallamiento se inició a raíz de unos disparos que recibieron los militares desde un carro que se encontraba estacionado cerca de los autobuses.⁴⁸

Por parte de las autoridades universitarias, la estrategia estuvo centrada en mantener las actividades suspendidas, en tanto los estudiantes exigían que se reanudaran las clases para poder emprender las acciones de protestas que se habían planteado. Sin embargo, el Consejo Universitario consideraba que no era pertinente por cuanto los ánimos aún estaban caldeados y en cualquier momento podían producirse nuevos hechos de violencia.

Durante esos días de suspensión de actividades las rencillas entre los grupos políticos ucevistas se hicieron sentir. Se planteó la realización de una marcha que saldría de la plaza del rectorado hasta el centro de Caracas y luego fue suspendida por el desacuerdo entre las tendencias. Esta suspensión originó que se realizara dentro de la universidad una manifestación pacífica en protesta a lo que venía siendo la actitud de la FCU por lo ocurrido en Tazón y al tema de la renuncia de Chirinos.

Por ello, el 3 de octubre cuando se realizó la marcha que otrora había sido suspendida, el presidente de la FCU Julio Casas, en medio de pitas y abucheos, se vio obligado a retirarse debido al rechazo que hacia su persona existía en la base estudiantil, por haber decidido junto al Consejo Directivo de la FCU que se realizara un referéndum consultivo para definir el destino de Chirinos, después de declarar ante la prensa la decisión irrevocable de los estudiantes de que el rector renunciara.⁴⁹

48 El vehículo al que se referían pertenecía al presidente de la FCU Julio Casas, quien se encontraba en el lugar al momento del ametrallamiento. Durante varios días la policía estuvo tras su pista hasta que se determinó que la información era errada.

49 Adicionalmente como suele ocurrir en el mundo político de la universidad, comenzaron a girar los rumores de que el presidente de la FCU Julio Casas, fue visto saliendo de la casa del rector, días antes de la decisión del Consejo Directivo de la FCU.

La actitud de Casas al reunirse con Lepage y luego con el ministro de la Defensa, vicealmirante Ángel Brito Martínez, para llegar a “un entendimiento” fue mal visto por los estudiantes. Esto contribuyó a afianzar la imagen ya desprestigiada que tenían los partidos políticos dentro de la universidad.

Por su parte, Chirinos estaba dispuesto a volver a la universidad, aun en contra de la voluntad estudiantil. De ahí que comenzó su peregrinaje en busca de apoyo. En principio se reunió con la directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), a la que días antes había calificado de corrupta y con la cual estableció una suerte de acuerdo político para que sus agremiados permitiesen su regreso. En dicho acuerdo, el rector se comprometió a consultar con los docentes las decisiones que con respecto a la universidad tomaría en lo sucesivo.

Posteriormente, se reunió con los estudiantes de Medicina de la escuela José María Vargas. En esa reunión los estudiantes le hicieron duras críticas pero luego manifestaron su deseo de que éste continuara a la cabeza de la universidad. Igual suerte tuvo al reunirse con los estudiantes de Medicina de la escuela Luis Razetti. No obstante, no ocurrió lo mismo con los estudiantes de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, quienes realizaron una asamblea a la que el rector nunca asistió y en la que insistieron en que él debía renunciar.

Los representantes de la FCU continuaban en su empeño de realizar el referéndum estudiantil, pero Chirinos estaba dispuesto a volver a la UCV, así éste le resultara desfavorable y así lo hizo. Antes de que se conocieran los resultados de la consulta se reincorporó a su cargo con un sencillo acto realizado en el Consejo Universitario, durante el cual leyó un documento en el que apuntaba los motivos de su retorno en los siguientes términos:

‘Transcurrido el lapso de tiempo que hemos considerado prudente en relación a los motivos que expuse al ausentarme temporalmente de mi cargo, deseo comunicar al Consejo Universitario mi intención de reincorporarme al ejercicio pleno de mis

funciones (...) Esos motivos (...) se cumplieron cabalmente. Por un lado fue mi intención facilitar el proceso de discusión y análisis que se han desarrollado ampliamente en la comunidad ucevista. Y por el otro, el que se me permitiese cumplir con la obligante participación diaria y activa en las distintas instancias universitarias (...) Los hechos han corroborado mi justificada decisión.⁵⁰ (El subrayado es nuestro).

La noticia del retorno de Chirinos no fue bien recibida por los estudiantes en Maracay, quienes a carpetazos e insultos finalizaron una asamblea en la que se discutía el asunto entre alumnos y profesores. A la mañana siguiente realizaron una toma en las puertas del núcleo y plantearon la realización de un paro de tres días en protesta por la reincorporación del rector. De inmediato fueron suspendidas las actividades y un grupo de estudiantes se trasladó a Caracas para manifestar en la Ciudad Universitaria.

La disputa se generó a propósito de que los profesores que en principio habían aceptado condenar la actuación de Chirinos y la GN, luego se abstuvieron de votar la propuesta. Por ello, aún cuando no se produjeron hechos de violencia, se presentó una tensa situación, por cuanto los alumnos de Maracay decidieron no reconocer a Chirinos como su rector.

Entretanto, en Caracas la FCU presentaba los resultados del referéndum que dio como ganadora la opción del “no” a la renuncia de Chirinos con una cifra de casi cuatro mil votos de los cinco mil doscientos alumnos consultados. Los estudiantes de Maracay no tuvieron otra opción que aceptar los resultados y advertir a Chirinos que sería vigilado en lo sucesivo en cualquier intento que tuviese de continuar con la política personalista que había desarrollado.

50 H.L.M. “Reasumió el rectorado de la UCV: Volvió Chirinos”. *El Nacional*. Caracas, 19 de octubre de 1984, p. C 1.

II. DE MÉRIDA A EL AMPARO

En 1986 la caída internacional de los precios del petróleo sumergió al país en una crisis económica superior a la de 1983. Jaime Lusinchi había ofrecido cancelar la deuda externa y en ese sentido firmó en 1984 un acuerdo de pago con la banca internacional con el cual asumía los riesgos en caso de un eventual desmejoramiento de la economía. De ahí que en 1986 tuvo que renegociar el pago de la deuda y en esta negociación el país quedó en evidente desventaja ante sus acreedores. El gobierno recurrió al uso de las reservas internacionales para continuar cancelando los compromisos de la deuda, lo que hizo que se agravaran las ya depauperadas condiciones de vida del venezolano. De lo anterior se desprende el comienzo de una nueva etapa en la historia de las protestas estudiantiles y la represión en Venezuela.

¿DESCONTENTO SOCIAL O PLAN SUBVERSIVO?

El 13 de marzo de 1987, un grupo de estudiantes de la ULA (Mérida) que aprobaron el último examen de la carrera de ingeniería, salieron en caravana como se acostumbraba en aquella ciudad para celebrar la culminación de sus estudios universitarios. Durante la caravana el estudiante Luis Carvallo Cantor, acompañado de su novia, se detuvo

para orinar frente al garaje de la residencia del vicepresidente de la Asociación de Ganaderos de Mérida, abogado Bernardino Navas Vera. Primero lo hizo la muchacha y luego él. En ese momento, el abogado salió de la casa y luego de un intercambio de palabras con Carvallo, en las que le reclamaba lo que hacía, le propinó dos disparos que le atravesaron el hígado y la columna vertebral dejándolo sin vida en el acto. El grupo de estudiantes que venía en la caravana al presenciar el asesinato se abalanzó contra el agresor para lincharlo, pero éste logró escapar dejando a su familia en el interior de la casa. Los estudiantes, en medio de la indignación conminaron a los habitantes de la casa a desalojarla y procedieron a saquearla y quemarla con todo lo que se encontraba en su interior.

La policía logró detener al homicida, quien en todo momento se declaraba inocente, pero le fue imposible controlar a los estudiantes que llenos de ira destrozaban la casa. La noticia del asesinato del estudiante pronto se extendió por toda la ciudad y con ella la violenta manifestación, no sólo de los estudiantes, sino del grueso de la población merideña que tomó las calles en protesta por el asesinato del estudiante. La casa distrital del partido AD fue saqueada y quemada, así como diversos locales comerciales y algunas entidades bancarias que fueron apedreadas. El periódico *El Universal*, a los dos días del hecho reseñaba la noticia señalando:

El estudiante de ingeniería graduado post mortem ayer domingo antes de su inhumación fue muerto a balazos por el abogado José Bernardino Navas vicepresidente del gremio de ganaderos del Estado. Navas sorprendió a Carvallo en el jardín de su casa y discutieron, el joven de 26 años había concluido el último examen de sus estudios de ingeniería en la ULA, lo cual celebraba con varios amigos. Desde el momento en que ocurrió el hecho de sangre, comenzaron violentos disturbios.⁵¹

51 Asdrúbal Romero. "150 heridos en Mérida". *El Universal*. Caracas, 17 de marzo de 1987, p. 28 cuerpo 4.

La ciudad quedó totalmente paralizada por la violencia, efectivos de la GN de ciudades cercanas fueron llevados al lugar para reprimir a los manifestantes que durante dos días consecutivos mantuvieron a Mérida en jaque. Para el 16 de marzo se contabilizaban ciento sesenta heridos, entre los que se encontraba un estudiante –hijo de un profesor de la ULA– al que la policía le había disparado dos tiros en la pierna a quemarropa y más de trescientos detenidos.

Las clases a todos los niveles fueron suspendidas y la Cámara de Comercio de Mérida acusaba al gobernador Carlos Consalvi de negligente por no controlar la situación en la que estaban siendo destruidos sus negocios. Los avisos arrancados de los comercios, así como algunas alcantarillas fueron usados como barricadas por los manifestantes con el objeto de protegerse de los cuerpos policiales y la GN.

En medio de la agitación, grupos de estudiantes de varias universidades del país intentaron trasladarse en autobuses a Mérida, en solidaridad con los manifestantes, pero fueron detenidos en las alcaбалas de Las González y Mucurubá por efectivos de la GN.

De regreso del entierro de Carvallo, se desató en el centro de la ciudad una batalla campal entre estudiantes, policías y guardias nacionales. Algunos manifestantes intentaron tomar los puestos policiales de los barrios Pueblo Nuevo y Simón Bolívar y fueron repelidos con gases lacrimógenos, perdigones y disparos. En la trifulca fueron destruidos e incendiados dos vehículos del Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS) y una familia denunció que a consecuencia de los gases lacrimógenos arrojados por la policía, un niño de año y medio de nacido había muerto intoxicado.

Los padres del estudiante fallecido hacían un llamado a la calma, no obstante, la indignación y la ira de los estudiantes se aderezaban con el hecho de que el papá y el hermano del homicida habían sido acusados en el pasado de asesinar a unos campesinos y nunca fueron apresados. Por ello el secretario general de la FCU-ULA Caracciolo León, afirmaba ante los medios de comunicación lo siguiente:

Hasta que no se dicte auto de detención contra el homicida de Luis Ramón Caravallo Cantor y se haga justicia, los estudiantes seguiremos protestando pacífica o violentamente, porque se trata de defender el derecho a la vida. Estamos dispuestos a acabar con los “bernardinolas” que levanten su mano para disparar contra un estudiante.⁵²

La violencia de Mérida se trasladó a otros lugares del país. En la UCV un grupo de estudiantes quemó en la plaza Las Tres Gracias un autobús en protesta por el asesinato de Caravallo y la represión que se vivía en la ciudad andina. El resultado de esta acción fue el acordonamiento policial de la Universidad por efectivos de la DISIP y la PM durante todo ese día.

El Instituto Universitario Pedagógico de Caracas (IUPC), donde también se produjeron manifestaciones en apoyo a los estudiantes de Mérida, fue allanado por la GN. Durante estos disturbios se contabilizaron sesenta detenidos y setenta lesionados. Algo similar ocurrió en la ciudad de Cumaná en la que estudiantes universitarios paralizaron el tráfico de la Avenida Universidad y quemaron algunos cauchos.

En el núcleo Sucre de la UDO los estudiantes realizaron una marcha pacífica en rechazo a la muerte del estudiante, mientras que en Maracay, Barquisimeto y Maracaibo se desarrollaban violentos disturbios y enfrentamientos entre estudiantes y policías, motivo por el cual, por órdenes del titular del MRI José Ángel Ciliberto, fueron suspendidos los permisos para las manifestaciones estudiantiles, bajo la amenaza de que aquellos que se encontraran fomentando disturbios serían enviados a la famosa cárcel de las colonias móviles de El Dorado. En cumplimiento a estas órdenes fueron devueltos varios autobuses repletos de estudiantes que se trasladaban desde la ciudad de Maracay hacia Caracas para manifestar. Además fue tomado el terminal de aquella ciudad por la GN para evitar los traslados.

52 Iris Castellanos. “Advierte dirigente estudiantil de la ULA: La protesta en Mérida continuará hasta que se haga justicia. *El Nacional*. Caracas, 18 de marzo de 1987, p. D 12.

Las protestas, detenciones y allanamientos a las residencias de estudiantes se intensificaron a nivel nacional. En Maracaibo fue allanada la casa del bachiller Jesús Rincón, miembro del “Movimiento 20” y candidato a la presidencia del centro de estudiantes de la escuela de Ingeniería por la alianza MAS, MIR, MEP, quien fue detenido junto a Lenin Cardozo y Tony Boza, candidatos por la misma coalición a la FCU-LUZ y el centro de estudiantes de la escuela de Economía, respectivamente.

En la ciudad de Maracay, luego de violentos disturbios en el núcleo de la UCV fueron detenidos cuatro estudiantes y pasados a la DISIP. La misma suerte corrieron cinco estudiantes de nacionalidad árabe en Mérida tras el allanamiento de su residencia, mientras en Puerto La Cruz durante una marcha realizada hasta la casa municipal de esa ciudad fueron detenidos quince estudiantes más.

Tales niveles de agitación y violencia no podían pasar inadvertidos. En principio por su magnitud y luego porque desde las protestas de 1984 cuando los sucesos de Tazón, el país no había experimentado una jornada similar. Por ello comenzaron a expresarse críticas con relación a lo ocurrido en Mérida y en el resto del país. Paradójicamente, uno de los primeros en emitir su juicio y negociar con el ministro Ciliberto la liberación de los estudiantes presos en la DISIP fue el rector de la UCV Edmundo Chirinos, quien en el pasado había sido un duro crítico de las protestas estudiantiles. Para él, detrás de los días de violencia vividos en el país se escondía un profundo descontento social, por lo que enfatizó:

Los violentos hechos acontecidos en Mérida, no pueden analizarse como un reclamo simple de justicia, porque ello envuelve una realidad sociopolítica mucho más grave. En esta ciudad andina cada día se agudizan los cuadros de miseria crítica. Hay un profundo resentimiento para las clases más desposeídas. De allí la movilización como forma de protesta, que pudiera ser indicador de un fenómeno social que puede generalizarse en todo el país.⁵³

53 *El Nacional*. “El rector Chirinos: Estos hechos envuelven una realidad sociopolítica”. Caracas, 18 de marzo de 1987, p. DU.

Las palabras de Chirinos hicieron eco en un grupo de diputados de oposición en el Congreso Nacional, pertenecientes a los partidos MAS, MIR, COPEI, Liga Socialista, MEP, PCV y Opina, quienes formaron, como de costumbre, una comisión que se encargaría de investigar los hechos. No obstante, para el presidente del Congreso, el diputado de AD, David Morales Bello, la muerte del estudiante fue una excusa de “mentes perturbadas de inclinaciones extremistas” para desestabilizar al país. Morales Bello invitaba a los diputados a defender la institucionalidad y la democracia frente a los “amotinados de Mérida” que intentaban destruirla. En la misma línea de Morales Bello giraron las declaraciones del gobierno con relación a lo ocurrido.

El ministro Ciliberto acusaba de narcotraficantes y extremistas a los que protagonizaron y, a su juicio, organizaron los disturbios de Mérida:

Yo niego rotundamente esto, [refiriéndose a la tesis del descontento popular] hacer esta deducción no pasa de ser un disparate porque no responde realmente a las condiciones existentes en el país. **Lo que aconteció en Mérida como lo acabo de decir con toda propiedad, fue producto de una conjunción de fuerzas y de vicios antidemocráticos que aprovecharon una desgraciada coyuntura para hacer acto de presencia vandálica.**⁵⁴ (El subrayado es nuestro).

El gobierno se negaba a reconocer que lo ocurrido en Mérida había sido un estallido social. Al contrario de esta tesis planteaba que se trataba de un plan subversivo para perturbar la democracia, al estilo de la época de los ‘60. Quizá se habría podido convencer a la opinión pública de esto, de no haber sido porque nunca presentaron pruebas que demostraran que sus acusaciones eran ciertas, más aún cuando

54 Carlos Romero Faz. “Grupos subversivos, indocumentados y narcotraficantes provocaron los desórdenes” *El Universal*. Caracas, 19 de marzo de 1987, p. 12 cuerpo 1.

Héctor Alonso López –secretario general de AD por la seccional de Mérida– calificó de insensatez el señalamiento que llegaron a hacer algunos miembros de su partido, en cuanto a que, el Presidente de Cuba Fidel Castro había planeado desde su país los disturbios.

Finalmente, el 22 de marzo aparecen en los diferentes medios de comunicación social las tan esperadas declaraciones del primer mandatario, en las que evidentemente también negaba la posibilidad de que lo ocurrido en Mérida hubiese sido producto de un estallido social, y en las que calificaba de cobardes a quienes manejaban esta hipótesis porque con ella “se atacaba a un presidente democrático”:

Yo no niego que en Venezuela haya problemas sociales. Precisamente estamos trabajando para resolverlos. Los hay en Venezuela, en todo el mundo, pero de allí a decir que vivimos una explosión social es una mentira y un fariseísmo, [...] ¿Qué ocurrió en Mérida? Un estudiante fue asesinado [...] Hubo una reacción en principio justificable, de los compañeros del estudiante. [...] Pero luego actuó el grupo organizado de agitadores, con las consecuencias ya conocidas [...]⁵⁵

Ese mismo día desde Parque Central, en un acto con la juventud de AD, el precandidato a la Presidencia de la República Carlos Andrés Pérez (CAP) quien llegaba de una gira realizada por América Latina con el africano Julius Nyerere (presidente de la Comisión Sur), hacía un análisis distinto al de Lusinchi y sus compañeros de partido con relación a lo ocurrido en Mérida y el resto del país:

Lo que ha sucedido debe ser un motivo para la reflexión, **para que tratemos de impedir que en un país convulsionado por la situación económica no afloren situaciones tan lamentables como la de Mérida** [...] Lo de Mérida es un aldabonazo, es una campanada

55 Mario Villegas. “El Jefe del Estado, Jaime Lusinchi: Es una cobardía atacar a un Presidente democrático”. *El Nacional*. Caracas, 22 de marzo de 1987, p D 16.

que debe sonar duro en nuestros oídos, **es una circunstancia que tiene que preocuparnos** [...]⁵⁶ (El subrayado es nuestro).

CAP no desmintió la posibilidad de que los sucesos de Mérida hubiesen sido planeados por algunos grupos subversivos, sin embargo, hacía mayor énfasis en el hecho de que la delicada situación económica del país conducía a estallidos de violencia y que el gobierno debía reflexionar al respecto. Evidentemente, las declaraciones de Pérez respondían a una situación específica: se encontraba en campaña, estaba frente a la juventud de AD y como aderezo el estudiante muerto pertenecía a esa tolda política.

La versión del gobierno era desmentida e incluso ridiculizada por los sectores políticos de la oposición. Por ejemplo para el MAS lo ocurrido en Mérida se debía a factores como: "... el desempleo y el alto costo de la vida [que] fueron detonantes mucho más eficaces entre la gente de los barrios de Mérida que cualquier **'ultra de cafetín' de la Universidad de Los Andes.**"⁵⁷ (El subrayado es nuestro). Con este sarcástico señalamiento el MAS intentaba resaltar la imposibilidad de que supuestos grupos "ultrosos" hubiesen planeado con tanto éxito los disturbios.

Otro análisis que dejaba mal parada las declaraciones del gobierno con relación a la inexistencia de un conflicto social en Venezuela, fue el elaborado por la coordinadora del área social de la Subcomisión de Asuntos Económicos y Sociales de la COPRE⁵⁸, Isabel Pereira. Para

56 Imperio Rodríguez. "CAP recibió respaldo de jóvenes de AD: Los sucesos de Mérida son un campanazo". *El Nacional*. Caracas, 21 de marzo de 1987, p. D8.

57 *El Nacional*. "Un discurso caradura: Las cinco verdades que Lusinchi ocultó". Caracas, 22 de marzo de 1987, p. D 5.

58 (Comisión Presidencial para la Reforma del Estado) Organismo creado por el presidente Jaime Lusinchi el 17 de diciembre de 1984, con el objetivo de impulsar la modernización del Estado que él llamó post-petrolero. El primer presidente de esta comisión fue el historiador Ramón J. Velásquez y ya para finales del año 1985 la COPRE comenzó a hacer sus propuestas para la reforma, que fueron vistas con recelo por los miembros del partido de gobierno, básicamente porque con ellas se minimizaba el poder de decisión de éstos en el escenario político. En resumen, fueron pocas las propuestas de esta comisión que se materializaron, quizás la más significativa de ellas fue la elección popular de los

ella, aunque lo expresó de forma solapada, en Venezuela la crisis del modelo económico estaba conduciendo a niveles de descontento social que impulsaban a la gente a protestar y al Estado a reprimir.⁵⁹

Todas estas opiniones parecían desechar las explicaciones del gobierno sobre lo ocurrido. El editorial de la revista *SIC*, en la cual se analiza la coyuntura política, social y económica del país, también avalaba la tesis del descontento social, al señalar que:

[...] la gente dio rienda suelta a su tremenda frustración causada por la escalada de precios, la caída del poder adquisitivo de los salarios, el desempleo, sobre todo de la juventud, el deterioro de los servicios, los tremendos negocios de los ricos, la falta de atención del Gobierno a las demandas populares y el alejamiento de los políticos (enfascados en la contienda precandidatural) de los intereses de la gente a quien dicen representar.⁶⁰

Por otra parte, no dejaba de alarmar la ola represiva que había de-satado el gobierno, no sólo en contra de los manifestantes, sino en contra de todo aquel que se presumiera que estuviese vinculado con los supuestos focos subversivos, por lo que el profesor Sáenz Mérida señalaba con asombro lo terrible de aquella situación apuntando en unas proféticas palabras lo siguiente:

[...] Asombra ver cómo en Venezuela nacen dispositivos militarizados y cómo la represión tiene una caracterización clasista. Aquí no existe legalidad plena y nuestra institucionalidad es muy precaria.
No resulta extraño que a la expectativa de conflictos sociales

gobernadores de estados, sin embargo, no puede desestimarse la importancia que tuvo durante los años de la crisis del sistema político puntofijista.

59 Roberto Giusti. "La COPRE propone un proyecto". *El Nacional*. Caracas, 6 de abril de 1987, p. D8.

60 Editorial. "¿Qué explotó en Mérida?". *SIC* Centro Gumilla, Año L, N° 494, abril 1987. p. 146.

cualquier protesta culmine en una masacre [...] ⁶¹ (El subrayado es nuestro).

Las protestas estudiantiles por el asesinato de Luis Carvallo concluyeron con una marcha que se realizó el 2 de abril de 1987, organizada por los estudiantes de la UCV y el IUPC que contó con la presencia de profesores, trabajadores, agrupaciones políticas de oposición y con gente del pueblo en general. Fue una manifestación nutrida que partió desde la plaza de El Rectorado a las once de la mañana hasta la plaza El Venezolano. Edmundo Chirinos en una franca reivindicación con el movimiento estudiantil ⁶² iba a la cabeza junto a los dirigentes políticos Teodoro Petkoff, José Vicente Rangel, Pedro Ortega Díaz y los decanos de diversas facultades.

El objetivo central de esta marcha era protestar en contra del asesinato del estudiante merideño, el alto costo de la vida y sobre todo contra la represión gubernamental. Todo había transitado sin novedades hasta que, el entonces precandidato presidencial, Eduardo Fernández (El Tigre) intentó incorporarse a la marcha y fue interceptado por una multitud que propinándole algunos empujones le gritaba ¡fuera, fuera!, según reseñaba la prensa del siguiente día.

Al mismo tiempo que en Caracas se realizaba esa marcha pacífica, en Barquisimeto y Barinas los estudiantes protagonizaban violentos enfrentamientos con la policía por los mismos motivos de la manifestación de la capital, y el resultado final fue de cuarenta y tres bachilleres detenidos entre las dos localidades.

Finalizada la multitudinaria marcha en Caracas, el conflicto parecía haberse detenido, como ocurrió luego de la última manifestación que se hizo en 1984 por la masacre de Tazón. Empero, la calma duraría

61 Marianela Balbi. “La democracia venezolana lleva con normalidad una gran carga represiva”. *El Nacional*. Caracas, 3 de abril de 1987, p. D2.

62 Aunque no debe desecharse de este juicio las intenciones de Chirinos de postular su candidatura para las elecciones presidenciales del año siguiente, como en efecto lo hizo apoyado por el MEP.

pocos días, por cuanto un nuevo factor perturbó la escena nacional, a saber, el aumento del transporte público.

GASES QUE INFLAMAN

El 27 de abril de 1987, la Comisión Nacional de Costos y Precios (Conacopresa) decretó el aumento del transporte público de 1 bs., a 2, 3 y 4 bs., de acuerdo al estado en que se encontrara la unidad de transporte. La protesta popular por esta medida no se hizo esperar. La gente se quejaba por el aumento excesivo del pasaje, en virtud de que, como lo señalaron diversos transeúntes que fueron entrevistados por el periódico *El Nacional*, el estado de los autobuses era deficiente. Para los estudiantes, por su parte, esta disposición alimentó una nueva jornada de intensas protestas a nivel nacional y una fortísima represión por parte de los organismos policiales.

Mérida, San Cristóbal, Barquisimeto, Maracay y Ciudad Bolívar fueron las primeras ciudades sacudidas por el alza del pasaje, con los violentos disturbios entre estudiantes y la policía. En Caracas, los estudiantes de la UCV, junto a los del IUPC, planearon una marcha con participación popular que partiría desde la plaza de El Rectorado y la avenida Páez de El Paraíso hasta la plaza Miranda, en rechazo al aumento del transporte público, la cual debía realizarse el 1 de mayo. No obstante, ese día la UCV fue allanada a tempranas horas de la mañana por efectivos de la PM, quienes al entrar destrozaron los autobuses en los que los estudiantes se trasladarían al centro de la ciudad. Esta acción, en lugar de impedir la protesta, propició la quema de cauchos y el secuestro de autobuses en El Paraíso, mientras que en la plaza Miranda los manifestantes que lograron congregarse en el lugar se enfrentaron con la PM, con saldo de varios heridos y detenidos.

Entretanto, en Mérida, por igual causa, los estudiantes de la ULA protagonizaron violentos disturbios en los que fue quemada una camioneta de la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (CANTV)

y detenidos dos estudiantes al frente de la Facultad de Humanidades, según reseñaba la prensa del día 3 de mayo. Ese mismo día el presidente Lusinchi, desde Margarita, insistía sobre el supuesto plan terrorista que estaba en marcha, planeado por grupos subversivos y el narcotráfico. De inmediato comenzó la represión en contra de los estudiantes, con allanamientos residenciales y detenciones, por lo que varios parlamentarios se solidarizaron con aquellos que estaban siendo víctimas de atropellos, como el congresista del MEP José Antonio González, quien denunció la desaparición de dirigentes estudiantiles:

Exigimos la integridad física de los detenidos en Cumaná y San Juan de los Morros donde numerosas viviendas fueron allanadas y dirigentes estudiantiles detenidos. En Cumaná fueron aprehendidos Andrés Cardona [...] Manuel Meneses, [...] Santos Rojas [...] Todos ellos se encuentran desaparecidos y las autoridades del estado Sucre niegan su detención pese a que les allanaron sus residencias.⁶³

El allanamiento a la UCV generó ruido, la acción de la policía fue tan desmedida que el gobierno no encontró manera de negar el hecho. Sin embargo, el ministro Ciliberto aseguró públicamente al rector Edmundo Chirinos que el MRI no había dado la orden a la policía, como si ese tipo de acciones no respondieran a los lineamientos de ese ministerio.

Además de las revueltas callejeras, los estudiantes organizaron una marcha en contra del alza del pasaje y en rechazo a la violación de la autonomía de la UCV. Por su parte, Chirinos formuló la denuncia ante la Fiscalía donde se comprometieron, como en todos los casos, a iniciar las investigaciones.

Entretanto, el gobierno insistía en la tesis del plan subversivo con el objetivo de justificar las acciones represivas que se estaban llevando

63 Humberto Álvarez. “Denuncian diputados y estudiantes: Allanamientos, detenciones y agresión por parte de los cuerpos policiales”. *El Nacional*. Caracas, 3 de mayo de 1987, p. D U.

a cabo. El ministro Ciliberto declaraba a los medios de comunicación que: “Todo cuanto ha acontecido está calcado sobre el diseño de ese plan. No por azar los centros universitarios han dado muestras de desbordamiento y manifestaciones violentas. Por ello tomamos las medidas del caso para evitar mayores daños.”⁶⁴ Días después señaló que lo ocurrido en la UCV no había sido un allanamiento sino “un auxilio policial” a los bomberos que se encontraban apagando el fuego de unos autobuses incendiados por los mismos estudiantes.

Las protestas estudiantiles en Maracay, Anzoátegui y Maracaibo en contra del alza del pasaje continuaron a la par de las detenciones y los allanamientos residenciales, bajo el pretexto del supuesto plan subversivo del cual aún se esperaban las pruebas que el ministro Ciliberto había ofrecido presentar. A medida que avanzaban los días, la violencia y la represión se intensificaban. El 5 de mayo en Maracaibo se contaban veinte heridos y doscientos detenidos en los disturbios; en Carabobo diecisiete detenidos y cinco en Barcelona, dos de los cuales eran profesores universitarios. En Puerto la Cruz, los estudiantes de la UDO quemaron una grúa perteneciente a la Pepsi-Cola, y secuestraron siete vehículos. Disturbios similares ocurrieron en Coro y Zulia. Esta jornada de protestas por el aumento del pasaje y el alto costo de la vida, fue respondida con allanamientos y detenciones de estudiantes.

El ambiente se tornó tan hostil que diversos sectores de la sociedad comenzaron a opinar acerca de la situación. Por ejemplo el ex presidente Luis Herrera Campins criticaba la reacción del gobierno ante las protestas estudiantiles y las afirmaciones con relación al plan subversivo, señalando:

Eso es un disparate político del Gobierno, porque el Gobierno lo que debe hacer cuando tiene ese tipo de manifestaciones, cuando las calles son una invitación a la protesta social que se siente en todas partes,

64 Imperio Rodríguez. “Ciliberto ratificó el comunicado oficial: El gobierno ordenará investigación sobre intervención policial en la UCV”. *El Nacional*. Caracas, 4 de mayo de 1987, p. D 4.

es tratar de analizar, de averiguar, de establecer las relaciones por las cuales el descontento popular se produce.⁶⁵

Dos profesores de la UCV,⁶⁶ quizás con menor intencionalidad política que el ex presidente Herrera Campins, presentaron un análisis de la situación del país y las protestas estudiantiles señalando lo siguiente:

Los estudiantes como parte integrante de los sectores medios del país, expresan una doble crisis: la suya, como pérdida de sus expectativas profesionales, ante la degradación de los títulos universitarios y una suerte de proletización forzada; y por otra parte, la crisis de la familia clase media severamente castigada por la pérdida de un cierto confort adquirido en los años dorados del ‘boom’ petrolero [...].⁶⁷

Personajes como el rector Chirinos y el ex presidente Rafael Caldera, ambos precandidatos presidenciales, también opinaban sobre las jornadas de protestas desatadas, resaltando la actitud errada del gobierno al vincular la protesta social con la subversión de los años sesenta. En respuesta a ese tipo de declaraciones destempladas de los dirigentes de AD, como Manuel Peñalver, el precandidato presidencial Chirinos señaló que lo único que evocaba a aquella época era la actitud represiva del gobierno. Para Caldera, hablar de planes subversivos y terroristas era una exageración del Ejecutivo, en tanto que el responsable de la situación era la crisis económica que no había sido canalizada durante la gestión del presidente Lusinchí.

65 Mario Villegas. “Luis Herrera Campins: El gobierno comete un disparate político al hablar de terrorismo”. *El Nacional*. Caracas, 8 de mayo de 1987, p. D 10.

66 Víctor Córdova y Carlos Eduardo Febres, jefe de la cátedra de Fundamentos de la Sociología de la escuela de Economía de la UCV y jefe de la cátedra de Metodología de la Investigación de escuela de Trabajo Social de la UCV respectivamente.

67 Rosita Caldera. “Los investigadores sociales ante la crisis: Los estallidos de violencia surgen ante la pérdida de la calidad de vida”. *El Nacional*. Caracas, 7 de mayo de 1987, p. D 26.

Un análisis, a nuestro juicio más acertado, de lo que ocurría en el país y en el seno del movimiento estudiantil lo ofreció el psiquiatra José Luis Vetancourt al señalar:

[...] se pensaba [...] que el estudiantado estaba completamente atónico, fuera de tono; apático, convertido en un estudiante pragmático, muy sujeto a su objetivo de graduarse... **Ahora estamos presenciando acontecimientos que demuestran que el estudiantado está saliendo de la apatía y la indiferencia**, y es evidente que hay una movilización de la conciencia estudiantil [...] como ocurrió en Mérida y en otras localidades del país.⁶⁸ (El subrayado es nuestro).

Y luego afirmó, sobre la actitud del gobierno que señalaba que todo se trataba de un plan subversivo, lo siguiente:

Es una reacción típica de todo gobierno, en el afán de desconocer las realidades que no le convienen [...] No hay ninguna subversión. Lo que hay es un estallido de agitación y descontento que puede convertirse en una situación explosiva si no se le pone remedio a las causas que la están produciendo. **Ningún agitador profesional**, si es que existe, **encuentra eco si no hay un estado de conciencia predispuesta a la agitación.**⁶⁹ (El subrayado es nuestro).

Mientras especialistas e interesados opinaban sobre las protestas protagonizadas por los estudiantes, continuaba la violencia en las calles. En Falcón, luego de tres días de disturbios consecutivos, su gobernador Ildemaro Villasmil resolvió aplicar la Ley sobre Vagos y Maleantes (LSVM)⁷⁰ a los estudiantes que fueran arrestados por

68 Euro Fuenmayor. "José Luis Vetancourt y la violencia social: El pueblo está llegando a niveles de ira". *El Nacional*. Caracas, 8 de mayo de 1987, p. D 13.

69 Ídem.

70 Esta ley promulgada en 1956 en sustitución de otra del mismo nombre del año 1939, tenía como objetivo la prevención del delito, dándole potestad a órganos administrativos como gobernadores y prefectos de privar de libertad a las personas sin el debido proceso, bajo

manifestar con la amenaza de ser enviados a las colonias móviles de El Dorado.

En el Zulia las protestas en contra del alza del pasaje y la represión policial se intensificaron, dando pie a que el día 7 de mayo LUZ fuese allanada por organismos policiales. En esa acción fueron maltratados y detenidos un gran número de estudiantes y profesores. Mientras esto pasaba en el Zulia, la catedral de Barcelona era tomada por un grupo de estudiantes de la UDO en protesta por el aumento del pasaje y la represión policial.

Luego del allanamiento a LUZ, las protestas estudiantiles se acrecentaron y obligaron al gobernador Omar Barboza Gutiérrez a intervenir en la solicitud del retiro de las fuerzas policiales de las adyacencias de la universidad y a comprometerse a velar por la integridad de los estudiantes detenidos y por el subsidio del medio pasaje estudiantil. No obstante, las protestas en contra del allanamiento a LUZ continuaron y el 11 de mayo un grupo de estudiantes intentó incendiar la sede de la Lotería del Zulia en lo que resultaron heridos cuatro de ellos por la GN.⁷¹ La misma situación de violencia se generó el día 12 de mayo. En esta ocasión fueron cuarenta y dos los detenidos y cinco los heridos.

La protesta estudiantil iba acompañada, en muchas ocasiones, de la protesta popular. Por ello el 19 de mayo de 1987 los estudiantes de la UCV convocaron a un paro de veinticuatro horas en protesta por las tarifas del transporte y se dirigieron a Catia y Petare a apoyar las manifestaciones populares que allí se desarrollaban. En Puerto la Cruz, un grupo de estudiantes saqueó un camión con tres mil kilos

acusación de ser un delincuente potencial con pena de 3 meses a 6 años de prisión sin derecho a la defensa. Esta ley a partir de 1961 entró en contradicción con la Constitución, sin embargo, no fue derogada y se convirtió en un instrumento legal aplicado por la democracia puntofijista para fines políticos. Finalmente, luego de intensas diligencias de organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales para su derogación, fue anulada en 1997 por la Corte Suprema de Justicia por inconstitucional.

71 *El Nacional*. “Cuatro heridos en disturbios en LUZ”. Caracas, 12 de mayo de 1987, p. D U.

de azúcar propiedad de Leche La Llanera y repartió la mercancía entre los lugareños de la zona, mientras que en Cumaná sectores populares acompañaban a los estudiantes en los enfrentamientos con la policía.

Los disturbios por el costo del pasaje y la detención de los estudiantes y el allanamiento a LUZ se extendieron durante todo el mes de mayo en ciudades como Puerto Cabello, Ciudad Bolívar, Maracay, San Mateo y La Victoria y por supuesto el Zulia, donde los estudiantes realizaban marchas pacíficas para cumplir con el acuerdo logrado con el gobernador de no realizar manifestaciones violentas, sin que ello supusiera abandonar sus exigencias.

Finalmente, en medio de toda la conmoción callejera por las protestas estudiantiles y populares, el ministro Ciliberto presentó las pruebas del supuesto plan subversivo que había anunciado, en las que involucró a sectores religiosos y al partido Bandera Roja, durante una interpelación en el Congreso Nacional:

En primer lugar, un tríptico distribuido públicamente por el grupo Bandera Roja en el cual señala que sí hay un plan subversivo; en segundo término otro documento del mismo grupo donde admiten tener un plan nacional para subvertir el orden [...] y en tercer término un remitido publicado en varios diarios capitalinos el pasado 17 de mayo y firmado por un grupo de sacerdotes y religiosas en el cual hacen un análisis de la situación explosiva del país. [...] y la carta enviada por el mismo grupo al líder libio Mohamar Gadafi [...] ⁷²

Estas pruebas presentadas ante el Congreso por el ministro Ciliberto que parecían tener más intención de buscar un chivo expiatorio que de demostración contundente del plan subversivo que anunció, no lograron convencer a la opinión pública, por cuanto los panfletos repartidos por el partido Bandera Roja considerado de ultra izquierda que evocaban

72 Jorge Villalba. "Documento de Bandera Roja y carta a Gadhafi exhibió MRI como pruebas de plan subversivo. *El Universal*. Caracas, 14 de mayo de 1987. p. 1-13.

a la subversión del orden, eran el pan nuestro de cada manifestación o marcha convocada para protestar en contra del gobierno.

Por otra parte, el remitido de los sacerdotes publicado en varios periódicos capitalinos era la respuesta a las agresiones de las que fuera víctima el padre Pablo González cuando se dirigió al destacamento N° 7 de la PM para solicitar la liberación de un joven de la parroquia de Petare. El remitido era un llamado al gobierno para que cesara la represión y no un comunicado subversivo.⁷³

En defensa a los clérigos de Petare, también se pronunció el cardenal José Alí Lebrún quien afirmó que los suscriptores del comunicado:

Sin duda alguna cumplían con su deber. [...] Claro que cada persona lo expresa a su manera. Ellos lo hicieron con la mejor voluntad y no son ningunos subversivos. El documento fue un apoyo a la doctrina de la Iglesia. Agredían a unos jóvenes y el sacerdote salió en su defensa. Entonces lo golpearon a él también y lo arrastraron por los cabellos varios metros.⁷⁴

Sin embargo, el gobierno continuó con la represión y el encarcelamiento a líderes estudiantiles y comunitarios, lo que a su vez generaba más acciones de protesta y huelgas de hambre.

LA HUELGA DE HAMBRE CONTRA LA REPRESIÓN

A comienzos del mes de junio, diecisiete de los estudiantes y líderes comunitarios detenidos fueron enviados a la cárcel de la Pica en Maturín, acusados de subversivos y terroristas, y once estudiantes de la UDO en Barcelona fueron expulsados por haber secuestrado

73 Inger Pedreañez. “Los sacerdotes responden a Ciliberto: Nosotros no somos subversivo”. *El Nacional*. Caracas, 22 de mayo de 1987, p. C 3.

74 Fabrico Ojeda. “El Cardenal José Alí Lebrún: Las injusticias no se pueden callar”. *El Nacional*. Caracas, 23 de mayo de 1987, p. D1.

en su oficina durante varias horas al decano del núcleo de Jusepín, Oswaldo del Castillo, en protesta por la complicidad de éste con los cuerpos represivos. Ambos hechos dieron pie a otra oleada de protestas estudiantiles signada por una jornada de huelgas de hambre iniciada en la Catedral de Barcelona con dos estudiantes.

El 5 de junio de 1987 un grupo de bachilleres de la UDO tomó por tercera vez la Catedral de Barcelona en protesta por la expulsión de once compañeros del núcleo de Jusepín y para exigir la liberación de los diecisiete presos en la cárcel de la Pica. Dos de los tomistas, Jesús Vásquez y Jorge Bello, cursantes del sexto semestre de Ingeniería Eléctrica, se declararon en huelga de hambre. Entre tanto, la ola de represión y allanamientos continuaba. El 11 de junio fue allanada la UDO de Anzoátegui. El saldo fue de ciento veinte heridos y treinta estudiantes presos, entre ellos el presidente de la FCU-UDO William Rodríguez. Este allanamiento se convirtió en un ingrediente más para la huelga de hambre que luego se generalizó en todo el país.

Diez días después de haberse iniciado la huelga de hambre en Barcelona, un grupo de estudiantes del IUPLCM del núcleo de Charallave asumió la misma medida de protesta en exigencia de algunas reivindicaciones estudiantiles, tales como:

[...] un comedor para los bachilleres de La Yaguara, servicio médico-odontológico con enfermería, servicio de orientación, ampliación de la biblioteca, creación de los laboratorios de Construcción Civil, respeto a la selección de personal por concurso de credencial y oposición, ampliación del fondo de la caja chica, dotación del servicio de reproducción, servicio de transporte [...] ⁷⁵

Esta lista de exigencias se traducía en una crítica a las autoridades del instituto, en especial a su directora Iris Valladares, quien según

75 Herculía Garnica. "El ayuno se convirtió en huelga de hambre indefinida". *El Nacional*. Caracas, 17 de junio de 1987, p. C1.

reclamaban los estudiantes y luego algunos profesores, cometía todo tipo de arbitrariedades sin resolver los problemas de la institución. Es indudable que el ambiente de conflicto que se había generalizado en el movimiento estudiantil permitía, aunque se tratara de problemas internos de sus instituciones, adoptar medidas consideradas extremas. Así encontramos a estudiantes que secuestraban a sus autoridades o ejercían cualquier otro tipo de protestas por la aplicación del régimen de rendimiento académico o por la negativa de algún profesor a repetir un examen en el que la mayoría hubiese resultado aplazada.⁷⁶

Para el 20 de junio los once huelguistas que se contabilizaban entre Caracas y Barcelona se encontraban en delicado estado de salud. En Maturín se creó una comisión para mediar en este conflicto, encabezada por el obispo del lugar, monseñor Antonio José Ramírez. Esta comisión exigía la intervención del presidente Lusinchi en el problema, mientras que dirigentes estudiantiles de diferentes partes del país anunciaban jornadas de protestas por el allanamiento a la UDO, la derogación de la medida de suspensión de los once bachilleres y la liberación de los diecisiete presos recluidos en La Pica. El 22 de junio se sumaron tres estudiantes más a la huelga en Barcelona y en Caracas un grupo de treinta dirigentes estudiantiles de la UCV tomó la Catedral para realizar un ayuno de veinticuatro horas en solidaridad con los huelguistas de la UDO y el IUPLCM.

Para finales de junio comenzó la preocupación por la salud de los huelguistas que empeoraba a medida que avanzaban los días, según informaba *El Nacional*:

[...] Jorge Bello tuvo que ser hospitalizado el pasado domingo, debido a que presenta un alto grado de desnutrición, pérdida temporal de la vista, insuficiencia renal, dolores de cabeza y contracción estomacal. [...] Su compañero Jesús Vásquez [...] presenta síntomas de

76 Como fue el caso de la UNET en San Cristóbal, donde un grupo de estudiantes protestó de forma violenta por la aplicación del régimen académico a los alumnos con promedio inferior a 5 puntos.

deshidratación, alteraciones del ritmo cardíaco, mareo y una infección en el oído. Ambos cumplen hoy 21 días de ayuno.⁷⁷

Sin embargo, nadie en el gobierno parecía estar interesado por los huelguistas, en tanto que se negaban a liberar a los presos y el rector de la UDO, Andrés Pastrana, militante del partido de gobierno, estaba cerrado a la posibilidad de reincorporar a los expulsados. Por tal motivo, cada vez más estudiantes, profesores e incluso los presos en La Pica se sumaban a la huelga. Esta situación propició la creación de una comisión de derechos humanos encabezada por Luis Britto García, quien visitó a los huelguistas de Caracas y también exigió a las autoridades universitarias y al gobierno que resolvieran la situación para evitar que más estudiantes se sumaran a la protesta.

Para el 1 de julio, lo que había comenzado como un llamado de atención de dos estudiantes en Barcelona, se convirtió en una jornada de protesta nacional. Estudiantes del IUPC, la UCV, la ULA, LUZ, la UDO y el Politécnico de Coro se sumaron a la huelga en solidaridad con los que la comenzaron y en exigencia a lo planteado por éstos. Las imágenes de los estudiantes tirados en colchonetas en el suelo, rodeados de pancartas alusivas a aquella actividad recorrieron el país.⁷⁸

77 Txomin Las Heras. "Estudiantes anuncian radicalización de la lucha". *El Nacional*. Caracas, 25 de junio de 1987, p. C2.

78 Entre los huelguistas se encontraban: Jesús Vásquez (UDO-Barcelona), Jorge Bello (UDO-Barcelona), Jaime Gassette (IUPLCM-Charallave), Ricardo López (IUPLCM-Charallave), Ramón Martínez (IUPLCM-Charallave), Maryori Mercado (IUPLCM-Charallave), Orlando Salcedo (IUPLCM-Charallave), Carlos López (UCV), Omar Roa (UCV), Armando Sánchez (UCV), José Luis Carrero (IUPC), Oscar Carvallo (UCV), William Mijares (UCV), Jorge Barow (UCV), Claudio Sánchez (UCV), Joaquín Jaimes (UCV), Eduardo Padilla (UCV), Reina Matheus (UCV), David de Lima (UCV), Sirio Castillo (UDO - Cumaná), Tairi Mosffi (UDO-Cumaná), Alejandro Wesolwsky (UDO-Cumaná), Carlos Nova (USB) María L. Savello (IUPC), Eduardo Gasca, profesor (UDO-Cumaná), Víctor Nadales, profesor (UDO-Cumaná), Miguel Tenías (UDO-Cumaná) Felipe Molina (UCV-Maracay) José Serrage (UCV-Maracay), Lenin Cardozo (LUZ), Marino Carreño (LUZ), José Tovar (LUZ), Carlos Pineda (LUZ), Elena León (ULA), Manuel Molina (ULA), Max Robinson, profesor (UDO-Cumaná), Samuel Chirinos (UCV), José Ustáriz (UCV), Andrés Eloy León (preso en la Pica), Domingo Durán (preso en la Pica), Bernardo Mata (preso en la Pica), Juan Tamoy (preso en la Pica), Candido

Los dirigentes estudiantiles que no se habían sumado a la huelga sostenían reuniones permanentes con el ministro Ciliberto y con el rector Pastrana, para negociar la liberación de los presos de La Pica a quienes les harían juicio militar y para la reincorporación de los expulsados de la UDO. El ministro Ciliberto señalaba en estas reuniones que el presidente Lusinchi estaba evaluando los expedientes de los detenidos para decidir su liberación. Por su parte, Pastrana se mostraba renuente a aceptar la reincorporación de los estudiantes.

Finalmente, el 2 de julio de 1987, a casi un mes de la huelga, el conflicto parecía solucionarse. La firma de un acuerdo entre el ministro de Educación Cabello Poleo, el rector de la UDO Andrés Pastrana y el presidente de la FCU William Rodríguez, de reincorporar a los once expulsados y la decisión del presidente Lusinchi de liberar a 8 de los presos en La Pica, puso fin a la huelga.⁷⁹

Esto constituyó el primer logro estudiantil de esta jornada, no obstante, un nuevo foco de perturbación daría paso a otro de los tantos ciclos de protestas estudiantiles vividos en Venezuela: el asesinato de un estudiante en Trujillo.

LA HISTORIA CONTINÚA

Mientras en la UDO se firmaba el acuerdo que ponía fin a la huelga de hambre estudiantil, en Trujillo se enfrentaban policías y estudiantes del núcleo de la ULA. El resultado: Jhonny Villareal de 20 años de edad, estudiante de Ingeniería Agrícola del núcleo universitario

Montilla (preso en la Pica), Abraham Campos (preso en la Pica), Edgar Maestre (preso en la Pica), Miguel Barrolleta (preso en la Pica), América Salazar (presa en la Pica), Elías González (preso en la Pica), Carlos Tiapa (preso en la Pica), Omar Velásquez (preso en la Pica), Pablo Brito (preso en la Pica), V. Martínez (preso en la Pica), José Montilla (preso en la Pica), José Gómez (UDO-Ciudad Bolívar), Carlos Pérez (UDO-Ciudad Bolívar), Dulce Camburín (UCV), José Matos (UCV) y ocho estudiantes del Politécnico de Coro cuyos nombres nunca fueron publicados.

79 Nigel Barrolleta, Andrés Eloy León, Domingo Durán, Fernando Mata, Germán Blanco, Abrahán Campos y América Salazar, fueron liberados el 13 de julio de ese año.

Rafael Rangel fue asesinado de dos balazos y otros cuatro estudiantes cayeron heridos.⁸⁰ Los estudiantes, en protesta por el asesinato de Villareal quemaron la casa distrital de AD en Trujillo y en Mérida produjeron disturbios y saqueos.

De inmediato, el ministro Ciliberto anunció que había dado la orden para que se investigaran los hechos y reiteraba a priori:

[...] la policía no disparó contra el joven. [...] hemos ordenado a una comisión policial trasladarse a Trujillo, para iniciar las investigaciones, al presumirse que **grupos radicales, tratan de crear un clima de violencia, para justificar los desórdenes. [...] hay indicios de que personas ajenas al movimiento estudiantil pretenden con estos actos estimular acciones contra el orden público.**⁸¹ (El subrayado es nuestro).

Como una fórmula infalible, el gobierno al tiempo que reprimía la disidencia universitaria, intentaba justificar sus excesos bajo el argumento de que se estaba luchando en contra de grupos que amenazaban el “orden público” y la estabilidad democrática del Estado. Por eso las declaraciones de Ciliberto y del propio presidente Lusinchí, quien desde la sede de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, en la celebración del aniversario de la Independencia de aquel país, mandó al Ejército y a la GN a “restablecer el orden en Mérida y Trujillo”, convulsionada por los disturbios que desató el asesinato del estudiante Villareal. Lusinchí además reiteró el llamado que había hecho a los estudiantes desde su primer año de gobierno, a que “no caigan en el juego de la ultra izquierda.”

Esta advertencia presidencial sólo sirvió para estimular la indignación. A la mañana siguiente, el occidente del país era sacudido por la violencia. En la ULA, dos estudiantes resultaron heridos de bala

80 Francisco Graterol, Américo Rivero, Juan Bautista Garrido y Luis Alcides Terán.

81 *El Nacional*. “Del núcleo de la ULA: Muerto un estudiante y 4 heridos durante manifestación en Trujillo. Caracas, 3 de julio de 1987, p. DU.

durante una manifestación. En Valera, los estudiantes atacaron con piedras a numerosos comercios con el resultado de ciento cincuenta detenidos y en San Cristóbal los manifestantes quemaron varios vehículos, mientras en Caracas también se desarrollaban fuertes disturbios, quedando detenidos cuarenta y siete estudiantes.

Al tiempo que todo esto ocurría, los estudiantes que mantenían la huelga de hambre en el IUPLCM, fueron desalojados y enviados al hospital de Catia por la PM con un despliegue de más de quinientos efectivos. Luego procedieron a allanar el instituto en donde, según la versión policial, encontraron armas y drogas cercano a donde habían estado los huelguistas. El presidente del centro de estudiantes de esa institución, Arturo Gallegos denunciaba que en el allanamiento se habían perdido dos máquinas de escribir y doce mil bolívares que fueron recolectados para cubrir los gastos médicos de los huelguistas. Los estudiantes estaban impresionados por la acción de la policía, por lo que Gallegos declaraba a los medios de comunicación que:

Con esta última acción los estudiantes no podemos quedarnos de brazos cruzados, el nombre de la democracia parece estar lastimado y queremos hacer entender a la comunidad que nuestras manifestaciones no son más que el repudio a acciones de este tipo [...] en ningún momento hemos realizado disturbios callejeros de enfrentamiento con la policía [...] **estamos cansados de que se vincule al movimiento estudiantil con la subversión y las drogas [...]**⁸² (El subrayado es nuestro).

Las protestas en el occidente de país por la muerte de Villareal continuaron. En San Cristóbal, los estudiantes de la ULA quemaron cauchos, se enfrentaron a piedras con la policía e incendiaron un jeep del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), al tiempo que en Mérida y Barinas había saqueos y los estudiantes de la UNELLEZ

82 Natacha Salazar. “Tomada policialmente el Caballero Mejías”. *El Nacional*. Caracas, 4 de julio de 1987, p. C2.

destrozaban la casa distrital de AD, quemaban un vehículo del Ministerio del Ambiente y apedreaban bancos, casas comerciales y la sede del Instituto Agrario Nacional (IAN).

Aquí la trillada frase de que la violencia genera mayor violencia se cumplió al pie de la letra. Los enfrentamientos entre policías y estudiantes se convertían cada vez más en un choque desigual de fuerzas. En la lucha de David contra Goliat. Mientras más represión policial, mayor era la arremetida de los estudiantes que a su vez generaba el reforzamiento de los cuerpos represivos.

Partidos políticos de oposición como COPEI y el PCV, denunciaban la actitud del gobierno relativa a la represión y al asesinato de estudiantes. César Pérez Vivas, entonces dirigente de la juventud copeyana exigía el inicio de las averiguaciones del caso, por cuanto el estudiante asesinado pertenecía a su partido. De igual forma el PCV, a través de Pedro Ortega Díaz, se quejaba de esta situación y criticaba la actitud del gobierno en torno al movimiento estudiantil

Denunciamos la política gubernamental de practicar la represión para tratar de ahogar el movimiento popular de protesta contra la carestía de la vida, el desempleo, la insuficiencia de las entradas en los hogares, el hambre y la miseria. Y llamamos al conjunto de las fuerzas progresistas, partidos políticos, organizaciones sindicales, de vecinos, culturales, patrióticas, deportivas y populares en general, a dar su apoyo al movimiento estudiantil y a unirse para buscar salidas a la crisis de la nación [...] ⁸³

Finalmente, para controlar la ira estudiantil, fueron puestos a la orden de la Policía Técnica Judicial (PTJ) ocho funcionarios policiales vinculados al asesinato del estudiante. La situación parecía controlarse. La GN fue retirada de Mérida y Trujillo, aunque en Maracay, Maracaibo y Barquisimeto continuaban las protestas por el aumento del

83 *El Nacional*. "Protesta el PCV represión contra los estudiantes". Caracas 4 de julio de 1987, p. D22.

pasaje y el asesinato del estudiante, mientras en Caracas el director de Transporte y Comunicaciones Hugo Lezama firmaba un acuerdo con varios representantes de las FCU, mediante el cual, a partir del 1 de octubre de 1987 entraría en vigencia la obligatoriedad del medio pasaje estudiantil.

Con el encarcelamiento de los ocho funcionarios policiales, la firma del acuerdo sobre el pasaje estudiantil y el auto de detención que se dictó contra el coronel José Alberto Vicuña por los sucesos de Tazón, se intentaba poner fin a la tensa situación que se había generado en el país con el movimiento estudiantil. No obstante, dos nuevos acontecimientos impidieron este propósito. La expulsión de cinco estudiantes de LUZ, entre ellos el presidente de la FCU Lenin Cardozo, representante del “Movimiento 20” y el asesinato de otro estudiante de Derecho de la ULA, en Mérida.

REPRESIÓN ACADÉMICA Y BRUTALIDAD POLICIAL

El 30 de octubre de 1987, el Consejo de Apelaciones de LUZ aprobó una medida de expulsión de dieciocho meses en contra de cinco estudiantes de esa casa de estudios. Los afectados fueron Lenin Cardozo, presidente de la FCU, Jesús Rincón, presidente del centro de estudiantes de la escuela de Ingeniería (apresado durante los disturbios por el asesinato del estudiante Carvallo Cantor), Carlos Lemus, Freddy Pérez, consejero de la facultad de Ingeniería y Rafael Colmenares ex consejero de la misma facultad.

La medida había sido exigida seis meses antes por el ingeniero Antonio Cova, decano de esa facultad, por actos de indisciplina en los que habían incurrido los bachilleres en una asamblea celebrada en 1985, en la cual acusaron de corruptos a un grupo de profesores que, según ellos, traficaban con las notas y chantajeaban a los estudiantes. El objetivo real de las expulsiones parecía claro. Estos estudiantes pertenecientes al “Movimiento 20”, habían ganado recientemente las elecciones de la FCU y en diversas facultades de la universidad, además habían estado

involucrados en las jornadas de protestas que se desarrollaron durante todo el año 87. Todo indicaba que las expulsiones eran una suerte de retaliación política como lo denunció el propio Cardozo.

Estamos siendo víctimas de una persecución política [...] fíjese que cuando le preguntamos a la secretaria de ese Consejo de Apelaciones que por qué dejaron transcurrir siete meses después que hicimos la apelación, para dictaminar, respondió que se estaba esperando el momento político preciso, ya que actualmente no hay conflictos estudiantiles en LUZ.⁸⁴

La FCU-LUZ había organizado una jornada de Lectura Nacional de Poesía con poetas de todo el país e invitados internacionales que se iniciaría el martes 3 de noviembre. En ella hubo acciones de solidaridad con los estudiantes, pancartas en rechazo a las expulsiones y reuniones en las que se discutían las estrategias a seguir para solicitar el apoyo del movimiento estudiantil a nivel nacional en contra de las expulsiones. Algunos profesores también se solidarizaron con los estudiantes, entre ellos, la vicerrectora académica Imelda Rincón de Maldonado, quien pedía al Consejo de Apelaciones la reconsideración del caso para evitar que se debilitaran las relaciones de convivencia dentro de la universidad, por cuanto los estudiantes ya habían sido sancionados en su momento con expulsión de casi un semestre.

Sin embargo, el Consejo de Apelaciones continuó con la medida anunciada, lo que condujo a que el día 9 de noviembre, dos de los cinco estudiantes expulsados (Lenín Cardozo y Jesús Rincón) y otro de la Facultad de Humanidades (Juan Carlos Guillén) iniciaran una huelga de hambre en el salón del Consejo Universitario de LUZ como medida de protesta. Al tercer día, un número superior a los dos mil estudiantes se acercaron al lugar donde estaban los huelguistas y realizaron un ayuno de un día en solidaridad con ellos. Algunos profesores también se

84 María Lucía Rodríguez. "Universidad del Zulia: Expulsado presidente de la FCU". *El Nacional*. Caracas, 3 de noviembre de 1987. p. C2.

sumaron a la huelga, entre ellos: el dr. William Vanegas, Nerio Vilchez y la escritora Lidda Franco Farías.⁸⁵ El periódico *El Nacional* reseñaba la actividad realizada en LUZ en solidaridad con los huelguistas de la siguiente manera:

La concentración en el rectorado estaba programada para todo el día, con un acto musical donde se presentaron durante la mañana a Goyito Yépez, Yolanda Delgado, el grupo de Tarka y otras agrupaciones musicales donde continuamente se les informaba a los estudiantes sobre la situación del conflicto y el estado de salud de los compañeros.⁸⁶

En la UCV se organizaba una marcha para el 26 de noviembre, desde la plaza El Rectorado hasta la sede del Ministerio de Educación para exigir que fuesen reincorporados los estudiantes expulsados de LUZ, cuando otro asesinato en Mérida enturbió las acciones de protesta que se venían llevando a cabo.

El 26 de noviembre de 1987 ingresó muerto al Hospital Universitario de Mérida el estudiante de Derecho José Humberto López Velásquez. La autopsia reveló que la causa del deceso fue un edema cerebral. La noche anterior a su fallecimiento había sido detenido por las fuerzas armadas policiales de Mérida y conducido al retén de ese cuerpo policial, de donde fue trasladado, a la mañana siguiente, al hospital sin signos vitales. Los miembros de la FCU y el hermano del fallecido denunciaban que había sido asesinado por ese cuerpo policial.

Al saberse del asesinato comenzaron las protestas frente a la sede de la Gobernación del estado. Unos estudiantes incendiaron cauchos y arrojaron piedras contra la gobernación, otros se trasladaron a la sede del Ministerio de Minas e Hidrocarburos y lanzaron

85 María Lucía Rodríguez. “En la Universidad del Zulia: Ayuno en el rectorado para acompañar a los estudiantes en huelga de hambre”. *El Nacional*. Caracas, 12 de noviembre de 1987. p C 2.

86 Ídem.

bombas incendiarias con las que destruyeron tres vehículos que se encontraban estacionados afuera. Un tercer grupo de estudiantes se dirigió a la sede del Ministerio de Justicia ubicado en la urbanización Santa María a arrojar palos, piedras y bombas incendiarias, al tiempo que en el centro de la ciudad la policía dispersaba a los manifestantes con bombas lacrimógenas y perdigones.

Por órdenes del ministro Ciliberto, la GN con tanques antimotines tomó las calles de Mérida, lo que generó una batalla campal en la que resultaron detenidos y heridos un gran número de manifestantes. El periodista de *El Nacional*, Miguel Ángel Liendo, describía la situación señalando que:

Era un espectáculo grotesco, el que ofrecían funcionarios policiales y también integrantes de la Guardia Nacional, quienes visiblemente se ensañaban contra todo el que encontraran a su paso por las calles. Si alguien corría, por natural temor, ante las detonaciones de bombas lacrimógenas y de fusiles de perdigones, entonces la situación era peor, porque lo trataban como algo salvaje. Desde las azoteas y ventanas se oían los gritos de protesta por la forma en que se producían estas detenciones.⁸⁷

Al día siguiente, los sucesos de Mérida repicaron a nivel nacional. En la UCV, un grupo de encapuchados saqueó cuatro camionetas de transporte de alimentos: un camión distribuidor de leche y jugos de la empresa Carabobo, un vehículo que transportaba carne, una gandola de Supermercados Victoria y una camioneta de Pasapalos Jack's, que luego del saqueo fue incendiada en la plaza Las Tres Gracias. Los productos saqueados fueron repartidos entre los estudiantes de la UCV. La policía intervino horas después de los saqueos con bombas lacrimógenas a las que los encapuchados respondieron con piedras y palos. Como consecuencia de estos disturbios, el acto de grado en el

87 Miguel Ángel Liendo. "Por orden de Ciliberto: Tomada militarmente Mérida". *El Nacional*. Caracas, 27 de noviembre de 1987, p. D U.

que se graduarían trescientos noventa y dos nuevos egresados de las Facultades de Odontología y Humanidades fue suspendido.

En Barquisimeto, también se produjeron disturbios y enfrentamientos entre estudiantes y policías, en los que resultaron muertos dos estudiantes.⁸⁸ Ambos decesos excitaron la ira de los estudiantes quienes, en lugar de retirarse, arreciaron la protesta y quemaron seis vehículos pertenecientes a unos locales comerciales. Al siguiente día fueron puestos a la orden de la PTJ cinco policías involucrados en los asesinatos.

En el IUPC, luego de conocerse la noticia de un nuevo estudiante muerto por la policía y de las declaraciones dadas por el director de la PTJ Mauro Yáñez Pasarela, en las que afirmaba que la causa de la muerte del estudiante López Velásquez había sido una sobredosis de cocaína, los estudiantes salieron a la avenida Páez de El Paraíso a protestar y quemaron tres autobuses de transporte público en medio de una batalla campal con la PM.

De igual modo protestaron una vez más los estudiantes de la UCV quienes, según relataron los periodistas Eduardo Delpretti y Txomin Las Heras, organizaron los disturbios en asambleas realizadas en diversas facultades en horas de la mañana, al tiempo que gritaban consignas en contra del gobierno y del ministro Ciliberto, a quien le escribieron una pancarta que decía: “Otra vez Cílicerdo matando estudiantes”.⁸⁹ Los periodistas antes de que se produjeran los enfrentamientos entre estudiantes y la PM, lograron entrevistar a uno de los encapuchados que se identificó como estudiante de Farmacia, quien al ser interrogado sobre el porqué de su lucha, respondió:

Pienso que día tras día el movimiento popular cobra mayor fuerza a nivel nacional. Ya vemos como la crisis del sistema burgués venezolano

88 Manuel Alonso Vera de 22 años, estudiante de Informática de la UCLA y un menor de 12 años de apellido Dudamel.

89 Eduardo Delpretti y Txomin de Heras. “Nuevos disturbios en la UCV: Herido un policía de un balazo”. *El Nacional*. Caracas, 1 de diciembre de 1987, p. C2.

se ha agudizado, que las alternativas que planteaban no calan. Son una mentira real. Antes a pesar de que era una mentira, el pueblo no se había dado cuenta de ello. Día tras día las manifestaciones de calle indican una toma de conciencia en el pueblo, que reclama un cambio estructural en la sociedad.⁹⁰

En ocho estados más del país los estudiantes protestaron la muerte de los dos estudiantes. San Fernando de Apure, Mérida, Anzoátegui, Carabobo, Lara, Barinas, Zulia y Sucre fueron epicentros de detenciones y violentos enfrentamiento entre estudiantes y policías durante tres días consecutivos, en los que resultó muerto un carpintero y herido de un tiro en la cabeza un estudiante de Mérida de nombre José Ramón Guacarán, quien falleció días después, por lo que fueron detenidos cinco policías de Mérida. Por tal motivo, el ministro de Educación, Cabello Poleo, decretó la suspensión de las clases en educación media y superior a partir del 1 de diciembre. No obstante, al siguiente día de decretada la suspensión, estudiantes y profesores en las universidades de Caracas, Zulia, Maturín, Monagas y Aragua fueron víctimas de la represión por parte de la PM.

La UCV tenía varios días acordonada por efectivos de la PM, motivo por el cual sus estudiantes decidieron realizar una marcha interna en protesta por los estudiantes asesinados, la represión policial y la gran cantidad de estudiantes que se encontraban presos en los calabozos de la DISIP. Finalizada la marcha, decidieron salir hacia Plaza Venezuela para apostarse en la autopista Francisco Fajardo a repartir volantes relativos a la militarización de algunas ciudades y el cerco policial a la UCV.

La periodista de *El Nacional*, Iris Castellanos, relataba que a los diez minutos de haberse iniciado la actividad de repartición de volantes se acercaron al lugar algunas patrullas y motos de la PM comandados por el comisario jefe Ricardo Oliveros, con quien conversaron William

90 Ídem.

Peña, Tiburcio Linares, Luis Fuenmayor Toro y Jorge Pérez⁹¹ para explicar que se trataba de una manifestación pacífica y que en pocos minutos se retirarían del lugar. En ese instante —explicó la periodista— irrumpió un grupo motorizado antimotines comandado por el oficial Elías Manuel Colmenares, quien ordenó disparar contra los estudiantes:

Ráfagas de perdigones, culatazos y una fuerza inusitada de efectivos, a razón de 10 por cada estudiante, protagonizaron una lucha desigual y en menos de cinco minutos se dispersó la multitud. Algunos corrían por los márgenes del Guaire, perseguidos muy cerca por los PM. Un estudiante que se envolvió en la bandera, con el fin de evitar el peñillazo, recibió la peor parte. [...] Por los walk-tokie se escuchaban las órdenes de bloquear las entradas a la universidad. [...] unos 40 uniformados, portando armas de fuego entraron por la Plaza Venezuela a la UCV y llegaron hasta el edificio de la Biblioteca Central, donde permanecieron por más de 45 minutos [...] ⁹²

Al día siguiente, el cerco policial a la UCV continuaba. La PM apostada en las puertas de la universidad impedía el paso de los estudiantes, trabajadores y profesores. Igual suerte corrió la UDO de Puerto La Cruz hasta el 4 de diciembre, día en que el presidente Lusinchí mandó a retirar a la policía de las universidades, bajo la exigencia de que los estudiantes no continuaran con las alteraciones del orden público. Varias universidades suspendieron sus actividades hasta el mes de enero del año siguiente en acato al decreto del ME. En otras como LUZ continuaban los disturbios y las batallas campales entre estudiantes y policías. En la UCV, estudiantes y profesores llevaron la denuncia de lo ocurrido a la Fiscalía y anunciaron sus intenciones de

91 El ex presidente de la FCU, el secretario general de la UCV, el presidente de la APUCV y candidato a rector y el decano de la Facultad de Ingeniería respectivamente.

92 Iris Castellanos. "Allanada la UCV". *El Nacional*. Caracas, 3 de diciembre de 1987, p. C1.

realizar un paro universitario en enero del año siguiente si el gobierno no cancelaba las deudas contraídas con las universidades.

Finalmente, con una nutrida marcha a la que asistieron estudiantes, profesores, religiosos y organizaciones populares, realizada el 10 de diciembre de 1987, culminó la jornada de violentas protestas que durante el año 1987 mantuvo encendidas las calles en diversas regiones del país. La tregua navideña recargó de nuevos ánimos al movimiento estudiantil que al año siguiente acompañó a los profesores y empleados universitarios en la exigencia de sus reivindicaciones salariales, tema que había sido opacado por la situación estudiantil, pero que de nuevo ocuparía las primeras planas de la prensa de circulación nacional.

EL PRESUPUESTO EN EL BANQUILLO

A principios de 1988 y durante el primer trimestre del año, las universidades del país estuvieron paralizadas por los problemas presupuestarios. Profesores, empleados y estudiantes habían acordado ir a paro e iniciar las acciones conflictivas para presionar al gobierno a cancelar las deudas, por lo que el 14 de marzo, representantes de los diversos gremios involucrados en el conflicto iniciaron una huelga de hambre indefinida en la sede del Palacio de Justicia. Entre los huelguista se encontraban el profesor Humberto Mendoza, presidente de la Asociación de Profesores de la UC, el profesor Pedro Penzo de la Facultad de Agronomía del núcleo de Maracay, Luis Mendoza estudiante de la Escuela de Historia de la UCV y empleado universitario, Aldrín Torres de la UDO y René Cedillo también de la UCV. En el interior del país (Maracay, Mérida, Valencia y Cumaná) estudiantes y profesores también se sumaron a la huelga.

En solicitud de apoyo internacional, el 21 de marzo un grupo de estudiantes, profesores y empleados universitarios tomaron durante una semana las embajadas de España, Suecia, Costa Rica y la sede de la UNESCO. Mientras, la salud de los huelguistas en el Palacio de Justicia

se deterioraba con el pasar de los días. El profesor Pedro Penzo, después de treinta días en ayuno, estuvo a punto de perder la vida a causa de un paro respiratorio y Luis Mendoza fue trasladado al hospital de los Magallanes de Catia por presentar graves afecciones gástricas, al igual que el estudiante Aldrín Torres quien fue hospitalizado por serios problemas de asfixia.

Personas de todas partes de Caracas se acercaban al Palacio para observar lo que ahí ocurría. Algunos sectores religiosos solicitaban la intervención del presidente para solucionar el conflicto. La policía, por su parte, no dejaba de vigilar la sede del Palacio.

El 3 de abril, los estudiantes de la UCV y el IUPC organizaron una marcha en apoyo a los huelguistas que culminó con enfrentamientos en el centro de Caracas. El desencadenante fue el intento realizado por un grupo de universitarios de desviar la ruta de la marcha de la plaza El Venezolano, hacia la sede del Ministerio de Educación.⁹³ En estos disturbios fueron arrestados siete manifestantes acusados de portar artefactos explosivos. Al siguiente día, Edmundo Chirinos convocaba a que se iniciaran las clases por el inminente riesgo de que el gobierno interviniera la universidad, pero por su calidad de candidato presidencial, el gremio de profesores le recomendó que se mantuviera al margen del conflicto.

Las negociaciones entre los universitarios y el gobierno se iniciaron y cristalizaron con la firma de un acuerdo entre el ministro de Educación, Cabello Poleo y los rectores de las universidades públicas, con el cual se daba una tregua de tres meses al conflicto y se levantaba la huelga de hambre que duró treinta y tres días.⁹⁴

Como se hizo costumbre en este período, la solución de un conflicto suponía el inicio de uno nuevo, y en esta ocasión no hubo excepción, ya que el 17 de mayo de 1988 el juez penal Rafael Quintero

93 Graciela García. "La marcha universitaria terminó en batalla campal". *El Nacional*. Caracas, 4 de abril de 1988, p. C1.

94 Jorge Medina Lugo. "Firmada tregua por tres meses en el conflicto universitario". *El Nacional*. Caracas, 10 de mayo de 1988, p. C1.

dictó auto de detención a dos estudiantes de la ULA, Lourdes Barrios y Diógenes Andrade, por haber saqueado y quemado la residencia de Bernardino Navas, el abogado que en 1987 había asesinado al estudiante Luis Carvallo. Esta noticia condujo a que a sólo dos días de haber cesado la paralización universitaria, las clases en la ULA fuesen nuevamente suspendidas como consecuencia de los violentos disturbios que se desarrollaron en la ciudad de Mérida.

En la UCV, la USB y la UDO dirigentes y estudiantes en general se pronunciaron en contra de las detenciones y anunciaron que iniciarían una jornada de protestas que no se dio por cuanto la sentencia fue revocada a los diez días de la detención. De allí en adelante y hasta el mes de noviembre de aquel año electoral, la situación estudiantil estuvo controlada. La opinión pública se debatía entre las declaraciones y las promesas de los diversos candidatos presidenciales hasta el día en que fueron acibillados los catorce supuestos guerrilleros colombianos en Apure el 29 de octubre de 1988.

EL AMPARO: UN CIERRE CON BROCHE DE BALA

En este caso el calificativo de “masacre” no supone una denominación simbólica vinculada a algún acto de represión militar como el ocurrido en Tazón en 1984. Lo sucedido en el Caño La Colorada, cerca del pueblo de El Amparo en el estado Apure, fue una verdadera masacre. Las situaciones que rodearon este hecho fueron diversas y complejas, toda vez que luego de muchos años no se castigó a los culpables. De hecho, el 30 de junio de 1998, la Corte Marcial absolvió de responsabilidad a los diecinueve funcionarios involucrados en la matanza. Por ello la palabra “supuesto” en las líneas que siguen podrá resultar reiterativa y hasta fastidiosa a los ojos del lector.

Las razones por las que se produce la masacre de los catorce pescadores en El Amparo se remontan a la década de 1970, según lo explica Juan Carlos Zapata en un artículo publicado por la revista *SIC*, en el que señala que desde esa fecha las familias campesinas del pueblo

de Guasdualito, El Amparo, El Nula y La Victoria comenzaron a ser desalojadas de sus tierras por militares y altos dirigentes de AD, quienes encontraron en aquella zona su lugar de esparcimiento.⁹⁵

La misma versión del hecho es planteada por el periodista Gustavo Azócar cuando explica:

[...] militares y ganaderos comenzaron a trabajar conjuntamente para erradicar la presencia campesina en la zona; **cada quien intentó por su lado crear las condiciones para expropiarle las tierras a los más débiles y hasta se fraguaron conflictos ficticios para hacerle creer al gobierno que la situación en la línea fronteriza se estaba poniendo en extremo difícil** y lo mejor era permitir que los ex funcionarios de las Fuerzas Armadas llevaran a cabo un ambicioso programa agropecuario, con el cual supuestamente se estaría beneficiando al país [...] ⁹⁶ (El subrayado es nuestro).

El conflicto entre los campesinos expropiados y los ganaderos creó las condiciones para que éstos contrataran empresas privadas de seguridad, generalmente constituidas por militares retirados, para su protección. En este sentido, la existencia de un conflicto se hacía cada vez más un negocio rentable. Gustavo Azócar explica en su libro cómo las empresas de seguridad, principales beneficiarias de esta situación, se encargaban de crear las condiciones para que existiera la sensación de inseguridad de la siguiente manera:

[...] Muy sencillo: demostrando que la guerrilla colombiana, supuestamente ya se encontraba en territorio venezolano, que estaba planificando acciones de comando, que tenía preparados algunos secuestros de connotados ganaderos y que sólo estaba a la espera de una oportunidad

95 Juan Carlos Zapata. "Cuando la frontera no tiene nombre". *SIC*. Centro Gumilla, Año LI-Nº 510 - diciembre de 1988, pp. 442-444.

96 Azócar, Gustavo. *El Amparo: Crónica de una masacre*. Caracas, Planeta, 1990. pp. 206-207.

para hacer reinar la zozobra del lado venezolano. No había otra manera de demostrar la inseguridad reinante en una frontera como la del Arauca y Apure porque allí no hay bombas atómicas, ni misiles, ni volcanes, ni movimiento sísmico que pudieran hacer pensar a la gente que tarde o temprano le llegaría la hora de marcharse. [...] ⁹⁷

Militares vinculados a las empresas de seguridad privadas de la frontera convencieron a los ganaderos y al propio presidente Lusínchi sobre la necesidad de resguardar la frontera de la avanzada guerrillera. Por ello, la Unidad de Programación Especial para el Desarrollo del Suroeste de Venezuela (Upesuroeste), presentó un informe al presidente en el cual exponían la hipótesis, sin confirmar, de la supuesta presencia de grupos guerrilleros. En el plan se exponía que éstos traficaban drogas, extorsionaban y secuestraban a los ganaderos de la región, debido a la escasa presencia de cuerpos de seguridad del Estado venezolano.

Debido a esta situación, es creado por decreto presidencial n° 1.810, el 29 de octubre de 1987, un año exacto antes de la masacre, el Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP) organismo conformado por efectivos de la DIM, la DIEX, la DISIP, la PTJ y las FAN encargado de “resguardar” la zona fronteriza de posibles ataques de la guerrilla colombiana.

Tras la activación del CEJAP comienzan a producirse “enfrentamientos” como los de Totumitos y el caño Las Gaviotas con supuestos grupos subversivos. Los medios de comunicación nacional reseñaban las noticias del éxito de este comando en la frontera. Azócar explica que los supuestos enfrentamientos eran montajes preparados por el CEJAP para implantar el terror y causar la sensación de que el comando estaba dando resultados positivos. Para ello, contrataban a los llamados “confidentes de la DISIP” encargados de ubicar a campesinos colombianos con algún antecedente policial para traerlos a territorio

97 Azócar, Gustavo ... Ob. Cit. p. 209.

venezolano bajo el engaño de que se les daría trabajo en las haciendas. Acto seguido se les masacraba y luego se reseñaba el enfrentamiento en los noticieros y diarios.

En el caso de El Amparo, el confidente fue Celso Rincón Fuentes, alias Hipólito. Este personaje se había hecho amigo de una de las víctimas porque era buen comprador de lo que éste pescaba, por lo que le pidió un gran número de “coporos”⁹⁸ para ser trasladados a San Cristóbal. Por su parte, ya el CEJAP adelantaba sus acciones con la operación Anguila III en el caño La Colorada porque supuestos informes de inteligencia habían demostrado que un grupo guerrillero preparaba un ataque en aquella zona. Un personaje importante en estas operaciones fue el comisario Henry López Sisco, miembro del CEJAP y acusado de haber planeado la masacre.

En la mañana del 29 de octubre, José Guerrero, una de las víctimas y quince pescadores más⁹⁹ fueron al caño La Colorada a pescar el encargo de Hipólito y una vez embarcados en la lancha fueron atacados. Sólo dos lograron escapar al arrojar al río.

El general de Brigada (Ej.) Humberto Antonio Camejo Arias, jefe de la Segunda División de Infantería y Guarnición del estado Táchira, a la que estaba adscrito el CEJAP, había organizado para el mismo día de los hechos un curso de corresponsales de guerra en San Cristóbal, por lo que de inmediato preparó un helicóptero y los trasladó al lugar de los acontecimientos. A este respecto Azócar, como periodista que conoce su oficio, señalaba:

Cualquier comunicador social sabe perfectamente lo que cuesta convencer a un militar para que lo traslade a uno hasta el sitio donde se ha producido una acción guerrillera. En ocasiones es necesario esperar

98 Pez de río que nace en el caño Las Coloradas especialmente en épocas de lluvia.

99 Rigo José Araujo, Julio Pastor Ceballos, Carlos Antonio Eregua, Arin Obadías Maldonado, Moisés Antonio Blanco, Luis Alfredo Berríos, Emeterio Marino Vivas, Rafael Magín Moreno, Pedro Indalecio Mosqueda, José Mariano Torrealba, José Ramón Puerta García, José Gregorio Torrealba, Justo Arsenio Mercado, José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla (los dos últimos fueron los únicos sobrevivientes).

más de 24 horas antes de que se dé la orden respectiva que permita a los periodistas llegar hasta el lugar de los hechos, y hay veces en que no se puede ir al sitio sino hasta después de 72 horas, cuando se supone que ya está todo bajo control, y que los irregulares se han replegado hacia otras zonas. [...] ¹⁰⁰

Al día siguiente, los periódicos reseñaban en primera plana la noticia de la muerte de dieciséis guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional colombiano (ELN) en el Alto Apure, quienes se habían enfrentado al Ejército venezolano en un intento por volar una estación de Corpoven en Guafita y tomar por asalto el comando militar de La Chacra. Al otro día la noticia dio un giro de ciento ochenta grados, “Eran pescadores venezolanos los muertos en el Alto Apure”. ¹⁰¹

El primero en denunciar la masacre fue el candidato presidencial por la alianza MAS-MIR, Teodoro Petkoff:

La prensa registró que el sábado 29 se había producido un supuesto enfrentamiento entre un destacamento de las Fuerzas Armadas Nacionales y un destacamento guerrillero, [...] y como resultado del cual habrían muerto dieciséis guerrilleros y se habrían conseguido armas y planos para producir acciones en nuestro territorio. Pues bien, debo decirles que he estado recibiendo en la mañana de hoy, llamadas desde Guasualito y El Amparo que me han dado cuenta que no hubo nunca tal encuentro guerrillero, sino que se trata de una espantosa masacre cometida contra gente inerte, trabajadores, jóvenes de la población de El Amparo. ¹⁰²

La noticia se difundió gracias a que los dos sobrevivientes, José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla fueron trasladados a San

100 Azócar, Gustavo... Ob. Cit. p. 219.

101 *El Nacional*. Caracas, 1 de noviembre de 1988, p. PP.

102 Teresa de Vicenzo. “Eran venezolanos los muertos por las FF AA en el Alto Apure”. *El Nacional*. Caracas, 1 de noviembre de 1988. p. D1.

Cristóbal acompañados por los fiscales del Ministerio Público de los estados Apure y Táchira y por el diputado del MAS, Walter Márquez, quien por mucho tiempo acompañó a las víctimas en el intento de esclarecer los hechos. La primera conclusión a la que se llegó fue que los militares habían asesinado a los pescadores por equivocación y luego les sembraron las armas, los uniformes militares y los planos para tapar la aberración, sin sospechar lo que realmente estaba por detrás de lo ocurrido.¹⁰³

Pronto la indignación por las muertes retumba en la academia. El 1 de noviembre unos estudiantes incendiaron un camión de las tiendas Maxy's en la avenida Salvador Allende, en repudio a la masacre de El Amparo. En las afueras de la UCV se enfrentaron con piedras y bombas molotov a la policía que a fuerza de lacrimógenas y perdigones intentó disolver las manifestaciones. Doce estudiantes resultaron heridos y nueve detenidos.

Al día siguiente, el edificio de la gobernación de Mérida fue apedreado por los estudiantes de la ULA, quienes indignados protestaban por el asesinato de los pescadores. La sede de la Sociedad Financiera de los Andes (Finandes) también fue atacada a piedras y finalmente incendiada, así como tres vehículos del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Algunos locales comerciales fueron saqueados y las actividades en todos los niveles educativos fueron suspendidas.

En el Zulia, los estudiantes de la Facultad de Veterinaria de LUZ que protestaban por el mal estado en el que se encontraban sus instalaciones desde la mañana, se enfrentaron con piedras y palos con la policía en repudio a la masacre de El Amparo. Al mismo tiempo, en el núcleo de la UCV de Maracay los estudiantes quemaron una camioneta de la CANTV y de igual modo se enfrentaron con la policía y

103 Para profundizar sobre el tema de la masacre de El Amparo véase: Azócar, Gustavo. *El Amparo: Crónica de una masacre*. Caracas, Editorial Planeta, 1990. IZARD, Miguel. *El poder, la mentira y la muerte (De El Amparo al Caracazo)*. Caracas, Fondo Editorial Tropykos, 1991 y PROVEA. *Situación de los Derechos Humanos en Venezuela (Informes Anuales) Octubre 1988-septiembre 1993*. Caracas, 1988-1993.

ofrecieron continuar con las protestas hasta que el gobierno castigara a los responsables de la matanza.

El 3 de noviembre todo el país estaba encendido como consecuencia de los disturbios en repudio a la masacre. *El Nacional* hacía un balance de la situación en primera página,

[...] En Maracaibo un obrero goajiro, identificado como Javier Antonio Belloso, murió al recibir una pedrada en los disturbios estudiantiles registrados en las inmediaciones de LUZ. En Cumaná quemaron un camión, mientras que el tráfico fue paralizado por la avenida Universidad de esta ciudad. En Maracay, en la autopista regional del centro fue interceptado un autobús, que fue parcialmente incendiado; [...] En Barquisimeto, fueron incendiados por lo menos tres vehículos, entre ellos dos camiones, y se produjo además enfrentamiento con las fuerzas policiales del estado Lara. En Mérida [...] la situación sigue siendo delicada, ya que las protestas estudiantiles han seguido en ascenso. Las fuerzas de seguridad han tenido que salir a la calle para restablecer el orden y evitar la prolongación del conflicto.¹⁰⁴

En el IUPC también hubo violentos disturbios ese día. La mayor indignación la generaron las declaraciones del presidente Lusinchi en las que confirmaba su confianza en las FAN sobre la versión del “enfrentamiento”. Por ello, las protestas en Mérida continuaron. Los estudiantes volvieron a quemar la casa distrital del partido AD y en ese ínterin Gustavo Enrique Chinchilla, estudiante de Derecho de la ULA, resultó herido de un balazo en la cabeza. Los detenidos fueron llevados directamente a la DISIP para que les fuese aplicada la LSVM por decisión del Comando Policial Unificado. Mientras, en Caracas en los bloques del 1 al 7 de Monte Piedad y 21 al 25 de La Cañada en la parroquia 23 de Enero también hubo protestas con saldo de un detenido llamado Omar Silva Ramírez.

104 *El Nacional*. “Disturbios en todo el país por la matanza en El Amparo”. Caracas, 4 de noviembre de 1988, p. PP.

El gobierno insistía en la tesis del plan subversivo y agitador que había denunciado desde que comenzaron las jornadas de protestas estudiantiles en 1987. Parecía importarle más la alteración del tan defendido “orden público” que lo ocurrido en el Caño La Colorada. Por ello, después de una reunión de la Coordinadora Nacional de Federaciones en la FCU de la UCV en la que se decidieron las acciones estudiantiles a seguir por la masacre de El Amparo, el presidente de la FCU-UCV respondió a las acusaciones del gobierno diciendo:

El primer desestabilizador es el Gobierno, son los cuerpos represivos del Estado, principalmente la DISIP, comandada por Henry López Sisco [...] Son los tribunales, que a cuatro años de los hechos de Tazón y a más de un año de los disturbios donde murieron 7 estudiantes, no han dictado sentencia contra los culpables. **La verdadera causa de la protesta no hay que buscarla en fantásticas conspiraciones, sino en el hambre, el desempleo y la gran frustración que siente este pueblo al ver como se niega la justicia y se le pretende engañar con esos bodrios de supuesta guerrilla.**¹⁰⁵ (El subrayado es nuestro).

En el Zulia y Valencia continuaron las protestas contra lo ocurrido en El Amparo. En Apure los estudiantes de la UNELLEZ quemaron el vehículo del gobernador José Flores Hurtado y en Barquisimeto fueron incendiados dos camiones del INOS por los estudiantes. En Cumaná, San Cristóbal, Valencia y Caracas se desarrollaron marchas pacíficas como la realizada el 10 de noviembre denominada “Marcha por la vida”, organizada por los estudiantes de la UCV.

En el intento del gobierno por demostrar que los pescadores eran guerrilleros colombianos, el juez militar del Táchira José Pérez Rodríguez, dictó el 16 de noviembre un auto de detención contra los dos sobrevivientes de la masacre, acusándolos de pertenecer a grupos

105 Iris Castellanos. “Responde el movimiento estudiantil: la protesta la provoca el Gobierno”. *El Nacional*. Caracas, 8 de noviembre de 1988, p. C2.

subversivos y tener antecedentes penales. La noticia causó tamaña indignación entre los estudiantes que la violencia se desbordó en las afueras de la UCV y el IUPC, donde fue quemado un camión de refrescos y se produjeron enfrentamientos con la policía.

Pero la fecha para las elecciones presidenciales se aproximaba. El presidente Lusinchi había asegurado que no permitiría que el país se le escapara de las manos. Por ello, un gran número de efectivos militares y policiales fueron enviados a la calle a “resguardar el orden público”.

Carlos Andrés Pérez en sus últimas promesas electorales había ofrecido esclarecer los sucesos de El Amparo y hacer pagar a los responsables por las muertes. El 4 de diciembre de 1988, en un ambiente de tensa paz, se desarrollaron las elecciones presidenciales para el período 1989-1994, en el que Pérez resultó triunfador con un porcentaje del 52% de los votos. Sus promesas estuvieron enmarcadas en la recuperación de la terrible situación económica del país. El pueblo lo recordaba como el presidente que mantuvo a Venezuela en la mejor posición económica de América Latina durante su mandato y en consecuencia apostó por él. No obstante, a escasos doce días de su juramentación, las ilusiones de mejoras en la calidad de vida se desplomaron y dieron paso a la época de mayor crisis económica, social y política de la historia contemporánea de Venezuela.

III. PAQUETE ECONÓMICO Y REPRESIVO

El período que se inicia en 1989 con la llegada de Carlos Andrés Pérez (CAP) a la presidencia de la República, está caracterizado por la aplicación de un conjunto de medidas económicas y políticas provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, (BM)¹⁰⁶. Éstas contribuyeron de manera directa con el mejoramiento de la calidad de vida del venezolano y, por ende, con el crecimiento del descontento popular, traducido en la multiplicación de las protestas estudiantiles y populares que desde 1987 se desarrollaron en los diversos estados del país.

Durante la campaña electoral CAP enfiló esfuerzos en reforzar su imagen de líder carismático. Su actitud fue, como lo señaló Arturo Sosa, la de “...‘no cazar peleas’ ni con sus adversarios externos (COPEI y la izquierda) ni con los internos (tendencias dentro de AD y el gobierno de Lusinchi)”¹⁰⁷. En sus mítines, al referirse al tema económico mencionaba el problema de la deuda externa en América Latina y criticaba las políticas del FMI y el BM calificándolas como

106 Ambos organismos representantes de los bancos y países más poderosos e importantes del mundo.

107 Arturo Sosa A. Las elecciones de 1988. *Revista SIC*. Enero-Febrero, N° 511, año LII, 1988, p. 8.

“bombas sólo mata gente”. Con relación a los sucesos de El Amparo, se comprometió públicamente a esclarecer los hechos y a hacer pagar a los responsables de las muertes. Todo esto hizo de CAP un potencial triunfador y el presidente que se requería para retomar los dorados años de la década del ‘70.

El 4 de diciembre de 1988 ganó las elecciones con el 52,9% de los votos emitidos y de inmediato inició una intensa gira en la que recorrió más de doce países de los cinco continentes para tratar temas como el fortalecimiento de la OPEP, la deuda externa y las relaciones Sur-Sur. La estrategia de CAP de hacer sus giras presidenciales inmediatamente después de resultar electo causaba la sensación de que, en efecto, el nuevo presidente se estaba esforzando por hacer un buen gobierno.

Una vez que regresó de sus viajes fue proclamado por el Consejo Supremo Electoral (CSE) como presidente electo. En el discurso pronunciado durante aquel acto mencionó tres puntos fundamentales para el desenvolvimiento de los sucesos posteriores a su juramentación, a saber, 1) la delicada situación económica que imperaba en el país, 2) las negociaciones que había adelantado con el gobierno de Estados Unidos en materia económica y 3) la nueva filosofía de Estado que pretendía implantar.

EL ESTADO YA NO ES AFLUENTE DE RECURSOS ABUNDANTES

El primer tema tratado por CAP en el discurso del día de la proclamación fue el de la situación económica del país. Por primera vez, desde que inició la campaña electoral, hacía mención a ese tema en estos términos:

Ningún sector, ni el Estado ni los particulares, están en capacidad por sí solos, de enfrentar los desafíos que nos plantea este momento de nuestra historia: el Estado ya no es afluyente de recursos abundantes que en un momento parecieron no tener límites. El Estado venezolano confronta problemas de suma gravedad que podríamos resumir

así: la merma de los ingresos, compromiso de la deuda externa que asfixia, coarta y amputa nuestras propias posibilidades de desarrollo y de bienestar y, frente a esto, multiplicación de expectativas y de aspiraciones generalmente justas.¹⁰⁸

En efecto, CAP recibía un país que se encontraba prácticamente en la bancarrota, producto, entre otras razones, de la política económica de despilfarro y endeudamiento que se venía arrastrando desde la época de su primer mandato. Aunado a ello, el gobierno de Jaime Lusinchi no encaró a lo largo de sus cinco años en la primera magistratura medidas efectivas para sacar al país de la crisis que comenzó a evidenciarse en 1983. La negociación del refinanciamiento de la deuda externa que hizo en 1984, sumado a la segunda refinanciación que debió solicitar ante la caída de los precios del petróleo en 1986, en momentos en los cuales lo más lógico habría sido asumir la actitud de otras naciones de América Latina que paralizaron sus pagos y formaron un frente común ante el FMI y el BM¹⁰⁹, sumergieron al país en el desastre económico que imperaba en 1988.

Dado que el dinero excedente de la venta petrolera en 1986 era insuficiente para cancelar la deuda que Lusinchi se había comprometido a pagar, recurrió al dinero de las reservas internacionales para cumplir con las obligaciones. Como consecuencia de esa práctica, a finales del año de 1988 las cifras económicas evidenciaban graves desequilibrios, un creciente déficit fiscal, un déficit del mantenimiento de la balanza de pagos, una aumentada fuga de capitales y una situación de insolvencia que hacía imposible para el país recibir nuevos préstamos sin tener que someterse a los lineamientos de los bancos internacionales.

Por otra parte, según el economista Gastón Parra, la fuga de capitales venezolanos había crecido a sesenta millones de dólares para

108 *El Diario de Caracas*. "Restituiré las garantías suspendidas durante 27 años". Caracas, 15 de diciembre de 1988, p 2.

109 Bolivia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Brasil.

el año 1988, por lo que las reservas internacionales se ubicaron en seis millones quinientos cuarenta y ocho mil dólares, de los cuales sólo dos millones cuarenta y seis mil eran reservas operativas. Esto se tradujo en el hecho cierto de que nuestras reservas internacionales estaban agotadas a pesar de la existencia de un organismo como RECADI que, en teoría, debía velar por el uso racional de las divisas del país.

El hecho de que esa realidad económica no hubiese sido un factor perjudicial para CAP como candidato del gobierno se debió a dos hechos fundamentales. En primer lugar, como ya se señaló, a la esperanza que representaba en el pueblo su futura presidencia. En segundo lugar, al manejo que el presidente Lusinchi hizo con relación a los medios de comunicación con la manipulación que ejerció sobre ellos para evitar críticas a su gestión, fundamentalmente con la asignación de los dólares de RECADI y el cierre de algunos programas y diarios de opinión como fue el caso de *La Religión*.

Así las cosas, las circunstancias económicas en las que recibió CAP a Venezuela le permitieron justificar de manera efectiva la aplicación de las medidas que tuvieron origen en la visita que realizó al país en 1987 una misión del FMI y el BM, organismos que en representación de los países y bancos acreedores negociaron un conjunto de medidas y condiciones bajo las cuales el país recibiría nuevos préstamos.

Esto se explica en tanto que, para finales de la década de 1980 estaba modelándose un nuevo orden económico internacional con el que el derrumbamiento del bloque soviético contribuyó de forma determinante, generándose con ello un esquema económico que permitió tanto a los Estados Unidos como a las naciones industrializadas hacerse de la hegemonía del mercado mundial y, por ende, plantear a los países deudores el compromiso de reducción de sus deudas en base a nuevas condiciones que a todas luces vulnerarían sus soberanías.

En diversos países latinoamericanos (especialmente del Sur) se celebraron elecciones presidenciales entre los años 1988 y 1989.¹¹⁰

110 México en 1988 donde resultó electo Carlos Salinas de Gortari. En 1989 en Argentina donde ganó Carlos Saúl Menem, en Brasil Fernando Collor de Mello, en Chile Patricio

Aprovechando esta situación, los organismos financieros internacionales entraron en conversaciones con los potenciales candidatos vencedores para que se inscribieran en sus nuevos lineamientos económicos de carácter absolutamente neoliberal.¹¹¹

CAP no dudó en inscribir a Venezuela en esos lineamientos. Lo anteriormente expresado se afianza en el señalamiento que hizo en su discurso del día de la proclamación:

Debo decir con entera sinceridad, que regreso a Venezuela satisfecho y confiado por el alto espíritu de comprensión, por la franqueza y la voluntad de entendimiento que obtuve como respuesta de parte de quien en pocos días asumirá la presidencia de Estados Unidos, al punto que **me atrevo a adelantar el criterio de que Venezuela y América Latina, tendrán en el presidente Bush un amigo con quien va a dialogar con voluntad de acercamiento y cooperación, en aras de una plena comprensión de nuestros mutuos intereses.**¹¹² (El subrayado es nuestro).

Con estas palabras CAP dejaba entrever la voluntad que tenía de negociar con el representante de la nueva hegemonía del orden económico

Aylwin, en Uruguay Luis Alberto Lacalle, en Paraguay Andrés Rodríguez, en Bolivia Jaime Paz Zamora y finalmente en 1990 en Perú y Colombia Alberto Fujimori y César Gaviria respectivamente. Todos estos presidentes impusieron en sus países un esquema económico neoliberal con la privatización de las empresas del Estado.

111 Al referirnos al neoliberalismo lo hacemos tomando en cuenta el concepto expuesto por Fernando Rojas: "...lo que llamamos comúnmente neoliberalismo no es una mera doctrina económica; es, en su conjunto, una concepción estratégica para la renovación del modo de producción capitalista. En cuanto a estrategia de reorganización global, toca con todo el orden social, desde la familia y la reproducción, pasando por el Estado, hasta la forma y el ritmo de producción y circulación de las mercancías. El neoliberalismo no es una simple ni una artificial construcción ideológica; es el discurso que acompaña la realidad de una fase de acumulación del capital a otra. La nueva fase es la competencia plena en los planos nacional e internacional." Rojas, Fernando. "Neoliberalismo: ¿Qué es? ¿Qué no es?", en *Solidaridad*, N° 124, Bogotá, 1991, p. 33. En: PROVEA. *Situación de los derechos humanos en Venezuela: Informe anual*. Caracas, Gráficas Reus S.R.L. 1991. pp. 10-11.

112 *El Diario de Caracas*. "Restituire las..."

mundial, que pretendía, bajo una filosofía neoliberal, debilitar el papel del Estado frente a la economía y el mercado. De ahí que, como última idea a resaltar del discurso, expresó:

Racionalizar el rol del Estado en la economía, no sólo es un factor condicionante para la acción del gobierno. **No más intervencionismo por inercia, por facilismo burocrático, sin objetivos ni justificación, el Estado jugará cada vez una función más estratégica y menos controladora.**¹¹³ (El subrayado es nuestro).

No obstante, esta intención pareció no quedar clara entre quienes luego hicieron análisis sobre las palabras de CAP. El tema que recorrió los principales noticieros y periódicos al día siguiente y durante aquella semana, como la noticia más resaltante, fue el roce y supuesta crítica y deslinde que en aquel discurso hizo CAP de su antecesor Lusinchi, situación que desde la campaña electoral no había sido un secreto para ningún venezolano. Lo más importante a resaltar y que sin embargo quedó rezagado sobre aquellas palabras, era la determinación del nuevo presidente de inscribir a Venezuela en el modelo económico neoliberal.

LA CORONACIÓN DEL MESÍAS

A pesar del balance sobre la terrible situación económica de Venezuela hecho por CAP el día de su proclamación, no escatimó esfuerzos ni recursos del Estado en los actos de su toma de posesión que se realizó el 4 de febrero de 1989. Dicho acto por su ostentosisidad recibió el nombre de “La Coronación de CAP”. A este evento asistieron una cantidad de invitados internacionales entre los que se encontraban la mayoría de los mandatarios de América Latina, así como otros dignatarios y ministros de Europa y Asia.

113 Ídem.

En el prestigioso Hotel Caracas Hilton fueron alojados los invitados al evento, excepto el presidente Fidel Castro, para quien se reservó el Hotel Eurobuilding. En la noche, luego del acto de toma de posesión, se celebró un agasajo para los invitados y el nuevo presidente que fue transmitido en cadena nacional de radio y televisión. Este evento causó, en algunos venezolanos, la sensación de que la situación económica del país no era tan grave como lo había señalado CAP y, en otros, la indignación de ver cómo se derrochaban los escasos recursos con los que contaba la nación.

Para aquel día se esperaba el anuncio de la política económica del nuevo gobierno, sin embargo, CAP no quiso aguarse la fiesta y se limitó a anunciar que haría cambios trascendentales que serían explicados a detalle el día 16 de febrero.

BOMBAS SÓLO MATA GENTE

Llegado el 16 de febrero el presidente de la República en cadena nacional de radio y televisión anunció que pondría en marcha un conjunto de medidas económicas mediante las cuales pretendía enderezar la alicaída situación financiera que vivía la nación. Las medidas a aplicarse eran, según criterio del jefe de Estado, un cambio estructural del modelo económico tradicional que se había implementado en Venezuela.

Sus palabras fueron explícitas al señalar:

Las decisiones que hoy adoptamos no se inscriben en el propósito coyuntural de paliar una situación que no puede continuar de todos modos. [...] Las decisiones que hoy anuncio no inician una sucesión de medidas similares en el futuro, sino que son la corrección del rumbo para iniciar el proceso de modernización económica y social. **Es el gran viraje con el cual la experiencia que hemos vivido, los errores, las omisiones y las improvisaciones, nos**

comprometen a todos los venezolanos¹¹⁴ (El subrayado es nuestro).

De acuerdo a esto, comenzarían a crearse relaciones sociales y económicas distintas a las que habían funcionado en el país. El plan contemplaba entre otros aspectos acabar con el tradicional subsidio de la tasa de cambio del bolívar con respecto al dólar. Nuestra economía quedaría sometida a las rigurosas fuerzas del mercado, los precios serían determinados por el juego de la oferta y la demanda y no como ocurría con la protección de los controles de precios y los subsidios que irían a desaparecer.¹¹⁵

Este llamado Gran Viraje se constituyó con la firma de una carta de intención con el FMI con la cual CAP asumía el compromiso de seguir al pie de la letra las políticas que este organismo internacional dictara. A cambio de ello adquiriría nuevos y sustanciosos préstamos. Esto suponía al mismo tiempo el afianzamiento de la nueva filosofía de Estado que CAP había esbozado en su discurso de proclamación cuando se refirió a la eliminación del intervencionismo.

El préstamo solicitado por Venezuela al FMI era de cinco mil millones de dólares que debían ser entregados anualmente hasta 1993. Siendo ésta la cuota máxima que prestaba el organismo, el país debía someterse a las más estrictas exigencias de obligatorio cumplimiento, como lo estipulaba la política que esta entidad establecía para esos casos. De acuerdo a esto, los desembolsos que efectuaría el organismo se harían en base a un cronograma preestablecido, sujeto al fiel cumplimiento de los acuerdos firmados.

La carta de intención constaba de treinta y cinco puntos. Cinco de ellos explicaban, según evaluación del FMI, cuáles habían sido los resultados de las políticas económicas que desde 1983 se aplicaron

114 *El Diario de Caracas*. “La situación nacional no resiste más aplazamientos”. Caracas, 17 de febrero de 1989. p 2.

115 No podemos olvidar que una de las políticas sociales del llamado “Estado puntofijista” era la de subsidiar los productos de la cesta básica y otros rubros de importancia.

en Venezuela. Partiendo de esa información el organismo financiero diseñó las recetas económicas que debían aplicarse para “enderezar” la situación del país.

Entre las características más importantes encontradas en el análisis realizado por el FMI se pueden nombrar: un gran desequilibrio en la balanza de pagos externa con un déficit acumulado de siete mil trescientos setenta y seis millones de dólares entre 1986 y 1988, con un total agotamiento de las reservas internacionales. Un desequilibrio fiscal para 1988 cercano a los sesenta mil millones de dólares, lo que equivalía al 7% del PTB. Serios desequilibrios monetarios con tasas de interés reales muy negativas y por último un desequilibrio cambiario en pésimas condiciones.¹¹⁶ Esta evaluación presentada por el FMI era similar en esencia a la que hizo CAP al momento de explicar su política económica.

De ahí que Venezuela fue inscrita en febrero de 1989 en un programa que imponía la liberación de la política de importaciones, el aumento de los precios de bienes y servicios públicos, la eliminación del sistema previo de control de precios y la congelación de los incrementos salariales, el cual debió hacerse sólo una vez durante aquel año. Bajo estos lineamientos estaban previstos cuatro objetivos. Primero, el fortalecimiento del ahorro interno mediante la reducción del consumo y el gasto en el sector público. Segundo, la promoción de las inversiones extranjeras y la economía hacia la exportación no petrolera. Tercero, la eliminación en un máximo de dos años del déficit fiscal y cuarto, mejorar la capacidad de pago de la deuda externa.

El saneamiento de las cuentas fiscales implicaba a la vez la privatización de muchos entes estatales, con lo que se liberaría de deudas, incluidos los pasivos laborales. Es decir que las políticas que irían a implementarse llevaban en el fondo el firme propósito de debilitar al Estado y vender las empresas públicas más importantes, dejándolas

116 Miguel Ignacio Purroy. “El paquete: Evaluación del programa económico”. *SIC*, Centro Gumilla, Año LII N° 513 abril de 1989. p. 122-124.

en manos privadas o de extranjeros. Con esto CAP, en la práctica, aceptó entregar la soberanía económica de la nación al FMI.

Todo lo anterior reflejaba la nueva filosofía económica del Estado que CAP pensaba desarrollar a lo largo de su gobierno, donde prevalecería la fe en el libre mercado como mecanismo para restablecer los equilibrios y obtener nuevos recursos. Esto es una concepción neoliberal pura a implementarse como lo señala Atenea Jiménez en su tesis.

El proceso globalizador y la liberación de las economías llevan implícito una nueva concepción del Estado, que implica pérdida de soberanía, privatización de empresas y servicios públicos, desregulación de la economía, el Estado pasa a jugar un papel pasivo en los distintos escenarios sociales reduciendo su función de garante de bienestar social, con lo cual acentúa su ilegitimidad.¹¹⁷

Pero las medidas que más afectaron a la población fueron las que se referían al aumento de las tarifas de los servicios públicos. La primera y más perjudicial sería el aumento anual, durante tres años, de los derivados del petróleo como estaba programado. El primer aumento sería del 100%. También se contemplaba un aumento inicial general de las tarifas del transporte público en un 30% y aumentos de las tarifas de electricidad y teléfonos en una estimación del 50%.

Al mismo tiempo, como política paliativa, los lineamientos del FMI contemplaban una serie de medidas de subsidios sociales para aminorar la carga que el proyecto conllevaba. Entre ellas se encontraban la de subsidiar a algunos productos de la canasta alimentaria como las harinas de trigo y de maíz, la pasta, el arroz, las sardinas enlatadas, la leche en polvo, el pollo, los huevos, la carne de cerdo, el aceite, el azúcar, algunos medicamentos y el transporte.

También se planificó crear programas de transferencia alimentarias a niños de hasta catorce años, madres embarazadas y lactantes.

117 Jiménez, Atenea. *Factores que inciden en el aumento de la violencia: años 1989-1997*. Tesis de Grado. Escuela de Sociología, 1999, p 94.

Por último se planeaba la creación de cuarenta y dos mil hogares de cuidado diario para la población infantil. Todas estas medidas comenzarían a regir a partir del día 27 de febrero.

CAP había elegido un gabinete con el cual llevaría a cabo su plan de ajustes. En él no se encontraban, como tradicionalmente se hacía, los miembros del partido. Su gabinete estuvo constituido por los llamados tecnócratas, que eran gerentes y profesionales de alto nivel “políticamente independientes” ligados al sector empresarial. Entre los más importantes se encontraban Miguel Rodríguez Fandeo, apellido que luego sirvió para llamar a las medidas como “paquetico Rodríguez” o “miguelito paquete”, Moisés Naim, Ricardo Haussman, Imelda Cisneros, Gerver Torres y Fernando Martínez Mottola.

PAQUETE INCENDIARIO

El anuncio de las medidas causó conmoción en todos los niveles, especialmente en el educativo. Las intenciones del gobierno incluían la decisión de privatizar la educación superior como lo anunció el ministro de educación de entonces, Gustavo Roosen, al día siguiente del anuncio de CAP. Ese mismo día representantes de la FCU-UCV y profesores de la Federación de Asociaciones de Profesores de Venezuela (FAPUV) convocaron a una reunión urgente para darle respuesta al ministro.

Los estudiantes consideraban esta medida una violación a la Constitución Nacional de 1961 que contemplaba el derecho a la educación y un atropello contra los sectores populares que se beneficiaban de ella. Igualmente, el entonces rector de la UCV, profesor Luis Fuenmayor Toro señalaba refiriéndose al plan privatizador del gobierno que “...el titular de educación debería situarse como tal, con responsabilidades públicas y no seguir pensando como si todavía estuviera en la empresa Polar...”¹¹⁸

118 Iris Castellanos. “Universitarios rechazan privatización de la educación superior”. *El Nacional*. Caracas, 18 de febrero de 1989. p. C7.

Las protestas en contra de las medidas económicas, –llamadas desde el día siguiente de su anuncio “paquete”– comenzaron a producirse en la UCV una semana antes de su entrada en vigencia. Allí un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería hicieron un recorrido por las diversas facultades de la universidad para llamar la atención de la comunidad ucevista:

[...] sobre tres puntos que consideran esenciales: la muerte de Dennis Jesús Villasana Montaña, presuntamente asesinado por dos efectivos de la policía metropolitana, **el paquete de medidas económicas anunciadas por el presidente Pérez** y la ley de vagos y maleantes.¹¹⁹ (El subrayado es nuestro).

Entre el grupo de protestantes se encontraba el presidente del centro de estudiantes de Ingeniería Yoel Amaya, quien dio unas declaraciones a la prensa en las que condenaba los asesinatos de estudiantes producidos durante el gobierno de Lusinchi, también la intención del gobierno de aplicar la Ley sobre Vagos y Maleantes (LSVM) a estudiantes que se encontraran protestando y finalmente cuestionaba las medidas económicas anunciadas por CAP, que a su juicio sólo traerían una “explosión social incontrolable”¹²⁰

Ese mismo día en las afueras de la UCV se desarrolló una violenta protesta, en la que se produjeron enfrentamientos entre estudiantes y policías en los que cayó asesinado un empleado de la universidad de nombre Carlos Yépez Pérez. Igualmente en Barquisimeto, Maracay, Mérida y Valencia se produjeron disturbios en rechazo a las medidas económicas. En Valencia específicamente, las autoridades de la UC suspendieron las actividades académicas, por cuanto:

119 Humberto Álvarez, “Empleado muerto de un balazo durante disturbio en la UCV”. *El Nacional*. Caracas, 21 de febrero de 1989, p DU.

120 Ídem.

Centenares de estudiantes efectuaron una manifestación en horas de la mañana, en señal de protesta contra las medidas económicas dictadas por el gobierno nacional especialmente contra el alza de la gasolina, para la cual contaron con el apoyo de los taxistas que se unieron a las manifestaciones.¹²¹

Estas primeras muestras de rechazo a las medidas económicas llamaron la atención del gobierno, quien convocó a una reunión en el Palacio de Miraflores al rector Luis Fuenmayor para discutir sobre la situación universitaria. En ella CAP se comprometió a investigar sobre los asesinatos a estudiantes producidos durante el gobierno de Luisini. No obstante, los estudiantes que asistieron al sepelio del trabajador asesinado acusaban a CAP de su muerte y afirmaban que el nuevo gobierno continuaría la senda de asesinatos a estudiantes y luchadores sociales.

Pero el anuncio de las medidas económicas no generó sólo las protestas de los estudiantes. Algunos comerciantes inescrupulosos al saber que después de la puesta en marcha de las medidas los precios de algunos productos se dispararían, procedieron a acaparar alimentos como la harina de maíz precocida, la leche en polvo y los huevos, con la intención de remarcar luego el precio de venta al público (PVP). Igualmente, los grandes productores e importadores de estos alimentos, para presionar al gobierno en aras de la asignación de dólares preferenciales, contribuyeron con el desabastecimiento.

A diario aparecían en la prensa titulares que informaban sobre la desaparición de alimentos esenciales. La población, fundamentalmente de las zonas populares caraqueñas, hacía interminables colas para adquirir la leche en polvo, el pollo o cualquier otro alimento que estuviese acaparado. La actitud del gobierno ante esta situación fue la indiferencia absoluta, lo que hizo que aumentaran las tensiones que brotaron con intensidad desde la mañana del 27 de febrero de 1989.

121 "Estudiantes y taxistas manifestaron contra las medidas en Barquisimeto". *El Nacional*. Caracas, 22 de febrero de 1989, p. D 3.

¿POBRES CONTRA RICOS?

Desde el Ministerio de Energía y Minas se había anunciado que para el día 26 de febrero se haría efectiva el alza de los precios de la gasolina y el incremento del 30% del precio del transporte público como parte de la aplicación de las medidas económicas. Este anuncio generó, por un lado, el aumento abrupto de los precios del pasaje antes de la fecha prevista y, a consecuencia de ello protestas estudiantiles en varias regiones del país. En la ciudad de Mérida, por ejemplo, los enfrentamientos entre los estudiantes, la policía y la GN mantuvieron paralizadas por cuatro días las actividades en la ULA. De igual modo en la UDO los estudiantes salieron a las calles "...en protesta por las medidas económicas del gobierno y las muertes del estudiante Dennis Jesús Villasana Montaña y el trabajador de la UCV Carlos Yépez Pérez."¹²²

Pero la Cámara de Transporte no aceptó el aumento debido a que consideraba que no estaba acorde a la verdadera situación que enfrentaba el referido sector, especialmente por el aumento de los costos de los repuestos y servicios públicos a los que ahora se les sumaría el aumento de la gasolina. Por ello exigieron al gobierno la extensión inmediata del aumento a un 70% y convocaron a un paro que debía realizarse el día 27 de febrero.

Así las cosas, el lunes 27 de febrero los ministros del gabinete económico del gobierno se encontraban en Washington firmando la carta de intención con el FMI. En Venezuela, según lo había establecido el gobierno nacional, comenzaron a regir ese mismo día el aumento de las tarifas del transporte. El paro que se había convocado no se realizó. Sin embargo, en la ciudad de Guarenas los choferes aumentaron por sí mismos el pasaje por encima del 30% acordado, desconociendo además el pasaje preferencial estudiantil. Esto, sumado a toda la tensión existente por la desaparición de algunos alimentos y el aumento en

122 "Estudiantes de la UDO desvalijaron transporte de alimentos". *El Nacional*. Caracas, 25 de febrero de 1989, p. D 15.

los precios de otros, ocasionó la reacción violenta de los usuarios del transporte público en aquella ciudad, quienes comenzaron a protestar arrojando piedras y quemando las unidades de transporte.

Pronto la violencia llegó a Caracas. En el terminal del Nuevo Circo, las personas que venían de Guarenas continuaron la protesta

Allí, a la salida del túnel, frente a la recién inaugurada obra de Maragall, colocaron barricadas y detuvieron el tránsito. Al principio eran unas doscientas personas. Luego se fueron aglomerando muchas más, que gritaban consignas contra los aumentos generalizados de precios y tarifas en todos los productos, bienes y servicios públicos y privados.¹²³

Posteriormente, los manifestantes atravesaron vehículos y autobuses que luego fueron quemados. Grupos de motorizados tomaron las calles y avenidas hasta la zona de Parque Central y las cercanías de la Av. Bolívar. En el centro de Caracas las av. Lecuna, Baralt, Urdaneta, San Martín y Sucre de Catia también fueron tomadas por manifestantes quienes en una acción espontánea procedieron a abrir y saquear negocios como panaderías, mueblerías, supermercados, tiendas por departamento y un sinnúmero de pequeños comercios.

Con el transcurrir de las horas la gente que habitaba en los barrios de Caracas en las zonas de Petare, El Valle, La Vega, La Pastora y El 23 de Enero entre otras, comenzaron a bajar hacia las avenidas principales y se sumaron a los saqueos. A eso de las cinco de la tarde la policía aún no actuaba para detener el desbordamiento, incluso en oportunidades se sumaron a los saqueos. No obstante, en la zona de Parque Central ya había caído su primera víctima. La estudiante de Letras de la UCV Yulimar Reyes, quien fue asesinada con una descarga de perdigones que le propinó un policía metropolitano minutos después de haber dado unas declaraciones a un medio de comunicación que se encontraba reseñando la noticia.

123 José Gregorio Terán, "Los sucesos en la prensa diaria". *SIC* Centro Gumilla, abril 1989, N° 513, año LII, p. 107.

En los barrios, en horas de la noche, la gente continuaba los saqueos de pequeñas bodegas, licorerías y panaderías que en muchas oportunidades eran abiertas por sus mismos dueños para evitar males mayores.

La entrada de un nuevo día no fue motivo para que cesara la protesta y el saqueo. En Caricuao, por ejemplo, al amanecer del día 28:

A las cinco de la mañana varios cientos de personas estaban saqueando aquellos establecimientos y seguían llegando mujeres, hombres y niños que se marchaban y regresaban por más. Motorizados, gente en vehículos, ancianos con cajas, que luego apenas podían sostener en la espalda, llenaron las calles de la redoma de Ruiz Pineda y los más jóvenes se bebían jugos y refrescos y reventaban las botellas contra las casas y el pavimento tapizando de vidrios metros a metros las vías.¹²⁴

El asomo a un segundo día de protesta generalizada hizo reaccionar al gobierno, quien decidió suspender las garantías constitucionales. La tardanza en tomar esta medida se debió a lo que explica Ignacio Betancourt, un testigo de lo que ocurrió dentro del Palacio de Miraflores:

A pesar de la información que nos llegaba del ministro, el titular de Relaciones Interiores, Alejandro Izaguirre, no daba crédito a las versiones —ya en extremo delicadas— sobre lo que pasaba en Caracas. La avenida Francisco de Miranda, en la parte que llega a la redoma de Petare, ya estaba destrozada al mediodía. El presidente no lo creía. Al final de la tarde nos preparamos para salir al interior. CAP aprueba confiado su agenda del 28 y le ordena a Izaguirre hablar por televisión al país. Viaja a Barquisimeto acompañado por los ministros Reinaldo Figueredo, Moisés Naim y Carlos Blanco.¹²⁵

124 *El Diario de Caracas*. “La violencia se desató”. Caracas, 1 de marzo de 1989. p. 15.

125 <http://www.analitica.com/bitbliblioteca/ibetancourt/caracazo.asp> [Fecha: 13/02/06].

En horas del mediodía del 28 de febrero el presidente reunido en consejo de ministros decidió invocar el estado de emergencia amparado en el artículo 240 de la Constitución de 1961. Suspendió las garantías constitucionales y entregó al Ejército y a los organismos de seguridad del Estado la vigilancia de las calles y la restitución del orden.

A partir de ese momento se produjo uno de los episodios más violentos de la historia contemporánea de Venezuela. A Caracas llegaron contingentes de nuevos reclutas del Ejército, provenientes del interior del país, quienes se comportaron bajo las órdenes expresas del gobierno como un Ejército de ocupación y procedieron a masacrar al pueblo.

Estos soldados fueron enviados a los barrios de Caracas especialmente Petare, El Valle, La Vega y 23 de Enero para reprimir. Dispararon indiscriminadamente sobre la población. Casas, edificios, apartamentos y bloques fueron abaleados. Un caso emblemático lo representó la parroquia de El 23 de Enero, zona que por tradición había sido lugar de lucha y protesta a todo lo largo del período puntofijista.

Según se reseñó en la prensa caraqueña la acción represiva contra esta parroquia se debió a la presencia de francotiradores en las azoteas y apartamentos de los bloques de vivienda. Las zonas de El Mirador, (bloques 47, 48 y 50), el sector de la zona central (bloques 22 –popularmente conocido como siete machos– 23, 24 y 25) y por último Monte Piedad (del bloque 1 al 7) se convirtieron en zonas de tiro al blanco en donde no se respetaron los más elementales derechos humanos ni se respetó la vida:

El dolor y la muerte y su espeluznante espectáculo también se hicieron presentes en los bloques 22-23 y 24-25 de la zona central. Los cuerpos sangrientos de los cadáveres fueron expuestos en el pavimento de los estacionamientos de los edificios cual réplica de un filme de terror. Muchos de esos muertos eran conocidos por la comunidad como personas honestas y trabajadoras”.¹²⁶

126 *SIC* Centro Gumilla. “23 de Enero francotiradores o víctimas”. Año LII N° 513. Abril de 1989. p. 111.

Muchas personas murieron al ser abaleadas cuando entraban o salían de sus viviendas. El gobierno alegaba como parte de su posición violenta y represiva que El 23 de Enero había sido una base eficaz para la guerrilla urbana durante décadas y supuestamente había gran cantidad de subversivos y francotiradores que se aprovecharon de la situación crítica que se produjo para causar más desórdenes. El Ejército utilizó para enfrentar a los supuestos francotiradores armas de guerra, ametralladoras, tanques, FAL, y balas de alto calibre, entre ellas la llamada punto cincuenta.

Un equipo de la revista *SIC* del Centro Gumilla realizó una entrevista a una familia habitante del bloque 1 de Monte Piedad la cual recibió en su apartamento más de trescientos impactos de bala. Sólo la nevera de ese hogar tenía 28 agujeros

[...] no hacía falta ninguna seguridad, ninguna certeza para accionar sus armas. Si tu apartamento entraba en sospecha era prácticamente bombardeado, como pasó con muchos por aquí. Disparaban a la azotea, a los pasillos, a los apartamentos. [...] Es verdad que había gente que disparaba contra los soldados, pero la reacción nunca ha debido ser esa. [...] Aquí fue muy poca gente la que se metió en ese lío ¿cómo te vas a mantener tú peleando con un 9 mm frente a un ejército que usa FAL y tanquetas? Además si hubiesen sido muchos francotiradores como dicen, las bajas del otro lado serían bastante elevadas ¿y dónde están los soldados muertos? [...] Nos creían una amenaza subversiva. Había que aterrorizar al 23 de Enero. Nos trataron como un verdugo que se ceba morbosamente con su víctima. No hay otra explicación.¹²⁷

Interpretar estos hechos en su exacta dimensión ha sido la intención de muchos políticos y analistas desde aquel 27 de febrero. No obstante, las condiciones que rodearon el hecho no hacen tan sencilla

127 *Ibidem.* p. 112

su comprensión. Ciertamente, la población venezolana, en especial la caraqueña, atravesaba desde hacía algunos años un proceso de acumulación sistemática de inconformidades con respecto a las políticas económicas y sociales de los gobiernos. De ahí que se afirma que la acción de protesta obedeció a la suma de todas las circunstancias negativas existentes.

El salario real se había deteriorado en tales dimensiones que hacía muy difícil al venezolano común adquirir los artículos de primera necesidad, entre ellos los alimentos de la cesta básica. Las medidas económicas cayeron en el pueblo venezolano como el fin de una esperanza. No se podía concebir cómo un hombre que apenas veintitrés días antes había realizado una de las ceremonias más esplendorosas y derrochadoras en la historia de Venezuela, luego pusiera en práctica una serie de ajustes que representaban sacrificios para el pueblo.

Encima de eso, la burguesía caraqueña el mismo día 16 de febrero celebró una boda que causó una imagen absolutamente negativa ante una colectividad presionada por las limitaciones económicas que enfrentaba. Nos referimos a la boda de Gonzalo Fernández Tinoco y Zingg y Mariela Cisneros Fontanals:

[...] 5.000 invitados a la boda –incluyendo 200 llegados por vía aérea de Estados Unidos, Italia y otros países, con todos los gastos pagados– fueron agasajados con un buffet desbordante de caviar, langosta y salmón. Las mesas se hallaban cubiertas con champang francés Le Gran Damme, cosecha de 1968. La pareja llegó a la iglesia en un Rolls Royce seguida de 20 ómnibus de lujo con los invitados especiales.¹²⁸

Esta boda esplendorosa que ocupó las páginas de los principales diarios nacionales y algunos internacionales, dejaba en evidencia la brecha cada vez más marcada que había entre pobres y ricos en el país.

128 *Últimas Noticias*. “Disturbios alentados por ira y frustración”. Caracas, 14 de marzo de 1989, p. 12.

Todo ello ocasionó en la población un evidente disgusto, pues más allá de lo que el venezolano común pudiera interpretar acerca de las medidas económicas y su esencia, lo que estaba claro era que mientras unos degustaban caviar, langostas y champaña públicamente, otros debían hacer enormes colas para poder comprar un kilo de harina de maíz precocida o leche en polvo para alimentar a toda su familia.

Pero quizás lo más llamativo de estos hechos fue la reacción del gobierno. Como siempre ocurría con los gobiernos del sistema puntofijista ante cualquier muestra de descontento popular ya sea estudiantil, gremial o ciudadano, siempre señalaban que detrás de esas acciones se encontraba la participación de grupos subversivos. En este caso ante los hechos del llamado Caracazo la reacción del gobierno no fue distinta. El dirigente de AD Humberto Celli de inmediato responsabilizó a los sectores de izquierda enfatizando:

A mí me parece que estos brotes de desorden en el país, algunos pueden estar justificados porque la gente todavía no entiende las medidas en su cabalidad, porque además hay mucho acaparamiento y especulación por parte de algunos comerciantes, pero también hay una parte que estamos investigando en estos momentos que pareciera estar dirigido por sectores que no han renunciado a la insurrección.¹²⁹

La opinión del gobierno sobre lo ocurrido estuvo tan ligada a la idea de que se había derrotado a la subversión que incluso se llegó a hacer un reconocimiento a los soldados que habían masacrado al pueblo a través del general de división del Ejército José María Troconis Peraza, quien en un acto les felicitó:

El país se construye con este quehacer diario. Con el sacrificio de cada uno de sus hijos. Ustedes han dado el ejemplo de cómo se edifica una nación, de cómo se va hacia adelante. Por eso los felicito,

129 Ludmila Vinogradoff: "Celli hay sectores que no han renunciado a la insurrección". *El Nacional*. Caracas, 28 de febrero de 1989, p. D 2.

y les expreso mi mayor gratitud en nombre de la República y en el mío propio.¹³⁰

Más aún, el presidente de la República lejos de asumir que la política económica que había aplicado fue uno de los detonantes que llevó a la población a protestar de forma violenta, se lavó las manos y le echó la culpa de los hechos al empresariado, al afirmar que se trataba de una acción de los “pobres contra los ricos”, una protesta contra la riqueza y no contra el gobierno, además de afirmar:

[...] creo que todos los venezolanos están muy consientes en que fuimos diligentes y enérgicos sin excedernos en las medidas represivas para garantizar la tranquilidad al país. El gobierno ha actuado con seriedad y ponderación. [...] y quiero hacer un reconocimiento a las Fuerzas Armadas Nacionales, gracias a cuya actuación logramos un rápido arreglo de la situación y no hubo más muertos porque su actuación fue la de no usar la represión extrema sino en casos también extremos.¹³¹

GOBIERNO CONTRA ESTUDIANTES

la decisión del gobierno de suspender las garantías constitucionales fue aliciente para desarrollar una política de persecución a todos aquellas personas consideradas como parte de una oposición subversiva, capaz de originar desordenes y protestas o de haber tenido una actuación significativa en los días de la protesta generalizada. De allí que las declaraciones de Humberto Celli emitidas el mismo 27 de febrero nos muestran una guía de cuáles serían las políticas represivas a seguir por parte del gobierno y contra quiénes irían dirigidas.

130 Jorge Molina Chacín. “Comandante del Ejército elogio labor de la tropa.” *El Nacional*. Caracas, 9 de marzo de 1989. p. C 2.

131 Alba Sánchez. “CAP: Delincuencia y subversión distorsionaron la protesta popular”. *El Nacional*. Caracas, 3 de marzo de 1989. p. D -1.

A consecuencia de esto varios estudiantes de diferentes universidades del país, especialmente de la UCV fueron detenidos en los días sucesivos a los acontecimientos del 27 y 28 de febrero. El rector de la UCV, Luis Fuenmayor Toro, denunciaba a principios de marzo que los organismos de seguridad del Estado pretendían allanar la universidad, acusando al estudiantado de ser los incitadores de la protesta popular y la violencia.

Durante la primera semana de marzo, la desolación imperaba en la UCV. Las autoridades rectorales habían informado que sin garantías constitucionales no habría clases. Mientras, el secretario de asuntos nacionales de la FCU Ricardo Rojas, señalaba que la suspensión de las garantías constitucionales era un error del gobierno, además de opinar que: "... las medidas económicas deben ser objeto de revisión por parte del gobierno nacional, a la vez que pensamos deben derogarse, puesto que los afectados por ellas son las mayorías nacionales."¹³²

Una vez que el gobierno por la vía de la fuerza logró controlar la protesta, dispuso a los organismos de seguridad del Estado para que emprendieran una fuerte persecución contra varios miembros de la comunidad universitaria. De ahí que se registraron varios allanamientos, detenciones y persecuciones en todo el país que fueron muestra clara de la intención del gobierno de tratar de involucrar al sector estudiantil con la planificación de los hechos del 27 y 28 de febrero.

El Pedagógico de Maracay fue allanado y diez estudiantes fueron detenidos en esa acción y el de Caracas fue cercado por patrullas militares con la excusa de que ahí había un supuesto depósito de armas. A tales extremos había llegado la persecución contra los estudiantes que incluso el profesor Elías Pino Iturrieta, quien para aquel momento era el decano de la Facultad de Humanidades de la UCV denunció en *El Nacional* que algunos estudiantes habían sido detenidos por cargar libros como *El Capital* de Carlos Marx, *Mi lucha* de Adolf Hitler y *La Constitución Rusa*, acusados de portar material subversivo, por lo que

132 Iris Castellanos. "Sin garantías no hay actividades en la U.C.V.". *El Nacional*. Caracas, 2 de marzo de 1989, p. C 5.

señaló: “... es caso de vida o muerte que el gobierno diga cuál es material subversivo, para poder estar preparado.”¹³³

Así comenzaron a surgir desde los primeros días del mes de marzo infinidad de denuncias sobre la acción de los cuerpos policiales contra los estudiantes. El artículo publicado por la revista *SIC* del Centro Gumilla fue una de ellas:

La DISIP aprovechó la situación de suspensión de las garantías constitucionales para allanar residencias y detener ‘subversivos’ según sus archivos. Desgraciadamente, en los cuerpos de inteligencia y seguridad del Estado venezolano no se distingue claramente entre actividades subversivas propiamente dichas [...] a toda disidencia se la califica fácilmente de ‘subversiva’ y se actúa en consecuencia. [...] este cuerpo centró su actuación especialmente en el mundo estudiantil. **De los 91 detenidos de que tuvimos noticia en la sede central de la DISIP en Los Chaguaramos, más de sesenta eran estudiantes o dirigentes vinculados a los gremios educativos que se han destacado por su beligerancia en la defensa de los legítimos intereses en los últimos años.**¹³⁴ (El subrayado es nuestro).

También el dirigente estudiantil y presidente del centro de estudiantes del IUPLCM Arturo Gallego, denunciaba en la redacción de *El Nacional* las torturas a las que fue sometido un grupo de estudiantes en los calabozos de la DISIP:

Los estudiantes han sido sometidos a interrogatorios durante los cuales se les golpea “con bates de béisbol y tubos”. Mientras, se le golpea la cara para que no vea quiénes los maltratan. El objeto de los golpes –dijo– es obligar a los detenidos a confesar su vinculación con

133 Iris Castellanos. “Por portar libros humanistas acusan a ucevistas de subversión”. *El Nacional*. Caracas, 16 de marzo de 1989. p. C 2.

134 *SIC* Centro Gumilla. “23 de Enero... p. 104.

grupos subversivos. También denunció que los estudiantes han sido fotografiados con armas de guerra.¹³⁵

Otro caso fue la detención del estudiante de la UCV Roland Denis Boulton, quien fue detenido por la DISIP en una bomba de gasolina en Los Chaguaramos junto a su esposa Naty Vásquez quien también era estudiante de la UCV. Ambos después de ser puestos en libertad denunciaron las torturas a las que fueron sometidos en los calabozos de la DISIP y asumían que su detención se debió a las intenciones del gobierno de responsabilizar a alguien de los hechos del 27 y 28:

[...] simplemente que el gobierno ante los disturbios y la rebelión popular que hubo el 27 de febrero y los días subsiguientes, necesitó recoger del movimiento popular, algo que pudiera justificar en primer lugar, la represión que hubo inmediatamente y luego el destrozo que hicieron las Fuerzas Armadas contra vidas humanas y contra la población en general. Evidentemente que gracias a la lucha emprendida por nuestros familiares y del movimiento popular, eso no pudo ser posible y fue por eso que nos quedamos como chivos expiatorios.¹³⁶

Finalmente, otra denuncia sobre los atropellos perpetrados contra estudiantes durante los sucesos de febrero la realizó el grupo de universitarios que fueron liberados el 15 de marzo dadas a las presiones ejercidas por sus familiares:

Sin poder controlar el llanto y el temor los jóvenes, que hace poco fueron puestos en libertad, narraron a la prensa “la serie de torturas a que fueron sometidos mientras estuvieron detenidos en los calabozos

135 Fernando Garay, “Denuncian que pasarían de 100 los estudiantes detenidos”. *El Nacional*. Caracas, 7 de marzo de 1989, p. D 7.

136 Edgar R Weffer. “Lágrimas y alegría entre los ocho excarcelados del San Carlos cuya causa fue sobreescaída”. *Últimas Noticias*. Caracas, 17 de marzo de 1989, p. 11.

y tigrillos de la DISIP y la Dirección de Inteligencia Militar”. A los hombres les fue aplicada electricidad, en pecho, tobillos, dedos de los pies y oídos, mientras las mujeres sin ser sometidas a torturas físicas, se las obligaban a escuchar incesantemente los gritos y súplicas de aquellos que estaban siendo torturados [...] “Se nos humilló y vejó en nuestra dignidad e integridad psíquica y moral. Se nos llamó putas y se nos decía que los subversivos, como nosotros, lo único que merecíamos es que fuéramos degollados”.¹³⁷

Todas estas denuncias nunca fueron procesadas. El rector de la UCV se reunió una vez más en el Palacio de Miraflores con el presidente CAP quien ofreció como de costumbre investigar sobre los excesos policiales y liberar a otro grupo de estudiantes que aún permanecía detenido en la DISIP y la DIM en huelga de hambre.

Pero las protestas estudiantiles en contra de las medidas económicas y los atropellos vividos durante El Caracazo no cesaron aún con la represión. Ya para el 30 de marzo estudiantes de educación media manifestaban a las afueras del liceo Gustavo Herrera por la muerte de su compañero Richard Páez, quien fue asesinado durante los días de febrero, según relataron los estudiantes,

[...] el compañero regresaba de una visita a casa de un vecino, cuando entraba por la parte de atrás de su casa le dieron la voz de alto, le dispararon por la espalda; durante cinco minutos los policías mantuvieron a la gente en zozobra, y movieron el cadáver, luego dijeron que había sido un suicidio, pero tenía muestras de que le partieron el cuello [...]¹³⁸

Días después se produjeron dos protestas más por las mismas razones. Una en las afueras de la UCV que culminó con un enfrentamiento

137 Ada Hurí Barri “Jóvenes denuncian torturas en la DIM”. *El Nacional*. Caracas, 17 de marzo de 1989, p. D 6.

138 Ezequiel Patiño. “3 liceos del Este de Caracas cerraron La Libertador con manifestación”. *Últimas Noticias*. Caracas, 30 de marzo de 1989. p. 50.

entre la PM y los estudiantes encapuchados. La otra en Catia donde cayó asesinado por uno de los efectivos de la PM un estudiante de Ingeniería Electrónica de la USB llamado Gonzalo Jaurena Abasalo. Este asesinato generó una intensa jornada de protestas violentas en la UCV que se extendió durante casi una semana. La protesta fundamentalmente se debió a que algunos medios de comunicación como el periódico *Últimas Noticias* y *El Nacional*, reseñaron la noticia como que si se hubiese tratado de un enfrentamiento entre el estudiante y la policía, cuando según la versión de los estudiantes que manifestaban en el lugar, a Jaurena lo detuvieron vivo y luego lo asesinaron dentro de la patrulla de la policía:

[...] Él era un excelente estudiante y su conducta nunca fue irregular. No como dicen la prensa y los cuerpos policiales, quienes lo hacen aparecer como un delincuente. Ambos pueden pedir su récord de calificaciones y conducta en la USB.¹³⁹

POR EL MEDIO PASAJE ESTUDIANTIL

El conflicto por el medio pasaje estudiantil que estuvo latente desde finales del gobierno de Lusinchi y durante los meses que llevaba CAP en el poder, tuvo su punto de efervescencia a comienzos del mes de abril de 1989. A partir de ese momento los conflictos estudiantiles más importantes estuvieron vinculados a esa problemática, fundamentalmente por la negativa que en todo momento mostraron tanto los transportistas como el gobierno en solucionar el conflicto.

Los lugares en donde más se evidenció esta situación fueron Mérida, Zulia, Los Teques, Guarenas y Caracas, en donde la represión de los cuerpos policiales y militares en contra de las manifestaciones estudiantiles llegó a los extremos de allanar a LUZ y usar armas químicas prohibidas por la Organización de Naciones Unidas (ONU)

139 Tulio Leyton y Ezequiel Patiño. "Siguen disturbios por aumentos de precios". *Últimas Noticias*. Caracas, 5 de abril de 1989. p. 12.

contra los estudiantes. Éstos, sin embargo, continuaron las protestas, pero esta vez con sus rostros cubiertos para evitar las represalias que luego el gobierno ejercería en su contra.

El 2 de abril de 1989 los representantes de la FCU-UCV se reunieron con Javier Barrios, director de Tránsito Terrestre, en busca de soluciones para que los transportistas aceptaran el medio pasaje estudiantil. En esa reunión el funcionario se comprometió a presionar a los transportistas para que respetaran el medio pasaje. No obstante, ese mismo día los transportistas de Mérida decidieron paralizar las unidades de transporte en protesta por una ordenanza municipal que les obligaba a aceptar el medio pasaje estudiantil.

En el Zulia la situación con los transportistas tuvo repercusiones mayores. Éstos se negaban a aceptar el medio pasaje estudiantil, por lo que el 4 de abril decidieron paralizar el transporte en protesta por el supuesto hostigamiento al que los estudiantes los tenían sometidos. Esta situación generó un estado de tensión en la ciudad a tales niveles que el Ejército y la Guardia Nacional acordonaron LUZ con la supuesta intención de evitar hechos de violencia.

En Caracas, los estudiantes y profesores de la UCV también habían anunciado que irían a un paro universitario en protesta por la falta de implementación del medio pasaje estudiantil y en contra de las medidas económicas. La intención de los manifestantes era presionar al gobierno para que negociara con los transportistas.

Los transportistas asumieron una actitud hostil en contra de los estudiantes, llevado a tales extremos que una estudiante de séptimo grado llamada Rosa Abad Aguilera, quien cursaba estudios en el liceo Pablo Acosta Ortiz de Caracas, perdió la vida por cancelar el medio pasaje a un conductor que, de la indignación, arrancó la unidad de forma violenta en el momento en que la joven se bajaba de ella. Por ese motivo sus compañeros de estudio y profesores hicieron una marcha pacífica en las afueras del liceo exigiendo justicia. El caso no llegó a mayores, por cuanto el responsable de la muerte fue capturado al momento y el profesor Aristóbulo Istúriz, quien para ese momento

era diputado, se encargó de hacer las denuncias ante la Fiscalía y demás órganos competentes.¹⁴⁰

En el Zulia, donde el conflicto con los transportistas tenía varios días desarrollándose, un grupo de universitarios se reunió con el gobernador de entonces Ismael Ordaz, y le solicitaron que el Ejército asumiera las funciones de los transportistas. No obstante, la imposibilidad del gobierno de resolver el conflicto con los transportistas llevó a los estudiantes a ejercer acciones de protesta en la calle. Apenas iniciaron las protestas, la GN y el Ejército allanaron LUZ en una acción en la que fueron detenidos ciento cincuenta y nueve estudiantes de los cuales cuarenta y tres fueron pasados a la DISIP y catorce resultaron heridos.

Los estudiantes de la UCV, en una acción de solidaridad con sus compañeros de LUZ, en contra de la arbitrariedad policial y en exigencia del respeto al medio pasaje estudiantil, manifestaron en la plaza Las Tres Gracias, donde saquearon un camión de alimentos y luego lo quemaron.

Las denuncias de los excesos policiales en el allanamiento a LUZ comenzaron a surgir, fundamentalmente sobre las torturas a las que habían sido sometidos los estudiantes presos, por lo que el ministro de la Defensa, Fernando Ochoa Antich tuvo que excusarse públicamente diciendo:

[...] hubo descontrol militar, porque no se justifica que nuestros efectivos con más paciencia, con más experiencia en estos casos, se hayan atrevido a penetrar el área universitaria. [...] efectivamente hubo una pérdida de control en la operación que condujo al allanamiento al recinto universitario donde igualmente se generaron excesos de parte y parte, es por ello que las autoridades universitarias y la federación de centros de estudiantes tienen que ir al comando de la guarnición, cuyas puertas están abiertas para todas aquellas personas que se sientan

140 Paola Badaracco. "Marcha pacífica por muerte de liceísta". *El Nacional*. Caracas, 26 de abril de 1989. p. D 17.

agraviadas por acciones cometidas por algún miembro de las Fuerzas Armadas.¹⁴¹

Pero el reconocimiento del ministro no fue suficiente garantía de que en lo sucesivo se respetarían los derechos humanos de los estudiantes. Por tal motivo, un grupo de estudiantes de LUZ tomaron los consulados de Francia, Italia, Guatemala y Costa Rica para pedir apoyo internacional y denunciar ante el mundo que las armas químicas que se hallaron en las adyacencias de LUZ el día del allanamiento eran de procedencia israelí y habían sido prohibidas por la ONU porque con ellas se estaban asesinando a los palestinos en la franja central de Gaza, Cisjordania.¹⁴²

Sin embargo, a pesar de las denuncias efectuadas por los estudiantes la actitud represiva del gobierno continuó siendo la misma. De ahí que las protestas que se desarrollaron durante los meses siguientes estuvieron caracterizadas por el uso de la “capucha” como única forma de proteger la identidad de los manifestantes. Así lo señaló Agustín Blanco Muñoz al apuntar:

La capucha en principio es parte de una forma de lucha y quien la porta entiende que está en una acción que habrá de ser duramente reprimida. Hay sin embargo, quien utiliza el instrumento con el simple objetivo de encubrir que se forma parte de los grupos de protesta y estar a salvo de la persecución policial. La falla en todo esto reside en que el encapuchado sólo llega hasta la piedra, la botella y el cohete, mientras la policía tiene sus balas de siempre y su decisión de asesinar, de allí que las contiendas entre los dos bandos siempre refieran el mismo ganador: los policías.¹⁴³

141 Albano Castro Pimentel. “General Ochoa Antich: en allanamiento a LUZ hubo descontrol militar”. *El Nacional*. Caracas, 21 de mayo de 1989. p. D 12.

142 Enrique García y Rafael Galicia. “Armas químicas prohibidas por la ONU utilizan las FAC contra los estudiantes”. *Últimas Noticias*. Caracas, 25 de mayo de 1989. p. 13.

143 Agustín Blanco Muñoz. “Morir de encapuchado”. *Últimas Noticias*, Caracas, 24 de mayo de 1991. p. 23.

Los encapuchados alegaban que el hecho de tapar sus rostros era simplemente una forma de proteger su identidad ante los cuerpos policiales del Estado que podían identificarlos y detenerlos. A su vez no permitía su reconocimiento por parte de las autoridades de las instituciones de educación media y universitaria, que por lo general procedían a su expulsión por motivos disciplinarios. De ahí que el término “encapuchado” comenzó a usarse de manera peyorativa por el gobierno y los medios de comunicación que intentaban responsabilizarlos de la violencia suscitada y de la actitud represiva de los cuerpos policiales en las protestas estudiantiles.

En algunos medios de comunicación aparecían las reseñas de las protestas estudiantiles en las que se señalaba a los encapuchados como los propiciadores de la violencia, esto con la intención de desprestigiar esa forma de protesta y poner a las distintas comunidades universitarias y a la opinión pública en contra de quienes tapaban su rostro para protestar.

Los periodistas que cubrían las protestas estudiantiles, por lo general acusaban a los encapuchados de agresores. Esta campaña de desprestigio se hizo tan intensa que los estudiantes en sus protestas rechazaban la presencia de los medios de comunicación.

Se trataba de un problema de seguridad personal, los estudiantes que salían retratados en algún periódico por protestar, luego recibían en sus hogares la visita de la DISIP, que acusándolos de subversivos allanaban sus residencias o incluso apresaban a sus familiares. Es por eso que un encapuchado que fue entrevistado por una periodista de *El Nacional* señaló:

[...] cuando protestas y sales en las fotos terminas dentro de un calabozo de la DISIP o en cualquier otro cuerpo policial. **La capucha es una autodefensa. No es sinónimo de terrorismo sino de autodefensa. Cuando protestas con la cara descubierta y te pasa algo, entonces vas a la Fiscalía y planteas tu caso, la respuesta que te dan es que no hay máquina para tomar tu declaración o que el funcionario no está.** [...] cuando se agotan todos los medios, hay un

solo medio de protestar. **Mi única concepción de lucha, cuando se agotan todos los medios legales, es la violencia.** [...] no tiene sentido protestar legalmente para que cuatro días después te allanen tu casa. **No creo en esta falsa legalidad.**¹⁴⁴ (El subrayo es nuestro).

Durante los meses de mayo, junio y julio las protestas estudiantiles a nivel nacional por el respeto al medio pasaje estudiantil fueron recurrentes. Las huelgas de hambre, la toma de embajadas, las marchas pacíficas hasta el Ministerio de Educación con participación de algunos profesores y las protestas violentas signaron aquellos días de 1989. El gobierno no ofrecía ningún tipo de soluciones. Las tensiones se aplacaron un poco durante los meses de vacaciones, pero tan pronto se iniciaron las clases la protesta volvió a tomar las calles.

Por eso, el gobierno como una medida para calmar las tensiones, básicamente con los estudiantes universitarios, decretó el 6 de octubre de 1989 la creación de una fundación para la asistencia médica y hospitalaria para estudiantes de educación superior que recibió el nombre de FAMES. La creación de un organismo de este tipo había sido una petición hecha por los estudiantes a Lusinchi en 1988 a propósito del levantamiento de la huelga de hambre que se realizó durante los primeros meses de ese año. Lusinchi supuestamente había destinado veinte millones de bolívares para iniciar un programa de hospitalización, cirugía y maternidad para los estudiantes, que nunca se cristalizó sino hasta octubre de 1989.

Pero el eje central de las protestas desatadas durante aquel año estaba aún sin solución, las medidas económicas continuaban su curso según lo establecido con el FMI y el medio pasaje estudiantil seguía sin implementarse definitivamente. En Maracaibo, Mérida, San Cristóbal, Caracas y Barcelona las protestas no cesaban, así como tampoco la represión de los cuerpos policiales.

144 Marlenis Castellanos. "Encapuchados-UCV: No creemos en esta falsa legalidad". *El Nacional*. Caracas, 14 de mayo de 1989. p. C 4.

En Barcelona por ejemplo, en el mes de noviembre, un estudiante de la UDO, llamado José Luis Rodríguez, fue asesinado de un balazo por un GN. El hecho propició la protesta de los estudiantes de la UDO quienes durante el entierro de su compañero acusaron al gobierno por la ola de violencia y represión desatada en contra de los estudiantes. Días después en la UCLA de Barquisimeto también hubo violentas manifestaciones estudiantiles con quema de vehículos y obstrucción de la vía pública por el asesinato del estudiante.

De acuerdo con esto, el informe anual de 1990 sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela presentado por PROVEA hacía el siguiente balance:

[...] luego de ser reprimida una marcha en contra del aumento del pasaje, en la ciudad de Maracaibo (Edo. Zulia) 12 estudiantes fueron detenidos y posteriormente liberados, luego de ser reseñados, lo que es otra práctica habitual en estos casos. Por otro lado, en 14 manifestaciones reprimidas se produjeron 68 heridos por armas de fuego, en su mayoría estudiantes heridos por los perdigones [...]¹⁴⁵

En el ínterin de estas protestas ocurre, el 19 de diciembre de 1989, la invasión norteamericana a Panamá con la llamada “Operación causa justa” con la que el gobierno estadounidense bombardeó aquel país y asesinó a miles de panameños con el pretexto —entre otros— de detener al presidente Manuel Antonio Noriega por supuesto delito de narcotráfico y lavado de dólares.

Este hecho propició que a los dos días de la invasión, estudiantes y diversas organizaciones políticas protestaran de manera pacífica en la plaza Caracas en contra de la agresión al pueblo panameño. Durante esos días arribaron las vacaciones por el asueto navideño, lo que mermó las manifestaciones estudiantiles, pero entrado el nuevo año e iniciadas las clases las protestas por la invasión a Panamá continuaron. En una

145 PROVEA. *Situación de los derechos humanos en Venezuela: Informe anual*. Caracas, Acción Ecueménica, 1990. p. 43.

nueva ocasión se hizo en la plaza Venezuela. Allí fueron quemados la bandera de Estados Unidos y un muñeco alusivo al presidente George Bush (padre).

Pronto el tema del pasaje estudiantil volvió a copar la escena de las protestas. El agravante era el nuevo aumento que sufrirían a inicios de 1990 los precios de la gasolina, según lo estipulado en la carta de intención. De ahí que el inminente aumento de la gasolina y por ende del transporte público, sin haberse resuelto la problemática del medio pasaje, hizo que los estudiantes de diferentes instituciones de educación media y universitaria tomaran las calles para protestar "... en repudio al alza desmesurada y descarada de los precios de la comida, así como también al inminente alza del pasaje."¹⁴⁶

Desde los primeros meses de 1990 se desarrollaron intensos disturbios estudiantiles en ciudades como Barcelona, Puerto la Cruz, Guarenas, Guatire, Caracas y Mérida. Esta última fue tomada varias veces por la GN. Todas esas protestas obedecían al problema del inminente aumento del pasaje. En el mes de febrero, al motivo de estas protestas se sumó un nuevo acontecimiento: el asesinato de dos estudiantes a manos de efectivos de la PM.

El primer asesinato se efectuó durante el asueto de carnaval en San Antonio de los Altos. Juan Carlos Alberto de la Cantera de 17 años se encontraba jugando con agua a las afueras del liceo donde cursaba estudios y un policía le exigió que dejara de hacerlo, como éste no le obedeció le propinó un disparo segándole la vida en el acto.¹⁴⁷

El segundo asesinato ocurrió en el estado Lara, donde Raúl Eduardo Arcay Ruiz de 19 años, estudiante de la universidad Fermín Toro, fue asesinado de un disparo en la cabeza por unos policías que perseguían el vehículo en el que viajaba el estudiante por considerarlo sospechoso.¹⁴⁸ El asesinato de estos dos estudiantes generó un conjunto

146 Ezequiel Patiño. "Protestan en el Pedagógico contra el alza de la gasolina". *Últimas Noticias*. Caracas, 19 de enero de 1990. p. 50.

147 PROVEA. *Situación de los derechos...* Ob. Cit. p. 20.

148 Ídem.

de protestas que se extendieron hasta finales del mes de marzo cuando arribó a Venezuela el vicepresidente de los Estados Unidos Dan Quayle. Su corta estadía en el país fue motivo de repudio por parte del sector estudiantil que le acusaba de ser el representante de los organismos financieros internacionales que mantenían al país en crisis.

LAS SOLUCIONES DEL GOBIERNO

Llegado el mes de mayo, dadas las presiones que había ejercido el movimiento estudiantil, el gobierno no había decretado el nuevo aumento de los precios de la gasolina y el pasaje. Antes de hacerlo trató de solucionar la problemática del medio pasaje estudiantil. En este sentido, el ministro Roosen inició las conversaciones con los representantes de los diferentes gremios de transportistas públicos. En dichas reuniones acordó continuar respetando el medio pasaje estudiantil mientras el gobierno creara un bono que lo sustituiría, como reseñaba *El Nacional*:

[...] hubo dos anuncios por parte del ministro Gustavo Roosen: la no eliminación del pasaje preferencial estudiantil en lo que resta del año escolar, tiempo que será aprovechado para hacer un censo, en colaboración con la OPSU, las federaciones de centros universitarios y zonas educativas del ME para determinar quiénes hacen uso del transporte público, a nivel de educación media y universitaria y hacerlos acreedores de una beca de transporte por un monto aún no anunciado, pero en todo caso, a decir del ministro, permitirá asimilar el ajuste tarifario que viene.¹⁴⁹

Ese planteamiento del ministro a la comunidad estudiantil no solventó el problema. De ahí que de inmediato la FCU-UCV organizó

149 Iris Castellanos. "Por este año se mantendrá el medio pasaje estudiantil". *El Nacional*. Caracas, 2 de junio de 1990. p. C 7.

una marcha pacífica para el día 6 de junio desde la plaza del Rectorado hasta el Congreso Nacional, que contó con la participación de algunos profesores y en donde Jorge Rodríguez, presidente de la FCU, declaró a la prensa los motivos de la marcha, ‘... estamos diciendo no al aumento de la gasolina, estamos diciendo no a la eliminación del pasaje estudiantil, estamos diciendo qué hace Pérez en Malasia’.¹⁵⁰

El temido aumento de la gasolina finalmente se hizo efectivo durante los meses de vacaciones escolares. Momento propicio, por cuanto era ampliamente sabido que las temporadas vacacionales suponían la desmovilización del movimiento estudiantil. No obstante, los estudiantes de Maracaibo al conocer la medida iniciaron junto a sectores populares, una intensa jornada de violentas protestas. La quema de cauchos y unidades de transporte público y el saqueo de algunos establecimientos comerciales durante la protesta hicieron que el gobernador de entonces, Oswaldo Álvarez Paz, amenazara con decretar el estado de emergencia en el Zulia.

De hecho, LUZ fue cercada militarmente como lo denunciaba la dirigente estudiantil de la UCV Jazmín Jaimes:

Luego de las protestas estudiantiles en el Zulia por el alza del pasaje y porque las líneas de carro se niegan a aceptar el medio pasaje, el saldo ha sido la detención de más de 200 personas, la movilización de tanques de la Guardia Nacional a las diferentes entradas de LUZ, cierto estado de movilización en dicha región [...] la respuesta a la protesta estudiantil [...] ha sido la movilización, el cerco a la universidad y el anuncio de que van a declarar el estado de emergencia en el Zulia.¹⁵¹

En el marco de este conflicto, LUZ es allanada nuevamente por la GN, por órdenes del gobernador Álvarez Paz. La juventud de su

150 Marlenis Castellanos. “La gasolina encendió la marcha estudiantil”. *El Nacional*. Caracas, 7 de junio de 1990. p. C 2.

151 Pedro Estacio. “Cerco militar a LUZ denuncia la FCU-UCV”. *El Nacional*. Caracas, 31 de julio de 1990. p. C 2.

partido, COPEI, le exigió a través de los medios de comunicación una explicación sobre tal orden. No obstante, el arribo de las vacaciones, como se señaló, hizo que el tema fuese pasado a un segundo plano.

En el mes de septiembre se iniciaron las clases en las principales universidades del país y el asunto del pasaje estudiantil continuaba sin solución. En esa ocasión la violencia que se había desatado en el Zulia se trasladó a oriente. La negativa de los transportistas a respetar el pasaje estudiantil provocó en las adyacencias de la UDO Sucre, intensos disturbios en los que fueron detenidos el secretario de la FCU-UDO, Ernesto Serrano, y el delegado al Consejo Universitario, Simón Mendoza.

A ambos estudiantes se les pretendía abrir juicio militar por estar supuestamente involucrados en la quema de un autobús de lujo durante las protestas. Esta pretensión generó el acrecentamiento de las protestas en el Oriente del país. Durante los primeros días del mes de octubre los estudiantes de la UDO realizaron diversos disturbios. En uno de ellos secuestraron cincuenta autobuses que cubrían la ruta Barcelona-Puerto La Cruz. Al siguiente día secuestraron doce camiones cargados de comestibles y los introdujeron en las instalaciones universitarias.

En las ciudades de Mérida y Caracas los estudiantes universitarios se solidarizaron con sus compañeros de Oriente, propiciando intensos disturbios durante todo el mes de octubre que tuvieron como común denominador la situación generada en la UDO y, como en ocasiones anteriores, el problema del pasaje estudiantil.

A BARRER QUE VIENE BUSH

El presidente de los Estados Unidos George Bush había anunciado la realización de una gira por diversos países de Sudamérica, entre los que se encontraban Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Venezuela. Su intención era la de plantear a los mandatarios de esos países su llamada “iniciativa para las Américas”, que contemplaba la

búsqueda de acuerdos para un mercado común regional, y adicionalmente verificar el curso que llevaba la aplicación de las medidas económicas.

Pero la situación de conflictividad social en Venezuela se había desbordado a tales niveles que el gobierno, aun con toda la represión que desató, no podía controlarla. Para CAP no era conveniente que internacionalmente se conociera el conflicto que había en el país por la aplicación de las medidas económicas del FMI y menos que el presidente Bush presenciara tal realidad.

De ahí que un mes antes de la visita de Bush, CAP decidió decretar la prohibición de las protestas de calle y el encarcelamiento a quien las realizara, por lo que giró instrucciones a los organismos competentes de mantener “el principio de autoridad” ante cualquier alteración del orden público. No obstante, el ambiente de conflictividad y la pérdida de legitimidad que había alcanzado el gobierno hicieron que las órdenes de CAP no aplacaran las protestas. A los dos días del anuncio se desarrollaron violentos disturbios en Los Teques, Guárico y Sucre por el tema que había mantenido a los estudiantes en la calle desde abril de 1989: el pasaje estudiantil y el aumento de la gasolina.

La noticia de la visita de Bush a Venezuela se dio a conocer una semana antes de su llegada. De inmediato los estudiantes del Pedagógico de Caracas y la UCV realizaron una marcha en contra de su visita, en la que quemaron banderas de Estados Unidos y muñecos alusivos al presidente Bush.

Pero la mayor violencia se vivió el 6 de diciembre, día antes de su llegada al país. En Caracas, en la UCV y en el IUPC, los estudiantes protestaron enérgicamente. En ambos lugares se produjeron enfrentamientos entre los estudiantes y la PM. La prensa al día siguiente de los disturbios reseñaba:

Violentos disturbios, durante los cuales resultó herido de un balazo un inspector de la Policía Metropolitana, se registraron ayer en la Universidad Central de Venezuela, luego que un grupo de encapuchados, portando armas largas y cortas, disparara a diestra y siniestra en la

manifestación en rechazo a la visita del presidente norteamericano George Bush.¹⁵²

Algo similar ocurrió en el IUPC donde los excesos policiales llegaron a los extremos de impedir la manifestación que estaba pautada para ese día en el que fueron heridos dieciséis estudiantes, según lo denunciaron los dirigentes estudiantiles de esa institución: Janet Torcates y Rafael Loreto, quienes responsabilizaban a CAP de lo ocurrido por haber ordenado la prohibición de las manifestaciones públicas.

En Maracay, las protestas estudiantiles en contra de la visita de Bush estuvieron acompañadas por los vecinos de las zonas aledañas a la UCV, el Pedagógico y el núcleo de la UC:

[...] revelaron los estudiantes que no aceptan la presencia del presidente Bush, encabezados por Milena Oteriza, del Consejo Directivo del Pedagógico. Para los estudiantes la visita del Mandatario norteamericano significa una humillación al pueblo venezolano, porque gracias a sus exigencias el país está en crisis. [...] ‘El presidente Bush conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional y la Banca Internacional son los responsables de la crisis que asesina al país y no estamos de acuerdo con su visita [...]’¹⁵³

En Valencia, los estudiantes de la UC también protestaron en contra de la visita de Bush con violentos disturbios que fueron reprimidos por la policía con saldo de diez estudiantes heridos, según lo reseñaba la prensa. En Mérida las protestas contra el presidente estadounidense acabaron en el saqueo de más de diez comercios. Los cuerpos policiales, dada la orden de CAP de prohibir las protestas de calle, aprovecharon para cometer todo tipo de excesos. El presidente

152 José Manuel Pérez. “Violentos disturbios ayer en Caracas en protesta por la visita de George Bush”. *Últimas Noticias*. Caracas, 7 de diciembre de 1990. p. 21.

153 Gustavo Izaguirre. “Sectores vecinales protestaron visita de Bush”. *Últimas Noticias*. Caracas, 7 de diciembre de 1990. p. 21.

de la FCU-UCV, Jorge Rodríguez, denunciaba ese hecho al afirmar que “El gobierno está masacrando a los estudiantes para defender al genocida de Bush y si insiste en esa actitud los universitarios no nos vamos a quedar con los brazos cruzados...”¹⁵⁴

El Consejo Universitario de la UCV ante esta ola de protestas se pronunció señalando que la visita de Bush no era oportuna, por cuanto la invasión a Panamá, tan cuestionada en Venezuela, aún estaba reciente y en el país había graves problemas socio-económicos a causa de la agenda norteamericana aplicada en América Latina.

Otro sector que también se pronunció en contra de la visita de Bush fue el de los trabajadores. Los miembros de la Central Única de Trabajadores de Venezuela (CUTV) publicaron un comunicado en la prensa donde señalaban que:

[...] la presencia del mandatario norteamericano en los actuales momentos, es la mayor evidencia del grado de sumisión y dependencia del gobierno nacional ante la potencia del Norte, lo cual se viene expresando en la antipopular política económica que servilmente aplica el gobierno de CAP, por imposición de FMI.¹⁵⁵

A pesar de todas las protestas que se desarrollaron en el país en contra de la visita de Bush, la agenda se llevó a cabo tal como estaba prevista. El 7 de diciembre de 1990 George Bush (padre) arribó al país por el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde fue recibido por su homólogo Carlos Andrés Pérez. Sus primeras palabras al presidente venezolano y a la prensa nacional fueron:

Sé que el programa de reformas económicas que usted ha implementado, luego de asumir la presidencia, a veces ha sido difícil. Sin

154 Sandra Guerrero. “50 detenidos en disturbios el viernes”. *El Nacional*. Caracas, 7 de julio de 1990. p. D 17.

155 *Últimas Noticias*. “CUTV repudia visita de Bush”. Caracas, 7 de diciembre de 1990. p. 21.

embargo, usted se ha mantenido firme a sus lineamientos. Y usted también se ha mantenido confiado en el futuro de Venezuela, un futuro de prosperidad y democracia.¹⁵⁶

Mientras CAP recibía a Bush en el país, los estudiantes que habían sido detenidos durante las manifestaciones del 6 de diciembre eran amenazados con ser enviados al retén de Catia bajo acusación de alteración del orden público. Y en efecto así ocurrió. El 12 de diciembre el grupo de once estudiantes fueron trasladados al retén de Catia. Sin embargo, al día siguiente fueron liberados, en parte por la diligencia que realizaron algunos diputados del Congreso y el presidente de la FCU-UCV, quienes se reunieron con el propio CAP en Miraflores y le solicitaron la liberación de los estudiantes y, por otro lado, porque al parecer las intenciones del gobierno eran simplemente las de amedrentarlos y controlar las protestas mientras se desarrollaba la visita de Bush.

Con estas protestas culminaba el año 1990. El fabuloso gran viraje había surtido los resultados previstos por la mayoría de los venezolanos, esto era, mayor desempleo, inflación, alto costo de los servicios públicos que conducía a la mayor depauperación de la calidad de vida de los ciudadanos y como producto de todo ello un alto grado de conflictividad que se incrementó durante el año 1991, por el aumento de los precios de la gasolina, los servicios públicos y el pasaje.

Ante estas protestas el gobierno continuó con su política represiva en contra de la disidencia. En este sentido, el año 1991 cobró gran importancia, por cuanto entre los meses de marzo y noviembre fueron asesinados en manifestaciones por el medio pasaje estudiantil ocho estudiantes, por los cuerpos policiales. El gobierno para justificar estos excesos adelantó una campaña mediática en contra de los estudiantes que protestaban encapuchados, a quienes responsabilizaba de ser los propiciadores de la violencia.

156 Hernán Fuentes. "Una Venezuela próspera es esencial en el hemisferio". *El Nacional*. Caracas, 8 de diciembre de 1990. p. D 17.

EL ASESINATO COMO SOLUCIÓN

Los dos primeros asesinatos a estudiantes se produjeron en el mes de marzo en las ciudades de Mérida y Trujillo. Ya desde comienzos de aquel año se habían desarrollado fuertes disturbios por el problema del irrespeto al medio pasaje estudiantil. En una de esas revueltas Rubén Darío Cárdenas, estudiante de Filosofía y Letras del núcleo Rafael Rangel de la ULA en Trujillo, murió por causa de un alambre que le atravesó la arteria femoral al intentar saltar una cerca para huir de la persecución de la policía. A los pocos días Magdiel Pérez García, estudiante de Historia de la ULA-Mérida, fue asesinado de un disparo en la región intercostal derecha mientras protestaba por el pasaje estudiantil.

Ambas muertes pronto generaron un estado de violencia en varias regiones del país. Los estudiantes con mayor indignación denunciaban ante los medios de comunicación la ola represiva desatada por la policía. La ciudad de Mérida fue acordonada por el Ejército el día del sepelio de uno de los estudiantes. La prensa reseñaba:

La situación que vivió la ciudad de Mérida, en el momento que era sacado del hospital de Los Andes el cadáver del estudiante del quinto año de la Facultad de Humanidades hacia Acarigua, su ciudad natal, fue realmente dramática, pues hasta disparos hubo de parte de los soldados que se encontraban apostados en la ruta que le había dispuesto para llevar en hombros a una de las víctimas de los disturbios.¹⁵⁷

Las protestas por las muertes de los estudiantes andinos continuaron con mayor vigor en diversos estados del país. En Mérida, después de al menos quince días de violencia ininterrumpida, los estudiantes de la ULA convocaron a una marcha pacífica para exigirle a los cuerpos policiales, militares y al gobierno el cese de los hostigamientos

157 Sandra Guerrero. "Violencia en cinco estados: disparó el Ejército en entierro de estudiante". *El Nacional*. Caracas, 13 de marzo de 1991. p. D 16.

a estudiantes, justicia por el asesinato del estudiante de Historia y una vez más el respeto al polémico medio pasaje estudiantil. En la misma ocasión, en Caracas, los estudiantes de la UCV realizaron una manifestación en los alrededores de la universidad por exigencias similares a las de los estudiantes de Mérida.

La PM como acostumbraba a hacerlo acordonó la universidad y en el momento de ebullición de la protesta disparó en contra de los manifestantes que se encontraban en la entrada de la UCV. En ese momento cayeron heridos el estudiante de la Facultad de Ciencias Félix Farías y la estudiante de la escuela de Trabajo Social, Belinda Álvarez quien fue hospitalizada durante quince días en estado vegetativo a consecuencia del disparo.

Los episodios de estudiantes heridos y muertos por armas de fuego en manifestaciones de calle obligaron a los estudiantes de la UCV a realizar una marcha hasta el Congreso Nacional encabezada por el rector Fuenmayor, para exigirle a los diputados una vez más la creación de una ley que prohibiese el uso de armas de fuego en manifestaciones públicas:

Hemos venido acá [decía el rector Fuenmayor] para exigir la promulgación de una ley contra el uso de armas de fuego como mecanismo de represión contra las manifestaciones [...] la arremetida policial registrada en los últimos días ha ocasionado mayor disgusto entre la población estudiantil a nivel nacional.¹⁵⁸

La salud de Belinda Álvarez no mejoraba. Este hecho causó que se produjeran violentas manifestaciones en la UCV. El gobierno en su honda represiva amenazaba con encarcelar y juzgar a los encapuchados que fuesen capturados en estas manifestaciones. Bajo esta amenaza y por el derecho a la vida, los estudiantes de Caracas organizaron varias marchas que tuvieron como consigna principal el repudio a la represión

158 *El Nacional*. "Los universitarios exigieron ley contra uso de armas en manifestaciones". Caracas, 5 de abril de 1991.

policial y al uso de armas de fuego en las manifestaciones populares. En la primera marcha convocada para el 10 de abril, la intervención de la PM hizo que culminara con un enfrentamiento entre éstos y los manifestantes, donde resultaron heridas más de treinta personas por las bombas lacrimógenas y un número similar de detenidos.

Finalmente, el 14 de abril, Belinda falleció en su residencia ubicada en la parroquia 23 de Enero. Su muerte alentó la indignación ya generada desde el momento en que fue herida. Los vecinos del 23 de Enero durante varios días protestaron por la muerte de Belinda y a partir de ese momento y hasta el mes de julio, cuando fueron suspendidas las clases por el período vacacional, las protestas estudiantiles tuvieron como motivo principal el repudio a la represión policial y el tema del pasaje.

A medida que pasaban los días, la violencia generaba mayor violencia. Los estudiantes universitarios y de educación media quemaban cauchos, vehículos, saqueaban transportes de alimentos, arrojaban bombas de fabricación casera a la policía y ésta a su vez respondía disparando perdigones cargados de objetos metálicos como clavos, plomo o metras de vidrio. La protesta se había convertido, como lo define la profesora Margarita López Maya en "... una acción política desarrollada por los sectores populares, quienes la utilizaban como un canal que evalúan como efectivo para hacer llegar sus demandas y/o expresar sus conflictos a las instancias de poder..."¹⁵⁹

De esta forma lo entendían los estudiantes cuando protestaban. Una entrevista publicada por *El Nacional* a un estudiante del IUPC que se encontraba manifestando así lo demuestra:

[...] protestamos de esta forma porque no tenemos otra alternativa. Es más violento el aumento de los precios, la corrupción de los

159 López Maya, Margarita. "La protesta popular en la Venezuela contemporánea: enfoque conceptual-metodológico y fuentes". En: Rodríguez, José Ángel (compilador) *Visiones del oficio*. Caracas, Academia Nacional de la Historia, Comisión de Estudios de Postgrado, Facultad de Humanidades y Educación-UCV. 2000. p. 403.

gobiernos, las medidas del Fondo Monetario Internacional. Nosotros somos una vanguardia cansada de tanto abuso, de la represión policial, somos una especie de válvula de escape de la ciudadanía que anda en la calle y siente rabia, impotencia y ganas de expulsar su protesta, pero teme ser reprimido a golpes por la policía.¹⁶⁰ (El subrayado es nuestro).

El período vacacional del mes de agosto supuso el enfriamiento de las protestas estudiantiles. No obstante, hacia los primeros días de octubre los estudiantes de Los Teques y Guarenas, en el estado Miranda, asumieron el protagonismo en la lucha por el respeto al pasaje estudiantil. En Los Teques, a partir del 22 de octubre, el pasaje había aumentado a treinta bolívares, lo que produjo un gran número de protestas estudiantiles y populares que estuvieron signadas por la quema de vehículos, la interrupción del tránsito y manifestaciones a las puertas del Consejo Municipal de la ciudad. En una de esas jornadas es asesinado de un balazo, por un efectivo de la PM, Rubén Contreras, estudiante de educación media.

La evidente e inocultable represión que contra los estudiantes ejercía el gobierno hizo que, tanto el Ministerio Público como algunos medios de comunicación, reflexionaran sobre el hecho e intentaran explicar los motivos de las protestas estudiantiles. *El Nacional*, por ejemplo, publicó en junio una encuesta que reflejaba lo ya sabido: el precio del transporte público era la causa principal de las protestas estudiantiles que se habían generado desde comienzos de 1989, por ser un servicio de primera necesidad para más del 42% de los habitantes de Caracas y sus zonas aledañas.

El Ministerio Público, por su parte, presentó a través del subdirector de Derechos Humanos, dr. Jesús María Casal, un informe banal, en el que daba a conocer a la opinión pública más de cien casos de denuncias sobre atropellos policiales perpetrados por funcionarios

160 Freddy Torres. "Estallaron disturbios en el Pedagógico de Caracas". *El Nacional*. Caracas, 4 de junio de 1991. p. D 4.

de la PM, la DISIP y la PTJ. Afirmamos que el informe era banal, por cuanto identificaba como principal causante de tal situación el supuesto desconocimiento por parte de estos funcionarios de los derechos ciudadanos y su bajo nivel de instrucción, dejando de lado el hecho de que el accionar de los policías respondía a la política que el gobierno de CAP había establecido para solventar los conflictos sociales en general.

Así las cosas, el estado Miranda, específicamente en Guarenas y Los Teques, continuó siendo el foco de las protestas por el pasaje estudiantil. A tal grado había llegado la conflictividad en aquel estado que su gobernador Arnaldo Arocha decidió conceder un subsidio de cinco bolívares a los transportistas para bajar las tensiones. Esto evidentemente sólo resolvió una parte del problema. En otros lugares del país, como por ejemplo Caracas, continuaban las protestas. En esta ocasión la represión del gobierno se extendió al allanamiento de las residencias de algunos estudiantes de educación media que fueron encarcelados.

En virtud de estas detenciones, se reunieron en la sede de la FCU-UCV representantes estudiantiles de esa casa de estudios para denunciar el hecho ante la prensa y señalar que continuarían las protestas:

Hoy todo el país está protestando por las necesidades que se están sintiendo [señalaba el presidente de la FCU-UCV Luis Figueroa] y en consecuencia, si el gobierno quiere acabar con las protestas allanando y reprimiendo, no va a amilanar a nadie porque la situación es generalizada y tendrá que meter preso a todo el mundo.¹⁶¹

Como lo había afirmado Figueroa, las protestas continuaron sin tregua al igual que la represión. En ese ínterin, la lucha por el respeto al medio pasaje estudiantil durante el mes de noviembre cobró cuatro víctimas más. Primero el 15 de noviembre Yimmi Hernández,

161 Pedro Estacio. "Continúa la represión contra los estudiantes". *El Nacional*. Caracas 13 de noviembre de 1991. p. C 3.

estudiante del liceo Andrés Bello perdió la vida en la av. Andrés Bello al ser arrollado por un conductor de transporte público que se negó a dejarlo abordar la unidad. Cinco días después, dos estudiantes del liceo Juan Lovera, que respondían a los nombres de Jarwin Capote y José Gregorio Vergara, fueron asesinados de varios disparos de cartuchos cargados de metras que les propinaron efectivos de la PM durante una protesta en el sector de Macarao.¹⁶²

La cuarta víctima fue Héctor Guzmán, estudiante de la UCLA en Barquisimeto, quien fue asesinado por un disparo de fusil durante una protesta. Los disturbios producidos en aquella ciudad a consecuencia del asesinato del estudiante hicieron que el Ejército tomara Barquisimeto.

CAP que en raras ocasiones se pronunciaba sobre estos hechos, lo hizo en esa oportunidad, condenando la acción de la policía sin dejar de responsabilizar a los manifestantes por la violencia desatada:

[...] **Venezuela es un país democrático, donde el derecho a la protesta y a la crítica está abierto, pero lo que no está permitido es la violencia.** Para la violencia no hay derecho, ni para quemar autobuses, ni para salir encapuchados, para eso no hay admisión en un país democrático como Venezuela, y eso sí estamos dispuestos a combatirlo, y **lo combatiremos e impediremos que suceda [...]**¹⁶³ (El subrayado es nuestro).

Las protestas por los cuatro estudiantes asesinados en apenas un mes fueron de tal magnitud que el gobierno para aplacar al movimiento estudiantil, decidió suspender las clases a nivel nacional hasta el 7 de enero del año siguiente.

162 PROVEA. *Situación de los derechos humanos en Venezuela: Informe anual*. Caracas, Gráficas Reus S.R.L. 1992. p. 29

163 *Últimas Noticias*. “El gobierno no amparará crímenes de ninguna naturaleza dijo CAP en Barinas”. Caracas, 7 de diciembre de 1991. p. 52.

Los reiterados hechos de violencia registrados en todo el país, en más de 400 manifestaciones, que devinieron en sucesos con saldos de heridos, ciudadanos muertos y pérdidas de bienes son las razones que esgrime el Ejecutivo Nacional para suspender las clases hasta el próximo 7 de enero.¹⁶⁴

El avance cada vez más acelerado de las protestas estudiantiles, aun a pesar de la actitud represiva que había asumido el gobierno, daba cuenta de la presencia de una profunda crisis social en la que la legitimidad de los órganos de poder ante una parte de la sociedad se había perdido. Sumado a esto, las medidas económicas implementadas por el gobierno desde 1989 lejos de solventar la crisis contribuyeron con su agudización y dieron paso al clima de inestabilidad política con la que recibió Venezuela al año 1992.

164 *El Nacional*. "El gobierno decide suspender las clases hasta enero". Caracas, 6 de diciembre de 1991. p. A 1.

IV. GOLPES Y DESTITUCIÓN

1992 fue el año en el que se recrudeció la crisis que se arrastraba desde los inicios del gobierno de CAP. Las tensiones sociales y económicas con las que culminó 1991 se pusieron de manifiesto desde los primeros días del mes de enero de aquel año. El tema del medio pasaje estudiantil continuaba siendo la motivación fundamental de las protestas estudiantiles, y Guarenas, Los Teques y Caracas sus epicentros. No obstante, en esa ocasión el gobierno nacional decidió adelantar una campaña más agresiva en contra de los encapuchados. Diversos representantes del gobierno e incluso el fiscal general de la República aplaudían las labores de los efectivos policiales que reprimían a los estudiantes en manifestaciones.

PALO CONTRA LOS ENCAPUCHADOS

El 7 de enero de 1992 se iniciaron las clases a nivel nacional. El gobierno aún no daba soluciones eficientes al problema del medio pasaje estudiantil. Una de las alternativas que salió al tapete fue que las alcaldías se comprometieran a subsidiarlo y que se creara un ticket estudiantil que luego fuese canjeado por los transportistas. En el caso de Caracas, Antonio Ledezma, quien recién asumía la gobernación,

se había comprometido a buscar soluciones a la problemática y a no reprimir las manifestaciones estudiantiles durante su gestión.

Mientras se discutían estas opciones en Los Teques y Guarenas los estudiantes ya habían iniciado las protestas de calle por el medio pasaje. Un hecho que agudizó la situación fue la decisión del magisterio de iniciar una huelga indefinida por las deudas que el gobierno sostenía con ellos. Por lo que, en contra de esta medida, estudiantes de Guarenas y Guatire generaron durante varios días intensos disturbios.

En Caracas para el día 23 de enero estudiantes de la UCV, el IUPC y el IUPLCM habían acordado realizar una marcha denominada “Día de Protesta Nacional” que cubriría la ruta plaza de El Rectorado centro de la ciudad. Cuando los manifestantes llegaron al centro de la ciudad fueron reprimidos por la PM quien arrojó contra ellos bombas lacrimógenas. Disuelta la marcha los estudiantes se congregaron nuevamente en la UCV y allí un grupo de efectivos de la PM vestidos de civil penetraron el recinto universitario y detuvieron a quince estudiantes que supuestamente fueron hallados con los rostros cubiertos.

Al día siguiente el rector Fuenmayor denunciaba en la prensa que “...la universidad fue allanada por encapuchados, sí, pero por encapuchados policías, quienes escondidos en una cava entraron a la UCV”.¹⁶⁵ Trece de los estudiantes detenidos fueron enviados a la sede de la PTJ.¹⁶⁶ Un grupo de estudiantes de la UCV se trasladó hasta aquel lugar para exigir la liberación inmediata de sus compañeros.

Al cabo de varias horas de protestar a las afueras de la PTJ, le fue permitido al presidente de la FCU-UCV de entonces, Luis Figueroa, ingresar para conversar con los detenidos y constatar que no hubiesen sido torturados. Al salir Figueroa informó al colectivo que los compañeros

165 María Yolanda García. “Estudiantes lograron su cometido: se hicieron sentir”. *El Diario de Caracas*. Caracas, 25 de enero de 1992. p. Ciudad 1.

166 Estos estudiantes respondían a los nombres de Luis Enrique Andrade, José Gregorio Escalona, Julio Cesar Rojas Ávila, Daniel Alvarado, Orlando Ramírez Pérez, José Rodríguez Macías, Jesús González, Luis Alberto Caballero, Héctor Chacón Duque, Jhonatan Toro Marval, Carlos Wagner González, Carlos Valeiro y un décimo tercero cuyo nombre no fue encontrado.

estaban bien y que al parecer no habían sido golpeados en esa sede, pero que igualmente continuarían las protestas hasta que fuesen puestos en libertad.¹⁶⁷

Pero a pesar de las palabras de Figueroa los familiares de los estudiantes detenidos afirmaban que éstos sí habían sido sometidos a torturas:

Mi hijo [...] Carlos Valeiro, estudiante del primer semestre de Ingeniería en la UCV tiene una ceja partida, le rompieron la cabeza a cachazos, su rostro está hinchado y con moretones. [...] [El hermano de otro de los detenidos también señalaba] Tiene las piernas amoratadas y la cabeza rota. Él ratifica que la PM lo golpeó cuando se lo llevaban a Cotiza y que le colocaron una capucha. Todos están lesionados.¹⁶⁸

El gobierno nacional se justificaba al afirmar que los estudiantes detenidos no habían sido torturados y que la UCV, como lo denunció su rector, no había sido allanada sino que la policía para proteger el orden público cumplió con su deber. A ese respecto publicó un comunicado en la prensa que decía:

[...] reiteradamente se han venido originando en las adyacencias de la universidad actos vandálicos que atentan contra la tranquilidad ciudadana y el normal desenvolvimiento de las actividades universitarias, con el agravante de que se bloquea el acceso y libre tránsito a las instalaciones del Hospital Universitario imposibilitando la prestación de los servicios médicos a la población que diariamente recurre a este centro hospitalario. **El Gobierno Nacional frente a esas alteraciones del orden público, procedió a la detención de trece encapuchados quienes mantenían en zozobra a la ciudadanía mediante la quema de vehículos de carga y transporte colectivo**

167 María Yolanda García. "Estudiantes..."

168 Beatriz Hernández. "Los estudiantes sí habrían sido torturados por la PM". *El Diario de Caracas*. Caracas, 27 de enero de 1992. p. Ciudad 1.

con las consabidas pérdidas materiales de alta cuantía.¹⁶⁹ (El subrayado es nuestro).

Con el comunicado, el gobierno daba muestras de no ceder ante las peticiones de los estudiantes. Su intención era la de amedrentar al movimiento estudiantil de manera tal que depusieran su actitud de protesta. Esta fue en esencia la solución que encontraron al conflicto generado por el medio pasaje estudiantil: reprimir las manifestaciones y detener estudiantes.

Dicha intención se refuerza con lo ocurrido el día 26 de enero, cuando un grupo de seis estudiantes universitarios¹⁷⁰ que decidieron tomar pacíficamente la Catedral de Caracas para realizar un ayuno por la liberación de los presos, fueron brutalmente reprimidos y detenidos por efectivos de la PM y la GN. Esta agresión desproporcionada puso en entredicho las promesas del nuevo gobernador de no reprimir las manifestaciones estudiantiles.

A la sazón de estos hechos, el director de la PTJ Mauro Yáñez Pasarela, decidió enviar a los trece estudiantes al retén de El Junquito por hallarlos culpables del delito de alteración del orden público con el uso de capucha y por haber lesionado a Benjamín Pimentel, efectivo de la PM. Esta decisión arrojó más leña al fuego. Los estudiantes detenidos, en vista de la injusticia cometida en su contra, decidieron declararse en huelga de hambre y enviar a la prensa un comunicado que expresaba:

La injusticia de la que hoy somos víctimas nos obliga a tomar determinaciones concretas bajo una cantidad de decisiones como es la de iniciar una huelga de hambre, indefinida, hasta tanto se le dé una vía favorable a esta situación. Haremos responsable al gobierno nacional

169 *El Nacional*. “El Gobierno Nacional niega allanamiento de la UCV”. Caracas, 25 de enero de 1992. p. D 4.

170 Mario Cabrújas, Jesús Meléndez (Sociología UCV) Soledad Equián, Carlos Valera (Estudios Políticos UCV) Alex Castro (Historia UCV) y Esperanza Labrador (Medicina UC).

y a sus políticas antidemocráticas de las consecuencias que esto pueda acarrear.¹⁷¹

Según se denunciaba, esos estudiantes no fueron apresados con los rostros cubiertos como quería acusárseles, sino que por el contrario los policías les habían puesto las capuchas después de detenerlos. Esa denuncia fue hecha por los detenidos y por un joven norteamericano de nombre Mark Zuchelly, quien se encontraba en el país durante esos días y que fue víctima de la represión de la PM dentro de la UCV:

Llegué a la UCV porque iba a buscar a mi novia [...] quien colaboraba con el teatro de la Facultad de Economía, cuando me saltaron encima varios policías. **Me esposaron y me rompieron la franela por la parte de atrás, hasta que me la subieron y me la colocaron en la cara. Acto seguido, me arrastraron por el suelo varios metros, como si yo fuera un perfecto perro. Yo les decía que era estadounidense, que me encontraba de vacaciones en Venezuela y se reían en mi cara. Entonces cuando me metieron a la jaula patrulla fue peor, uno de ellos se me subió encima y empezó a brincar. Allí me golpearon a mí y a todos los demás jóvenes que estaban dentro. Pero en Cotiza fue peor [...] cuando exigí hablar con mi consulado o la embajada me golpearon más. Incluso uno de los policías me decía que me iba a violar.** Yo no entiendo cómo este horror ocurre en Venezuela [...] ¹⁷² (El subrayado es nuestro).

Ante este hecho, estudiantes y familiares de los detenidos se dirigieron a la sede de la Fiscalía con pancartas para denunciar el traslado de los estudiantes a la cárcel de El Junquito y para solicitar que se investigara sobre las torturas a las que habían sido sometidos.

171 María Yolanda García. “Ucevistas presos se declararon en huelga de hambre”. *El Diario de Caracas*. Caracas, 28 de enero de 1992. p. 7.

172 Beatriz Hernández. “Fiscalía pedirá sanciones por torturas a estudiantes”. *El Diario de Caracas*. Caracas, 29 de enero de 1992. p. 9.

Pero al mismo tiempo en el que al exterior de la Fiscalía se encontraban estudiantes, familiares de los detenidos y el joven norteamericano dando su testimonio de lo ocurrido el día de la detención, adentro el fiscal general se encontraba reunido con el ministro Virgilio Ávila Vivas dándole un espaldarazo por haber apresado a los estudiante y haberlos enviado a la cárcel de El Junquito:

[...] creo que el ministro ha entrado con muy buen pie al Ministerio, creo que está dando muestra de conciliación y comprensión y quiero estimularlo no sólo por el aprecio personal que le tengo sino además porque creo que es útil para el país que el ministro se conduzca de esa forma. [...] **estoy dispuesto a condenar la actividad de los encapuchados, eso no se admite en ninguna parte del mundo.**¹⁷³ (El subrayado es nuestro).

En virtud de lo que puede caracterizarse como una burla de parte del fiscal y el ministro Ávila Vivas, los estudiantes optaron por medidas más radicales y al día siguiente de la manifestación en la Fiscalía iniciaron violentos disturbios en la UCV donde quemaron un camión y se enfrentaron con piedras y palos a la PM. Los estudiantes lo que exigían era reunirse con el ministro Ávila Vivas para negociar la libertad de los estudiantes a cambio de no propiciar más disturbios.

La negociación con los estudiantes no parecía estar entre los planes del gobierno. El ministro no se reunió con ellos sino que al contrario pidió hablar con el rector Fuenmayor a quien dio un ultimátum para que controlara a los encapuchados de la UCV o de lo contrario la misma sería allanada bajo el amparo del artículo 7 de la Ley de Universidades.¹⁷⁴ Este tipo de argumentos formaron parte

173 *El Diario de Caracas*. “Fiscal General: ‘el ministro ha entrado con buen pie’”. Caracas, 29 de enero de 1992. p. 9.

174 Artículo 7. El recinto de las universidades es inviolable. Su vigilancia y el mantenimiento del orden son de la competencia y responsabilidad de las autoridades universitarias; sólo podrá ser allanado para impedir la consumación de un delito o para cumplir las decisiones de los Tribunales de Justicia. Se entiende por recinto universitario el espacio

de las intenciones del gobierno de dar carácter legal a los atropellos contra estudiantes.

Para preparar a la opinión pública ante una posible agresión en contra de las universidades y los estudiantes, fue orquestada a través de la Oficina Central de Información (OCI) y los medios de comunicación una campaña en contra de los encapuchados. Durante varios días en diversos periódicos de circulación nacional apareció una foto con una inscripción abajo que decía:

Este encapuchado tiene dos bombas molotov en la mano. Su violencia es contra todos. Es contra la universidad, contra los estudiantes porque desvirtúa sus derechos a la protesta democrática. Su violencia es contra Venezuela. Destruyeron más de 120 vehículos de servicio público, e hirieron a ciudadanos inocentes. El Estado tiene el deber de reprimir la violencia y la agresión [...] ¹⁷⁵

Después de la advertencia del ministro Ávila Vivas, diversos miembros del partido de gobierno alzaron sus voces a favor de que la UCV fuese allanada. Tal fue el caso de su secretario general Humberto Celli, quien alegaba que los parques y las áreas verdes de la universidad no tenían nada que ver con la autonomía y que el gobierno estaba en la obligación de intervenir para evitar alteraciones del orden público. Otro que se pronunció en apoyo a la intención del gobierno de allanar la UCV fue el dr. Gonzalo Barrios quien llegó a señalar de

precisamente delimitado y previamente destinado a la realización de funciones docentes, de investigaciones, académicas, de extensión o administrativas, propias de la institución. Corresponde a las autoridades nacionales y locales la vigilancia de las avenidas, calles y otros sitios abiertos al libre acceso y circulación, y la protección y seguridad de los edificios y construcciones situados dentro de las áreas donde funcionen las universidades, y las demás medidas que fueren necesarias a los fines de salvaguardar y garantizar el orden público y la seguridad de las personas y de los bienes, aun cuando estos formen parte del patrimonio de la universidad. En: http://www.analitica.com/bitblo/congreso_venezuela/ley_universidades.asp [Fecha: 11-03-06].

175 *El Nacional*. Caracas, 1 de febrero de 1992.

forma muy coloquial que, "...es preferible allanar la UCV a que siga la guachafita".¹⁷⁶

Los estudiantes detenidos fueron puestos a la orden del tribunal. La jueza Carmen Elena Penacho fue la encargada del caso. Los estudiantes junto al abogado Ignacio Ramírez Romero, quien era el presidente de la Federación Nacional de Derechos Humanos, se trasladaron al Consejo de la Judicatura con pancartas y consignas para exigir justicia en el caso de los 13 estudiantes presos ilegalmente.

Pero no solamente los estudiantes estaban movilizados en las calles. Mientras éstos protestaban por sus compañeros detenidos, otro actor social tomaba las calles para exigir reivindicaciones: los ancianos. Cerca del Palacio de Miraflores, el día 3 de febrero un grupo nutrido de ancianos pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) marchaba para exigir una entrevista con CAP y así plantearle sus quejas. No obstante, la PM no les permitió llegar a Palacio y sin importar las edades de los manifestantes, arrojó contra ellos bombas lacrimógenas. Los ancianos en medio de la indignación lograron burlar el cerco policial y llegar hasta Miraflores. De igual modo el presidente no iba a poder atenderles, porque se encontraba, como de costumbre, fuera del país.

"MUERAN LOS GOLPISTAS..."

En la madrugada del 4 de febrero CAP volvía al país de su viaje a Davos (Suiza) donde participó en el llamado Foro Económico Mundial. En el Aeropuerto Internacional de Maiquetía le aguardaron el ministro de la Defensa, Fernando Ochoa Antich y el ministro de Relaciones Interiores Ávila Vivas, para informarle sobre un levantamiento militar que se desarrollaba aproximadamente desde las once de la noche del día anterior.

¹⁷⁶ *El Nacional*. "Hay que allanar la UCV para acabar la guachafita". Caracas, 3 de febrero de 1992. p. D1.

En efecto, el Museo Histórico Militar de la Planicie había sido tomado por un grupo de militares comandados por el teniente coronel Hugo Chávez Frías, y la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda en La Carlota por otro grupo bajo las órdenes del teniente coronel Joel Acosta Chirinos. También habían sido tomados militarmente el Fuerte Tiuna, las comandancias generales del Ejército y la Armada, el Comando Regional número cinco y el Comando de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional, la sede de la DISIP en el Helicoide, la sede de la Comandancia de la Policía Metropolitana en Cotiza y el canal televisivo del Estado Venezolana de Televisión. En total fueron tomadas las guarniciones militares de los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Zulia y Caracas.

CAP, ante el alerta de sus ministros se fue a la residencia presidencial donde recibió una llamada telefónica del ministro Ochoa Antich para darle una nueva información: el Fuerte Mara en el estado Zulia también estaba tomado por los militares rebeldes. Ante esa noticia CAP se trasladó al Palacio de Miraflores que pocas horas después fue atacado con tanquetas por una unidad de paracaidistas que se enfrentó con las fuerzas aliadas a CAP.¹⁷⁷

En medio de la turbulencia logró salir de Palacio y se dirigió a Venevisión, desde donde habló a la nación para afirmar que los militares que estaban dando el golpe querían asesinarlo a él y a su familia para “imponer una sangrienta dictadura en Venezuela” y que ya las fuerzas aliadas al gobierno los habían sometido.¹⁷⁸ No obstante, la acción aún no había sido derrotada y tampoco se conocía a ciencia cierta los objetivos de los militares insurrectos.

A eso de las cuatro de la mañana los militares que habían tomado Miraflores se rindieron y el teniente coronel Chávez fue apresado. Pero en el Zulia el grupo comandado por el teniente coronel Francisco

177 Jiménez, Iván Darío. *Los golpes de Estado desde Castro hasta Caldera*. Caracas, Centralca, 1996. p. 162.

178 *El Diario de Caracas*. “Rebeldes intentaron imponer ‘una sangrienta dictadura’”. Caracas, 4 de febrero de 1992. p. 30.

Arias Cárdenas había logrado sus objetivos. Tomaron el puente sobre el Lago de Maracaibo, el cuartel Libertador, los destacamentos treinta y tres y treinta y cinco de la Guardia Nacional, el Cuartel de Patrulleros de la Policía del Estado, la sede de la DISIP, instalaciones petroleras de la costa oriental del lago, el canal II de televisión y finalmente la residencia del gobernador Oswaldo Álvarez Paz desde donde Arias Cárdenas se proclamó gobernador militar del estado.

En Aragua y Carabobo los objetivos militares también fueron alcanzados. En Maracay se sublevaron tres batallones de la 41ª Brigada de Infantería Paracaidista y el batallón García de Sena, al mando del teniente coronel Jesús Urdaneta Hernández, y el batallón de cazadores General Vásquez, al mando del teniente coronel Jesús Ortiz Contreras.

En Valencia los alzados fueron el batallón blindado Pedro León Torres, el grupo de artillería de campaña Lara, el batallón de apoyo José G. Lugo, una compañía de comunicaciones y una compañía de honor, quienes tomaron el Comando Regional número dos de la Guardia Nacional.¹⁷⁹

No obstante, la rendición en Caracas supuso el fracaso de la insurrección. En horas de la tarde del día 4, el teniente coronel Chávez fue presentado ante las cámaras de televisión para que exhortara a sus compañeros a deponer las armas. Sus palabras fueron:

Primero que nada quiero dar buenos días a todo el pueblo de Venezuela, y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el Regimiento de Paracaidistas de Aragua y en la Brigada Blindada de Valencia. Compañeros: **Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros, acá en Caracas, no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el**

179 Rodríguez Valdes, Ángel. *Los rostros del golpe*. Caracas, Alfadil Ediciones, 1992. p. 113.

país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra. Oigan al comandante Chávez, quien les lanza este mensaje para que, por favor, reflexionen y depongan las armas porque ya, en verdad, los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros: Oigan este mensaje solidario. Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, **y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano.** Muchas gracias.¹⁸⁰ (El subrayado es nuestro).

Chávez asumió ante el país la responsabilidad de lo ocurrido. Luego se supo que los militares que estaban detrás de las operaciones pertenecían a una agrupación clandestina fundada en 1983 por los entonces capitanes del Ejército Hugo Chávez Frías, Felipe Acosta Carlés y Jesús Urdaneta Hernández, quienes se desempeñaban como instructores de la Academia Militar. El nombre de este grupo era Movimiento Bolivariano MBR-200 y la acción emprendida la habían denominado Operación Zamora.

Luego del mensaje de Chávez, los diputados del Congreso, con algunos votos salvados, aprobaron la suspensión parcial de las garantías constitucionales en sus artículos 60 (ordinales 1, 2, 6 y 10), 62, 64, 66, 71, 92 y 115. Los diputados del partido de gobierno habían redactado también un documento para ser aprobado, mediante el cual se condenaba el objetivo de los militares de asesinar, como lo había señalado CAP, al presidente.

Sin embargo, el ex presidente Rafael Caldera, rompiendo el pacto de Punto Fijo quizás con mayor visión política que el resto de sus compañeros prefirió salvar su voto, por cuanto afirmaba que no se había probado que, efectivamente, los rebeldes tenían la intención de asesinar a CAP.

180 <http://www.analitica.com/bitbliblioteca/hchavez/4f.asp>. [Fecha: 11-03-06].

Caldera, quien había presenciado varios golpes de Estado en Venezuela, tenía plena conciencia de que ese hecho suponía, más allá de la acción de un grupo de militares rebeldes, la crisis y el colapso del sistema político. De manera que, sin mostrar simpatía por los militares, pidió a los diputados del Congreso analizar los motivos por los que se produjo el golpe, además de señalar: “es muy difícil pedir que se sacrifique por la democracia al pueblo que padece hambre”, palabras que en los meses siguientes lo colocaron como el líder de la lucha en contra de CAP y un año después lo llevaron a consagrarse presidente de la República por segunda vez.

A las palabras de Caldera siguieron las del senador David Morales Bello de AD, quien exaltado por las tensiones del momento le recordó que no se habían reunido en sesión extraordinaria para analizar la eficiencia del gobierno y finalmente señaló:

[...] no hay exageración en los términos en los que se fundamente el decreto 2.086... [Relativo a la suspensión de las garantías] No hay que forzar la imaginación para darse cuenta que la intención no era sólo derrocar al presidente. Además sorprende que una mente como la de Caldera se deje abrazar por la duda [...] **¡Que mueran los golpistas!**¹⁸¹ (El subrayado es nuestro).

La popularidad de CAP estaba tan debilitada que el pueblo en una actitud pasiva se limitó a ver desde las pantallas del televisor lo ocurrido. Hasta aquel momento se desconocían cuáles eran las verdaderas intenciones de los militares que quisieron dar el golpe. Sólo se sabía la versión de CAP y del Congreso. Sin embargo, estas fueron poco aceptadas. Días después se dio a conocer a la opinión pública la proclama de los insurrectos:

181 Ketty Rodríguez. “Congreso aprobó suspensión parcial de las garantías”. *El Diario de Caracas*. Caracas, 5 de febrero de 1992.

Nosotros, como militares herederos del ejército libertador, no podemos permanecer indiferentes a lo que hoy sucede. El inmenso grado de corrupción que plaga todas las esferas del poder, la cantidad de privilegios con que cuentan algunos, la falta de castigo a las personas que sabemos culpables de haber tomado indebidamente dineros públicos, las políticas económicas que colocan en posición deplorable a los venezolanos más sencillos, la venta a consorcios extranjeros de nuestras empresas fundamentales, la imposibilidad que tienen la mayoría de los venezolanos de satisfacer sus necesidades básicas, la ineficiencia del sistema de salud y de todos los servicios públicos, y en fin, el desconocimiento de la soberanía en todos los terrenos, nos fuerza a tomar una acción destinada a reivindicar la democracia.¹⁸²

Conocidas las intenciones de los militares del golpe, gran parte de la sociedad comenzó a simpatizar con ellos. En principio por el rechazo popular que había generado CAP y también porque de alguna manera sentían reivindicados en aquellos militares los reclamos y las exigencias que, desde que se inició el gobierno de CAP, habían hecho. A tal punto llegó la aceptación a los insurrectos que a un mes del golpe grupos de personas se apostaban a las afueras de la casa de los familiares del teniente coronel Chávez para protegerlos de las agresiones policiales.

Tras la suspensión de las garantías constitucionales el gobierno desató —como había de esperarse— una intensa ola represiva. Provea, en un informe especial presentado con motivo del golpe, denunciaba la ejecución de al menos tres estudiantes en Valencia, la detención de varios en Barquisimeto y Barinas, así como el allanamiento del que fue objeto la UC:

En diversas partes del país las autoridades formularon acusaciones públicas de complicidad con los rebeldes, como una forma de justificar

182 MBR-200: *Proclama*, 04.02.92. En: Provea. *Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Informe Anual*. Caracas, Graficas Reus S.R.L. 1992, p. 13.

las agresiones. El Gobernador del edo. Carabobo, por ejemplo, brindó declaraciones en las que sugiere que los estudiantes de la UC brindaron apoyo a los golpistas con respaldo del rector; de esta forma pretendió justificar el allanamiento de la UC y las residencias de numerosos estudiantes.¹⁸³

¿RECTIFICACIÓN O RENUNCIA?

Pero más allá de la actitud represiva que desató el gobierno con motivo del intento de golpe de Estado, hubo un hecho más importante que, sin duda alguna, se produjo después del levantamiento militar. Los políticos de la oposición y el gobierno tomaron conciencia de la magnitud de la crisis que había en el país. De ahí que salieron a la palestra dos propuestas para solucionar un mismo problema.

Por una parte, el CAP ofreció “rectificar” algunas de sus políticas, así como formar un gobierno de amplitud donde se incluyera a la oposición en el gabinete ministerial, además de evaluar la posibilidad de flexibilizar las medidas económicas y crear un Consejo Consultivo de carácter crítico para la búsqueda de soluciones.

Como parte de esas medidas de rectificación, el 5 de febrero fueron puestos en libertad los trece estudiantes presos en El Junquito. Al día siguiente, en una reunión con el ministro de MRI y un grupo de editores de prensa, se tomó la decisión de eliminar la censura impuesta a los medios de comunicación con motivo de la suspensión de las garantías constitucionales.

También fue juramentado por el propio CAP el Consejo Consultivo integrado por Pedro Pablo Aguilar, Ruth de Krivoy, Domingo F. Maza Zavala, José Melich Orsini, Pedro Palma, Pedro Rincón Gutiérrez, Julio Sosa Rodríguez y Ramón J. Velásquez. La misión de este consejo era la de hacer recomendaciones al gobierno sobre la situación

183 PROVEA. *Situación de los derechos...* Ob. Cit. p. VII.

económica, política y social del país, así como evaluar el cumplimiento de los programas que serían implementados por el gobierno.

De parte de los miembros de AD, Humberto Celli, Gonzalo Barrios y Johan Perozo recomendaron a CAP revisar las medidas económicas en aras de alcanzar un equilibrio entre el gobierno y la sociedad. Sobre todo por la preocupación de Celli de que Hugo Chávez comenzaba a ser visto por el pueblo como un héroe.

En virtud de esas recomendaciones y dado el ambiente de tensión generado por el golpe, CAP se reunió con el alto mando militar y con los dirigentes de su partido para evaluar posibles cambios en el gabinete ministerial. A tales niveles había llegado la supuesta intención del gobierno de rectificar su política que el propio Miguel Rodríguez, jefe de Cordiplan y defensor a ultranza de las medidas económicas neoliberales, declaró ante la prensa que las medidas económicas se podían rectificar.¹⁸⁴

Pero por parte de algunos sectores opuestos al gobierno la solución más viable a la crisis era la renuncia de CAP. Miguel Ángel Bureli Rivas, miembro del grupo de los llamados notables, fue el primero en hacer ese señalamiento que, después tuvo eco en diversos sectores políticos y fundamentalmente en el pueblo,

La renuncia es un acto personal, el presidente jura cumplir y hacer cumplir la constitución que dura cinco años, **la renuncia de cualquier funcionario público es un acto soberano. Esa podría ser una de las soluciones pacíficas con la cual él le prestaría un inmenso servicio a la democracia.**¹⁸⁵ (El subrayado es nuestro).

Dos días después de la publicación de la entrevista a Bureli Rivas, CAP se encontraba celebrando el ochenta y cuatro aniversario del

184 Alcides Castillo. "Rodríguez cree que se puede ajustar el paquete". *El Diario de Caracas*. Caracas, 19 de febrero de 1992. p. Política 1.

185 Teresa de Vicenzo. "Una de las decisiones pacíficas sería la renuncia del presidente". *El Nacional*. Caracas, 20 de febrero de 1992. p. D2.

nacimiento del fundador de su partido, Rómulo Betancourt. La oportunidad le fue propicia para repetir las palabras que en una oportunidad había mencionado este personaje, “ni renuncio, ni me renuncian”.

En su honda rectificadora, el 26 de febrero CAP dirigió un mensaje a la nación. Reconoció que había llegado el momento de cambiar algunas medidas de su política económica y en consecuencia anunció una cantidad de programas sociales que supuestamente servirían para aplacar la crisis. Entre ellas estuvo la congelación de las tarifas telefónicas, la ampliación de un plan de construcción de viviendas para la clase media y el financiamiento de carros para transportistas. En cuanto a la salud prometió desarrollar un proyecto de medicinas genéricas y extender el Programa de Alimentación Materno Infantil (PAMI). En el aspecto educativo se comprometió a relanzar el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho, suspendido a raíz de la crisis económica del Viernes Negro.

Pero CAP no logró convencer con sus palabras de rectificación. Los miembros del partido Causa R, a través del gobernador del estado Bolívar, Andrés Velásquez proponían que una salida a la crisis debía ser la convocatoria a un referendo:

El ciudadano presidente debe dar el primer paso, lo que sería una decisión de mucha hidalguía y elegancia [...] Pérez debe poner a prueba su liderazgo, que sea el pueblo quien decida si debe continuar con él o no. Esta propuesta permitiría conocer la opinión del primero de los Notables, que es el pueblo.¹⁸⁶

Eduardo Fernández en nombre de COPEI hacía un señalamiento similar al de la Causa R. Éste proponía la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para resolver el problema de la corrupción, sustituir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y definir una nueva política económica. No obstante, el disidente de su partido, Rafael Caldera, afianzaba la tesis de que CAP debía renunciar

186 *El Diario de Caracas*, “Velásquez propone referéndum para adelantar elecciones”. Caracas, 28 de marzo de 1992. p. 28.

al decir, “Creo que el presidente Pérez debería cederle el cargo a otra persona que pueda concretar en serio una salida a la crisis que vive el país”.¹⁸⁷

A la opinión de Caldera se sumaron Arturo Uslar Pietri, Paciano Padrón, la dirigencia del MAS e incluso el llamado cogollo ampliado del CEN de AD, quienes adujeron que si CAP no rectificaba iba a ser necesario adelantar las elecciones para recortarle el mandato. Esto lo señalaron después de analizar la jornada de protesta popular en contra del gobierno que se denominó “El cacerolazo”, realizado en casi todo el país el 10 de marzo de ese año.

Pero CAP se sentía más comprometido con los organismos financieros internacionales que con su partido y con el propio país. Apenas una semana después de haber asegurado que revisaría su política económica, se reunió con la dirigencia de su partido para anunciarles la imposibilidad de hacer cambios tan profundos, dado los acuerdos firmados con el FMI y el BM. Esta negativa de CAP hizo que AD evaluara la posibilidad de sumarse a la propuesta de recortarle el mandato constitucional.

Los asesores del FMI y el BM le habían ordenado a CAP mantener las medidas económicas intactas. Éste, sin embargo, declaraba ante los medios de comunicación que la decisión de no modificar las medidas se debía a que:

Sería el peor error de mi carrera si cambio todo lo que se ha hecho. **Nunca me creeré que ésta es una crisis provocada por un programa económico, estamos convencidos de que el programa económico que estamos llevando a cabo es el que necesita Venezuela.**¹⁸⁸ (El subrayado es nuestro).

187 Milagros Durán. “Pérez debe renunciar”. *El Nacional*. Caracas, 29 de febrero de 1992. p. D1.

188 *El Nacional*. “CAP considera un error dar marcha atrás al paquete”. Caracas, 15 de marzo de 1992. p. D6.

Las palabras de CAP demostraban que sus promesas de rectificación habían quedado en el olvido. Tampoco aceptaba la posibilidad de entregar el gobierno ni por la vía de la renuncia, ni por el recorte al período de mandato. “Ni renuncio ni me renuncian” y “el pueblo me eligió hasta febrero de 1994” eran siempre sus palabras en ese sentido. Y ante la posibilidad de realizar un referéndum revocatorio para conocer con mayor exactitud la voluntad popular, aducía que esas prácticas eran el suicidio de la democracia, por cuanto:

[...] Desconocidos absolutamente en el mundo entero, representan la mayor zozobra inimaginable para la estabilidad democrática... No nos llamemos a engaño. **Una consulta popular sobre la continuación de cualquier autoridad puede manipularse fácilmente por las ambiciones de poder para lograr el resultado negativo.** Si esa autoridad es el presidente de la República la estabilidad misma del sistema corre peligro [...].¹⁸⁹ (El subrayado es nuestro).

¡FUERA CAP!

A inicios de marzo las garantías constitucionales aún no habían sido restituidas. El decreto de suspensión aprobado por el Congreso no estipuló su duración, por lo que el 3 de marzo en Caracas, Los Teques, Maracay y San Cristóbal grupos de estudiantes salieron a marchar para exigir que fuesen restituidas. El saldo de esas jornadas fue de treinta y dos detenidos y veinticuatro heridos de manos de la GN, la PM y las policías regionales.

Durante los meses de marzo, abril y mayo las protestas estudiantiles acompañadas, más que en ocasiones anteriores, por sectores populares fueron el común denominador. La ciudadanía, los gremios y los estudiantes realizaron infinidad de protestas violentas y pacíficas,

189 *El Carabobeño*. 06.07.92. En: PROVEA. *Situación de los...* Ob. Cit. p. 16.

con cierres de calles, saqueos, quemas de vehículos, enfrentamientos con cuerpos policiales, etc. Tan sólo en tres meses que llevaba el año, ya se contabilizaban más de ciento treinta manifestaciones de calle.

Toda la crisis social, económica y política arrastrada de años anteriores, aunada a la falta de concreción de las promesas hechas por el gobierno en los días posteriores al golpe, propició el resurgimiento de las protestas populares, aun con la suspensión de las garantías. El gobierno, una vez más, interpretaba esta situación como la acción de grupos subversivos que intentaban desestabilizar al país. A consecuencia de ello, para dar mayor coherencia a sus denuncias, fueron detenidos a finales de mayo tres ex comandantes guerrilleros de la década de los sesenta, Douglas Bravo, Francisco Prada y Carlos Reitter.

Luis Piñerúa Ordaz, quien para ese momento era ministro del MRI, acusaba a estos tres ex comandantes guerrilleros de haber planificado un plan subversivo que iba dirigido a causar disturbios en puntos estratégicos de Caracas.¹⁹⁰ Los tres personajes desde los calabozos de la DISIP se defendían afirmando que no tenían nada que ver con lo que se les acusaba y que la verdadera subversión se encontraba en las políticas del gobierno. Pero quien supo sacar mejor provecho político de estas detenciones fue sin duda el ex presidente Caldera.

Durante su gobierno Caldera se había dedicado a perseguir a miembros del frente guerrillero, al extremo de allanar y cerrar la UCV durante un año acusando a estudiantes y profesores de ser cómplices de la guerrilla. No obstante, en esta ocasión aprovechando hábilmente el momento político que se desarrollaba, salió ante los medios de comunicación en defensa de los detenidos:

Los venezolanos están cansados de tanta ineficiencia gubernamental, tanta corrupción, del alza de los alimentos y de las medicinas, del desempleo y de la inseguridad personal, los poderes públicos, los partidos políticos y sus dirigentes han perdido credibilidad, el pueblo quiere

¹⁹⁰ Freddy Torres. "Desmantelado plan subversivo". *El Nacional*. Caracas, 29 de mayo de 1992. p. D1.

un gran acuerdo nacional y rechaza el pacto de AD-COPEI. **Pérez debería renunciar para que el Congreso designe una figura con méritos para asumir la presidencia durante el resto del período presidencial constitucional, la detención de los jefes guerrilleros es ilegal porque no se puede detener a alguien por averiguaciones sin tener pruebas.**¹⁹¹ (El subrayado es nuestro).

Evidentemente, la detención de los tres ex jefes guerrilleros no detuvo en modo alguno la avanzada de las protestas. Por el contrario, puede llegar a afirmarse que durante los días siguientes, en especial en el mes de junio, se desató a lo largo y ancho del país una mayor cantidad de manifestaciones estudiantiles y populares.

Durante ese mes episodios como el asesinato de tres estudiantes¹⁹² por parte de efectivos de la GN y la PM y un nuevo allanamiento perpetrado a LUZ aumentaron la intensidad de las protestas estudiantiles a nivel nacional. A tales extremos llegó esa situación que, ciudades como Upata, San Félix, El Tocuyo y Margarita, que poco figuraban entre los lugares neurálgicos de protestas estudiantiles, fueron tomadas en varias oportunidades por la GN para controlar los disturbios.

“Fuera CAP y viva Chávez” comenzaron a ser las consignas de las protestas estudiantiles. Después de concluidas las jornadas de protestas como por ejemplo aquella que recibió el nombre de “El pupitrazo”, las paredes de las ciudades quedaban rayadas con pintas que aludían al deseo de que CAP abandonara el poder.

191 *El Nacional*, “La protesta no puede calificarse de subversiva”. Caracas, 31 de mayo de 1992. p. A 1.

192 El primero, de nombre Rommel Figueroa Lizardy, estudiante de la Fundación La Salle en Ciudad Guayana quien fue asesinado a golpes por un GN en una manifestación de trabajadores en la que, según la prensa, él no estaba participando. El segundo, de nombre Pedro Jesús Velásquez asesinado de un disparo también por un agente de la GN y el último de nombre José Félix Hidalgo Patiño quien fue asesinado de un disparo por la PM.

Pero según afirma Luis Beltrán Acosta en su libro, algunos sectores políticos opuestos a CAP aupaban clandestinamente estas protestas para aumentar las tensiones:

[...] Hasta el venerable escritor y autor de “Las lanzas Coloradas”, dr. Arturo Uslar Pietri (quien durante el pasado gobierno de Luis Herrera Campins había solicitado el desalojo completo de una escuela primaria vecina a su residencia, argumentando que la bulla de los niñitos escolares le molestaba para su fecunda producción intelectual) estableció contacto personal con la Federación de Centros Universitarios. En esas reuniones con los estudiantes (realizadas en su residencia) Uslar estimulaba para que incrementaran las protestas contra Carlos Andrés Pérez, pero recomendaba que mantuvieran el buen comportamiento al no propiciar saqueos ni motines que afectaran al comercio, la banca ni la propiedad privada en general.¹⁹³

Para agudizar más la crisis, COPEI que había sido el único partido que había aceptado respaldar a CAP —a cambio de dos ministerios— se separó del gobierno y amenazó con votar, en caso de una consulta, por el recorte del período presidencial, por no estar de acuerdo con la aprobación del viaje de CAP para la Cumbre de Río de Janeiro que se celebró en junio de aquel año.

Sin embargo, CAP continuaba aferrado al poder y a sus políticas económicas. Constantemente declaraba que las reiteradas protestas que se producían eran producto de un plan subversivo, e incluso llegó a afirmar que, tal como en los años sesenta, la derrotaría. Finalmente, la popularidad de CAP alcanzó niveles tan bajos que su propio partido, en la celebración de los cincuenta y un años de su fundación, tomó distancia de él.

Mientras, los rumores sobre la posibilidad de un nuevo golpe de Estado corrían por doquier. Los titulares de la prensa diariamente

193 Acosta, Luis Beltrán. *Los estudiantes...* Ob. Cit. p. 76-77.

resaltaban alguna protesta en contra del gobierno y las declaraciones de los políticos que pedían la renuncia de CAP. Para completar el panorama, el 29 de septiembre es destituido en Brasil el presidente Fernando Collor de Mello por el delito de corrupción. Caldera de inmediato declaró que CAP debía verse en ese espejo.

Días después de la destitución de Collor de Mello, los periodistas José Vicente Rangel y Andrés Galdó se presentaron ante el Congreso para solicitar que se investigara al gobierno por el paradero de doscientos cincuenta millones de bolívares que se habían desaparecido durante los inicios de su mandato. Según la denuncia, CAP había pedido en febrero de 1989, antes de la eliminación de RECA-DI, una rectificación del presupuesto por el monto señalado en la denuncia y compró dólares preferenciales a 14,50 bs., para asignarlos supuestamente al MRI para asuntos de Seguridad de Estado, "...Dos semanas después el Régimen de Cambio Diferencial fue eliminado por decreto y hasta ahora nadie sabe dónde están esos 250 millones de bolívares."¹⁹⁴

De inmediato, la Contraloría del Congreso, lugar en el que ya CAP no tenía apoyo, aprobó por unanimidad designar una comisión para que investigara el paradero de los doscientos cincuenta millones de bolívares y para que solicitara a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía que hicieran lo mismo. Una de las estrategias que se había propuesto trazar la comisión era la de enviar un cuestionario a CAP con preguntas relacionadas a ese dinero. Pero CAP como siempre se negó de antemano a responder cualquier tipo de preguntas.

Llegado el mes de noviembre, los rumores de que un próximo golpe de Estado estaba cerca de realizarse se intensificaron, a extremos de que el propio CAP tuvo que desmentirlo ante los medios de comunicación "...Eso está descartado en Venezuela. El pueblo lo ha

194 Teresa de Vincenzo. "Al inicio del gobierno de CAP desaparecieron bs. 250 millones". *El Nacional*. Caracas, 12 de noviembre de 1992. p. D1.

rechazado y las Fuerzas Armadas han demostrado su total fidelidad a la Constitución y a la democracia.”¹⁹⁵

NUEVOS MILITARES GOLPEAN

A pesar de las declaraciones de CAP el 27 de noviembre un nuevo intento de golpe de Estado tuvo lugar, superando en violencia al del 4 de febrero. La primera acción del grupo de militares fue desarrollada en el canal de televisión del Estado, Venezolana de Televisión. Esta vez, los militares trataron de evitar el error cometido el 4 de febrero en el que no se llevó a cabo una estrategia comunicativa. A las cuatro de la madrugada un grupo de hombres armados tomó el centro de comunicaciones de aquel canal, ubicado en Los Mecedores de La Pastora. Desde ahí comenzaron a emitir repetidamente un mensaje que incitaba al levantamiento cívico-militar, grabado por el teniente coronel Hugo Chávez, quien para ese momento se encontraba detenido.

El resto de los militares tomaron las bases aéreas Libertador en Maracay y La Carlota en Caracas, así como la sede de la DISIP en el Helicoide. Ya a las seis de la mañana el canal del Estado era tomado por treinta y un efectivos del batallón de telecomunicaciones de Fuerte Tiuna, al mando del teniente Jesse Chacón Escamillo. Desde ahí mostraron un video donde aparecía un militar que se dirigía al país expresando que pertenecía al “Movimiento 5 de julio para la Reivindicación de la Democracia”.

Los responsables militares de esa asonada, a diferencia de la anterior, eran militares de alta graduación. Los contralmirantes Hernán Grüber Odremán (jefe de la operación) y Luis Enrique Cabrera Aguirre, el general de brigada de la Fuerza Aérea Francisco Visconti Osorio, el coronel del Ejército Higinio Castro y el mayor de la Guardia Nacional Carlos Salima Colina. Sus motivos eran, en esencia, similares a los de los militares del 4 de febrero:

¹⁹⁵ Rosita Caldera. “Yo no acepto ningún cuestionario, advirtió el presidente Pérez”. *El Nacional*. Caracas, 20 de noviembre de 1992. p. D1.

Los hombre y mujeres de uniformes hemos jurado defender la Constitución Nacional, y de ese compromiso se entiende como táctica y obligante la obediencia al gobierno; pero cuando ese gobierno viola los más elementales principios de la convivencia, cuando se le da la espalda al clamor popular para que haya paz en el seno de la sociedad, entonces, queridos compatriotas, no hay razón para seguir obedeciendo [...].¹⁹⁶

El hecho quizás más importante de este levantamiento lo representó la participación de efectivos de la aviación, quienes al tomar la base aérea Libertador se dirigieron a Caracas con el objeto de bombardear el Palacio de Miraflores, La Carlota y el Fuerte Tiuna.

El gobierno contó una vez más con fuerzas aliadas. Un equipo combinado de las FAN, la DISIP y la PM iniciaron en horas de la mañana acciones para rescatar el canal del Estado:

A las 8:30 de la mañana, doce efectivos al mando del teniente Chacón Escamillo apostado en el reducto ubicado en frente, se rindieron ante los efectivos de la Guardia Nacional y fueron hechos presos en el primer piso del canal. El joven oficial recibió aclamaciones de los vecinos cuando hizo un discreto saludo con su boina roja al numeroso grupo de personas que observaban desde sus apartamentos la llegada de una comisión de la Fiscalía.¹⁹⁷

El nuevo intento de golpe de Estado había fracasado igual que el primero. No obstante, tuvo un poco más de apoyo popular. *El Nacional* informaba ese mismo día, que en diversos puntos de Caracas, mientras se desarrollaba el golpe hubo saqueos y cacerolazos:

196 OJEDA, William. 27N *verdades*. Caracas, 1993. p. 47. En: PROVEA. *Situación de los derechos humanos en Venezuela. Informe Anual*. Caracas, EDISIL Impresos, 1993. p. 11.

197 Pedro Chacín. "Sangrienta toma y retoma del canal 8". *El Nacional* (Edición Especial). Caracas, 27 de noviembre de 1992. p. 3.

[...] coincidiendo en fecha con la jornada del 27 de febrero de 1989, los habitantes de las zonas humildes de la capital descendieron de los cerros para dirigirse a los negocios más cercanos y forzar las santas marías. Panaderías, colchonerías, ventas de electrodomésticos y automercados fueron los blancos de la ira popular. En La Silsa los vecinos dijeron responder “al llamado que nos hicieron para salir a las calles a sumarnos a la insurrección bolivariana”.¹⁹⁸

Tal como ocurrió en el golpe del 4 de febrero, el gobierno suspendió las garantías constitucionales. Acto seguido, desató una nueva campaña represiva que incluyó la toma violenta de Radio Rumbos para evitar la transmisión de los hechos y el allanamiento a la UCV. En esta acción efectivos militares penetraron en horas de la madrugada esa casa de estudios y ocasionaron destrozos en sus instalaciones.

Los estudiantes lógicamente se habían convertido en un elemento de sospecha del gobierno, por cuanto se asumía que las agrupaciones políticas BR y Tercer Camino habían sido el brazo civil del golpe y porque era hartamente sabido que buena parte del sector estudiantil al menos simpatizaba con estas tendencias. Por ello fue allanado también el núcleo de la UCV en Maracay y Carabobo y el IUPC.

CAP interpretaba este segundo intento de golpe de Estado como el resultado de los planes conspirativos de los partidos Bandera Roja y Tercer Camino, pero sus adversarios políticos lo asumieron como la gota que había derramado el vaso.

DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES PARA UN FINAL

El año 1992 había concluido con las garantías constitucionales suspendidas y el proceso de averiguaciones sobre los doscientos cincuenta millones de bolívares. Ramón Escobar Salom, como

¹⁹⁸ Vanesa Davies. “Saques en diferentes sitios de la ciudad”. *El Nacional*. Caracas, 27 de noviembre de 1992. p. D4.

representante del Ministerio Público, llevó a cabo la investigación. Había que salir de CAP antes de que un nuevo intento de golpe de Estado pusiera fin al sistema. Políticamente ya nadie apoyaba a CAP. El primer trimestre de 1993, como los años anteriores estuvo signado por el desarrollo de protestas estudiantiles en la calle y la represión de los cuerpos policiales.

El fiscal Escobar Salom terminó de recabar las pruebas de la investigación y el 11 de marzo con ellas en mano exigió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que enjuiciara a CAP por el delito de corrupción. Esta corte fue sometida a grandes presiones, entre ellas la popular, por cuanto, grupos de personas se apostaban diariamente a las puertas de la sede para exigir la condena de CAP.

Finalmente, el 20 de mayo la CSJ en sesión plena de sus miembros determinó que CAP tenía todos los méritos para ser enjuiciado por el delito de peculado y malversación de los doscientos cincuenta millones de bolívares de la partida secreta. La decisión estuvo dividida entre nueve votos a favor del enjuiciamiento y cinco salvados.

El Congreso, como lo contemplaba la Constitución procedió a destituirlo y a designar como presidente provisional a Octavio Lepage. Ese mismo día CAP dirigió un extenso mensaje a la nación en el que asumía la decisión de la CSJ como parte de la conspiración que desde el año anterior fue montada en su contra:

Ninguna conspiración, ninguna confabulación por variada y poderosa que sea, ninguna conjura, me arrancarán del alma del pueblo venezolano. Para él he vivido, por él he luchado de manera denodada. Por él continuaré luchando. Más temprano que tarde comprenderán que he actuado con la conciencia más cabal y más plena de que opté por el camino más conveniente. El futuro dirá, y lo dirá muy pronto, si he actuado con razón, si hemos interpretado correctamente el momento y las circunstancias del país. [...] **Ratifico ante mis compatriotas que no he incurrido ni en éste, ni en ningún otro caso, en manejos ilícitos, impropios o irregulares. No me he enriquecido jamás. Mi ambición siempre ha sido contribuir con mi esfuerzo a**

perfilear un rumbo moderno y promisorio para Venezuela.¹⁹⁹ (El subrayado es nuestro).

Mientras CAP mencionaba estas palabras, la situación en el país era de total agitación. En Barquisimeto, Táchira, Maracaibo, Puerto La Cruz, Barcelona, Margarita, Mérida, Maracay, Los Teques y Caracas la gente salía a las calles en caravanas y tocaban cacerolas en celebración porque por primera vez desde que había triunfado CAP, el pueblo sentía que se le había ganado una.

Al cabo de unos días, el senado del Congreso eligió como presidente interino al dr. Ramón J. Velásquez hasta que se celebraran nuevos comicios. La designación de este personaje vino acompañada de cierta tranquilidad social, por cuanto además de su trayectoria como intelectual, había sido miembro de aquel Consejo Consultivo que CAP juramentó y nunca tomó en cuenta.

199 <http://www.analitica.com/bitbliblioteca/cap/csj.asp>

CONCLUSIÓN

Como pudo observarse a lo largo de este trabajo, la protesta estudiantil en Venezuela ocupó un papel estelar en el desenvolvimiento de la crisis económica, social y política experimentada por el llamado sistema puntofijista, entre los años 1983 y 1993. Ésto debido a que los estudiantes de educación media y universitaria, asumieron la vanguardia en las manifestaciones de descontento social que comenzaron a desarrollarse a partir de la segunda mitad de la década de 1980.

El costo que tuvo que pagar este estudiantado por asumir tal liderazgo, fue la brutal represión de los cuerpos policiales del Estado, amén de las descalificaciones sistemáticas por parte de los miembros de los gobiernos de turno y sus colaboradores cercanos, como fue el caso del calificativo de “generación boba”, que les adjudicó el dr. Edmundo Chirinos, rector de la UCV, en 1984.

A pesar de ello, la protesta estudiantil ascendió en la misma medida en que se agudizaba la crisis. Ejemplo de lo señalado fue el comportamiento de los estudiantes entre los años 1983-1986. Durante este período la manifestación estudiantil más significativa fue la llamada Masacre de Tazón de 1984, debido a que durante este trienio el Viernes Negro aún no había causado sus más significativos estragos y, adicionalmente, existía la creencia de que con un nuevo aumento en los precios del petróleo se superaría con prontitud la crisis monetaria.

Sin embargo, la errática política económica del presidente Jaime Lusinchi y la caída de los precios internacionales del petróleo a finales de 1986, hicieron que a comienzos de 1987 la crisis se profundizara, dando paso mediante el hecho fortuito del asesinato de un estudiante en Mérida, al desbordamiento de la protesta estudiantil y popular que marcó los dos últimos años del mandato de Lusinchi.

La respuesta del gobierno ante estas constantes protestas no fue otra que la represión, lo que hizo que se contabilizaran durante esos cinco años, no menos de cinco estudiantes asesinados en manifestaciones de calle, más de cincuenta heridos y un número similar de detenidos.

Esta situación se agravó con la llegada de Carlos Andrés Pérez al poder. Su pretensión de establecer un gobierno con políticas abiertamente neoliberales, que suponían entre otras cosas, la privatización de las principales empresas del Estado y los servicios públicos, desató una cadena de protestas estudiantiles que llevaron como bandera principal la lucha por el respeto al medio pasaje estudiantil y el rechazo a la represión de los cuerpos policiales. No obstante, durante esta etapa el número de estudiantes asesinados, heridos y detenidos superó en más del doble la cifra presentada durante el gobierno de Lusinchi.

Las políticas económicas de Pérez nunca fueron rectificadas, a pesar de que en apenas un año produjeron dos intentos de golpe de Estado y un sinfín de manifestaciones estudiantiles y populares. Esto propició la ruptura –al menos en términos de acuerdo político– del Pacto de Punto Fijo. Dicha ruptura se cristalizó con la destitución y posterior enjuiciamiento que se le hizo a Pérez en 1993.

De lo anterior se desprende que la crisis económica, social y política vivida en Venezuela durante los años 1983 y 1993, estuvo caracterizada por el ascenso, cada vez más significativo, de las protestas estudiantiles de calle y la represión de los cuerpos policiales del Estado, quienes amparados en el resguardo del orden público cometieron todo tipo de excesos en contra de los estudiantes disidentes.

FUENTES

BIBLIOGRÁFICAS

- Acosta, Luis Beltrán. *Los estudiantes y el poder político en Venezuela (1814-1995)*. Cumaná, Productores Creativos, 1995. 87pp.
- Anmistía Internacional. *Venezuela (El eclipse de los derechos humanos)*. Madrid, Editorial Amnistía Internacional (EDAI) 1993. 48pp.
- Azócar, Gustavo. *El Amparo (Crónica de una masacre)*. Caracas, Editorial Planeta, 1990. 219 pp.
- Barreiro, Julio. *Violencia y política en América Latina*. México DF. Siglo XXI Editores S.A. 1971. 205pp.
- Caballero, Manuel. *Las crisis de la Venezuela contemporánea*. Caracas, Monte Ávila Editores Latinoamericana, 1998. 175pp.
- Canelón, Fidel y González, Franklin. “El modelo político puntofijista, desarrollo, agotamiento y perspectiva”. En: *Revista de Análisis de Coyuntura*, Vol. IV, n° 1 enero-julio, 1998. 38-42 pp.

- Carvalho, Gastón. *Clase dominante y democracia representativa en Venezuela*. Caracas, Cendes/ Fondo Editorial Tropykos, 1995. 195pp.
- Castillo, Eduardo y Nieves, Fulvia. “Universidad pública y financiamiento (El caso Venezuela)”. En: *Revista de Análisis de Coyuntura*, Vol. IV, n° 1 enero-julio, 1998. 13-28 pp.
- COFAVIC. *Boletín de derechos humanos (1989-1994)*.
- Fuentes, Henry y Yopez, Freddy. *Mérida: 13 de marzo*. Mérida, Imprenta Oficial del Estado Mérida, 1987, 332 pp.
- Fundafuturo. *Cuando Venezuela perdió el rumbo (Un análisis de la economía venezolana entre 1945 y 1991)*. Caracas, Ediciones Cavendes, 1992. 164pp.
- Gómez Calcaño, Luis. “Crisis de legitimidad e inestabilidad política en Venezuela”. En: *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, n° 2-3 (abril-septiembre) 1995. 103-164 pp.
- Hernández, Tosca. “La ideologización de la Ley sobre Vagos y Maleantes”. En: *Revista de Análisis de Coyuntura*, Vol. II n° 2 julio-diciembre, 1996. 24-38 pp.
- Huggins, Magally. (Comp.) *Violencia y políticas públicas en América Latina*. Caracas, Cendes, 1998. 106 pp.
- Izard, Miguel. *El poder, la mentira y la muerte (De El Amparo al Caracazo)*. Caracas, Fondo Editorial Tropykos, 1991. 116pp.
- Jiménez, Iván Darío. *Los golpes de Estado desde Castro hasta Caldera*. Caracas, Centralca, 1996. 431 pp.

- López Maya, Margarita. *Lucha popular, democracia, neoliberalismo (protesta popular en América Latina en los años de ajuste)*. Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 1999. 264 pp.
- _____ y Gómez Calcaño, Luis. *El tejido de Penélope (La reforma del Estado en Venezuela)*. Caracas, Cendes, 1990. 104pp.
- _____ y otros. *De punto fijo al pacto social (Desarrollo y hegemonía en Venezuela 1958-1985)*. Caracas, Editorial Acta Científica, 1989.
- _____ y otros. *Protesta y cultura en Venezuela (Los marcos de acción colectiva en 1999)*. Caracas, Cendes, 2002. 226pp.
- _____. “Notas teóricas-metodológicas para investigación (La protesta popular en Venezuela contemporánea)”. En: *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura*. Vol. II, n° 2 julio-diciembre, 1996.
- _____. “La protesta popular en Venezuela: enfoque conceptual-metodológico y sus fuentes”. En: Rodríguez José Ángel (Compilador). *Visiones del oficio*. Caracas, ANH, UCV, CEP, FHE, 2000, pp. 399-411, 732 pp.
- Machillanda, José. *Poder político y poder militar en Venezuela (1958-1985)*. Caracas, Ediciones Centauro, 1988. 205 pp.
- Malave Mata, Héctor. *Los extravíos del poder (Euforia y crisis del populismo en Venezuela)*. Caracas, Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela. 1987. 918pp.
- Mateo, Cristina. “Violencias desbocadas: Un rasgo del fin de siglo en Venezuela”. En: *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura*, Vol. V, N° 1 (enero-julio) 1999. 171-198 pp.

- Mommer, Bernard y Nissen, Hans-Peter. *¿Adiós a la bonanza? (Crisis de la distribución del ingreso en Venezuela)*. Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 1989. 202 pp.
- Moreno, Amado. *Neoliberalismo y conflictos sociales en Venezuela 1989-1993*. (Ponencia presentada al xx Congreso Latinoamericano de Sociología), México. 19 pp.
- Núñez Tenorio, J. L. *La lucha contra el puntofijismo corrupto neoliberal*. Caracas, Fondo Editorial A.L.E.M. Los Teques Edo. Miranda. 1998. 260 pp.
- Ochoa Antich, Enrique. *Los golpes de febrero, 27 de febrero 1989, 4 febrero 1992 (De la rebelión de los pobres al alzamiento militar)*. Caracas, Fuentes Editoriales 1992. 169 pp.
- Peña, Luis. *Construyendo historias (Orientaciones sobre técnicas y métodos de la investigación histórica)*. Caracas, UBEC, 2000. 174 pp.
- Portillo, Gustavo. *La crisis en tiempo de democracia (1958-1960 y 1983)*. Caracas, UCV, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico. 1998. 179 pp.
- Provea. *Situación de los Derechos Humanos en Venezuela (Informes Anuales) Octubre 1988-septiembre 1993*. Caracas, 1988-1993.
- Quintero, Gilberto. *La crisis de la democracia en Venezuela (1941-1993)*. Mérida, Universidad de Los Andes, Grupo de investigación sobre historiografía de Venezuela, 2000. 193 pp.
- Rausseo, Ricardo. “La política exterior en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993)”. En: *Política Exterior. Revista venezolana de relaciones internacionales y política exterior*. Caracas, Editorial Nuevas Letras, 2003. 213-229 pp.

- Stambouli, Andrés. *La política extraviada (Una historia de Medina a Chávez)*. Caracas, Fundación para la Cultura Urbana, 2002. 241 pp.
- Urbaneja, Diego Bautista. *La política venezolana desde 1958 hasta nuestros días*. Caracas, Fundación Centro Gumilla, 1997. 88 pp.
- Vellinga, Menno (Comp.) *El cambio del papel del Estado en América Latina*. México DF, Siglo XXI Editores, 1997. 396 pp.
- Villasmil, Nelson. *La opinión pública del venezolano actual (febrero 1989, marzo 1994)*. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, Fundación Kornard Adenauer, 2001. 252 pp.

HEMEROGRÁFICAS

El Diario de Caracas. (Desde 04-02-92 hasta 20-05-93)

El Nacional. (Desde 18-02-83 hasta 05-12-93)

El Universal. (Desde 13-03-87 hasta 20-03-87)

Revista Sic Centro Gumilla. Números 451, 453, 456, 464, 469, 475, 471, 489, 493, 494, 496, 497, 500, 508, 510, 516, 520, 523, 525, 526, 535, 542, 543, 544, 546, 553, 554, 555 y 559.

Últimas Noticias. (Desde 19-09-84 hasta 30-11-92).

WEB

<http://www.analitica.com/biblioteca>

Factores como el incremento de la deuda externa, la fuga de divisas, la caída internacional de los precios del petróleo y una desacertada política económica provocaron, en febrero de 1983, una delicada situación financiera para Venezuela, que se conoce como la crisis del *Viernes Negro*. Este acontecimiento marcó el comienzo de la deslegitimación del sistema político del Pacto de Punto Fijo, dando paso al estallido social de febrero de 1989, los dos intentos de golpe de Estado de febrero y noviembre de 1992 y la destitución, por primera vez en la historia democrática del país, de un Presidente electo por el voto popular en 1993.

Este trabajo analiza la crisis económica de 1983 y su incidencia en el incremento de las protestas estudiantiles que ocurrieron a partir de la llamada masacre de Tazón en 1984 y, posteriormente, el papel que jugaron dichas protestas en la agudización de la crisis general del sistema político puntofijista, destacando la brutal represión que fue empleada por los gobiernos de Jaime Lusinchi y de Carlos Andrés Pérez para aniquilar el descontento popular.

Yasmín Rada Arago es Licenciada en Historia egresada de la Universidad Central de Venezuela. Ha participado en investigaciones sobre Historia de la Agroalimentación en Venezuela, el Movimiento Estudiantil Venezolano y el Bicentenario de las Independencias de América Latina. Actualmente realiza la maestría de Historia de las Américas en la Universidad Católica Andrés Bello y es investigadora del Museo Nacional de Historia.

Orlando José Contreras es Licenciado en Historia egresado de la Universidad Central de Venezuela, con un curso superior de Paleografía en la Universidad Rómulo Gallegos. Ha colaborado con artículos publicados por la Alcaldía Metropolitana de Caracas, la Revista *Memorias de Venezuela*, y se desempeña como investigador en el Archivo General de la Nación.

República Bolivariana de Venezuela



★ PODERCULTURAL
PODERPOPULAR



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para la Cultura

